

DOCUMENTACIÓN DE LA TORTURA EN DETENIDOS
INCOMUNICADOS EN EL PAIS VASCO DESDE EL 2000 AL
2008:
ABORDAJE CIENTÍFICO

1.
Dictamen

Índice:

- [0.]. Resumen
- [1.]. Fundamento
- [2.]. Objetivos
 - a. Objetivos específicos
 - b. Contraste de las versiones contradictorias sobre el fenómeno de la tortura
- [3.]. Introducción
 - a. Marco legal
 - b. Postura oficial de las instituciones españolas
 - i. De ámbito estatal
 - ii. De la Comunidad Autónoma del País Vasco
 - c. Informes de Organismos Internacionales
 - i. CPT
 - ii. Naciones Unidas
 - iii. Organizaciones No Gubernamentales
 - 1. Amnistía Internacional
 - 2. Human Rights World
 - d. ONG nacionales y locales
- [4.]. Material y Métodos
 - a. .Realización del informe
 - b. Recogida de datos. Fuentes de estudio
 - c. Población y ámbito temporal de estudio. Sujetos de estudio
 - d. Variables analizadas
 - e. Análisis específicos de los testimonios / denuncias judiciales de malos tratos / tortura
 - f. Análisis específico de las alegaciones de malos tratos / tortura en los informes médico forenses
 - g. Estudio estadístico
 - h. Estudio epidemiológico
- [5.]. Resultados
 - a. Descripción de las características demográficas, procesales y criminológicas de los detenidos incomunicados

- b. Frecuencia de alegaciones de malos tratos / tortura y de denuncias judiciales. Factores asociados. Análisis epidemiológico
- c. Análisis específicos de los testimonios / denuncias judiciales de malos tratos / tortura: Métodos de tortura alegados. Factores asociados
 - i. Relaciones entre las variables independientes
 - ii. Momento en el que se refieren las vulneraciones de derechos
 - iii. Principales métodos de malos tratos / tortura relatados
 - iv. Influencia de las variables independientes demográficas, procesales y criminológicas
- d. Análisis específico de los informes médico-forenses. Métodos de tortura alegados. Factores asociados
 - i. Referencias de malos tratos / tortura descritas en los informes. Datos generales
 - ii. Referencias de malos tratos / tortura en relación a las variables sexo, edad, cuerpo policial y año de detención
 - iii. Métodos de tortura

[6.]. Discusión

- a. Principales hallazgos del presente Dictamen
- b. Implicaciones de nuestros hallazgos sobre las versiones contradictorias del fenómeno de la tortura
- c. Fiabilidad / credibilidad de los testimonios de denuncias de tortura en detenidos incomunicados
- d. Investigación judicial de las denuncias de tortura
- e. Limitaciones

[7.]. Conclusiones

[8.]. Recomendaciones

[9.]. Referencias

[0.] Resumen

Introducción y Fundamento

En el mandato dirigido a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco se encargó la elaboración “de un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política, con atención especial a la identificación de las víctimas y estudio de las medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento moral y reparación”. Fruto de ese mandato ha sido el primer informe global sobre estas violaciones de derechos humanos “*Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política*” que fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas del Parlamento Vasco por esta Dirección el 24 de junio de 2008. En el mismo se observó la necesidad de dedicar un apartado especial a las denuncias de tortura ya que hasta el momento no ha habido ninguna investigación institucional.

El fenómeno de la tortura está sometido a versiones contradictorias. La postura oficial de las autoridades españolas ha sido negar su existencia. Por el contrario, desde diversas asociaciones se ha concluido que la tortura en los detenidos incomunicados es un problema con una prevalencia alta. Desde organismos internacionales oficiales se ha señalado que “es prematuro concluir que la tortura ha desaparecido en España” o que “la frecuencia de la tortura es mas que esporádica u ocasional”.

Objetivos

Análisis científico que nos acerque a la realidad de la tortura en detenidos incomunicados: incidencia y factores asociados.

Aportar evidencias contrastadas que ayuden a soportar una de las hipótesis contradictorias existentes sobre el fenómeno de la tortura.

Material y métodos

Estudio retrospectivo sobre posibles casos de malos tratos y/o tortura en detenidos incomunicados desde el año 2000 al 2008. La investigación se dividió en tres bloques:

- Análisis de la existencia o no de alegaciones de malos tratos / tortura en todos los detenidos incomunicados durante el periodo de análisis.

- Análisis específico de los métodos de malos tratos / tortura descritos en los testimonios / denuncias judiciales de los detenidos incomunicados.
- Análisis específico de los métodos de malos tratos / tortura descritos en los informes médico forenses de los detenidos incomunicados.

Las fuentes consultadas fueron múltiples: medios de comunicación, informes de ONG locales y de organismos internacionales oficiales, Ministerio de Interior, diligencias judiciales e informes médico forenses.

Los factores demográficos, criminológicos y procesales analizados como variables independientes fueron las siguientes: sexo, edad, año y provincia de detención, cuerpo policial que realizó el arresto, Juzgado Central de Instrucción que conoció la causa, duración de la incomunicación, situación legal tras la incomunicación, situación procesal actual / final.

Resultados

Según el Ministerio de Interior hubo 1231 detenidos en relación con ETA. Mediante las fuentes consultadas identificamos 957 detenidos incomunicados. De ellos el 634 alegaron malos tratos / tortura, de los que 446 interpusieron denuncia judicial. La incidencia estimada de malos tratos / tortura entre varones jóvenes sería de 18 casos por 100.000 habitantes por año.

Destacaron los siguientes hallazgos: 1) la alta frecuencia entre los detenidos por la Guardia Civil (85%) y entre los que ingresan en prisión incomunicada (92%); 2) la relación directamente proporcional entre la frecuencia de alegaciones de tortura y la duración de la incomunicación; 3) la frecuencia entre el 55% y el 70% entre los detenidos que posteriormente fueron absueltos, no procesados o en los que se archivó la causa.

Existen dos situaciones que contrastan con esta alta prevalencia: la ausencia de denuncias de tortura contra la Ertzaintza desde el año 2004 (incluido) y el bajo porcentaje de denuncias entre los detenidos por el motivo denominado “comportamientos sin actividad violenta” (personas detenidas por la extensión del concepto de terrorismo a actividades del denominado entorno político / sociales) por la Policía Nacional y el Juzgado Central de Instrucción nº 5.

Se analizaron los métodos de malos tratos / tortura relatados en 289 testimonios de malos tratos / tortura (en el 90% de ellos se interpuso una denuncia judicial). Los métodos más frecuentes de tortura física fueron: golpes (85%), posición anómala / forzada (73%), plantón (50%), exposición a ruido (44%), asfixia con la “bolsa” (36%) y extenuación

física (35%). La tortura sexual tuvo una frecuencia del 68% (principalmente humillaciones sexuales y desnudez). Los métodos más frecuentes de tortura psicológica fueron las amenazas (97%), humillaciones (67%), deprivación visual (57%) y deprivación de sueño (56%). Las técnicas de tortura variaron principalmente en relación al cuerpo policial, identificándose un patrón diferencial para los distintos cuerpos policiales. La Guardia Civil fue la policía relacionada con un patrón más severo. Los métodos de tortura sexual variaron en relación con el sexo del detenido. Se identificaron cambios en relación con los métodos descritos hace varias décadas.

Se analizaron un total de 507 informes médico forenses. El 61% de los detenidos en alguno(s) de los informes médico forenses alegaron maltrato / tortura. En el 16% de los detenidos no existía ninguna referencia sobre la posible existencia de alegaciones de maltrato / tortura. Los métodos de tortura física más frecuentes fueron: golpes, posturas anómalas / forzadas, asfixia con la “bolsa” y los ejercicios físicos.

Discusión y Conclusiones

Los resultados obtenidos sobre la incidencia y extensión de la práctica de la tortura en la población analizada son, cuando menos, preocupantes y deberían ser considerados en “sí mismos” como un auténtico problema por las autoridades competentes. Se vienen a sumar a lo apuntado desde diversas instancias nacionales e internacionales: los malos tratos / tortura en los detenidos incomunicados ocurren con una frecuencia más que esporádica u ocasional.

Las evidencias no soportan la hipótesis de que todas o casi todas las denuncias son falsas y que obedecen a instrucciones genéricas, los indicadores estadísticos son contrarios a la misma.

Aunque el objetivo de este Dictamen no era probar, más allá de la duda razonable, si se han producido o no malos tratos en cada uno de los casos analizados, la impresión obtenida es concordante con lo manifestado por las instituciones internacionales: las denuncias no eran de naturaleza estereotipada, no pudiéndose considerar como meras fabulaciones.

La ausencia de salvaguardas efectivas contra la tortura, la carencia de una investigación exhaustiva de las denuncias y las dificultades probatorias de estas conductas dificultan la prevención del fenómeno de la tortura.

Los datos del presente Dictamen también sugieren la importancia de un compromiso político e institucional firme contra este tipo de violaciones de derechos humanos: A

partir del año 2004 (inclusive) las instituciones vascas muestran un compromiso firme contra la tortura, lo que coincide con la inexistencia de denuncias de tortura contra la Ertzaintza.

Los resultados de este trabajo subrayan la necesidad apuntada en el Informe de junio de 2008: El Gobierno Vasco debe habilitar una Oficina para proporcionar atención a las víctimas de violencia de motivación política. Se recomienda de cara a la documentación y reparación de las víctimas de la tortura que tras ser presentadas las demandas individuales sean analizadas y evaluadas de forma exhaustiva y rigurosa por un equipo multidisciplinar, con juristas, criminólogos, médicos, psicólogos, etc.

Además de las implicaciones para la instauración de medidas para el reconocimiento moral y reparación de las víctimas, los hallazgos también deberían tener efectos preventivos. La derogación de la detención incomunicada sería, sin duda alguna, un factor esencial de cara a disminuir las denuncias por este tipo de violaciones de derechos humanos.

[1.] Fundamento

El Parlamento Vasco en el transcurso del Pleno Monográfico sobre Víctimas del Terrorismo celebrado en octubre de 2007 expresó su solidaridad institucional con las víctimas del terrorismo, y sacó adelante varias resoluciones que reafirman el compromiso de las principales instituciones de Euskadi en favor de estas víctimas. Así mismo, aprobó otra resolución por la que se solicitaba un informe sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política.

En el mandato dirigido a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco se encargó la elaboración “de un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política, con atención especial a la identificación de las víctimas y estudio de las medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento moral y reparación”.

Fruto de ese mandato ha sido el primer informe global sobre estas violaciones de derechos humanos “*Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política*” que fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas del Parlamento Vasco por esta Dirección el 24 de junio de 2008 (1). En el mismo, se constató la existencia de un vacío en términos de investigación y reconocimiento oficial de las violaciones de derechos humanos por causa de violencia política en diferentes épocas de la historia reciente. Ese informe ha constituido el primer paso institucional para evaluar el número y tipo de violaciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política.

En cuanto a la dimensión del problema, hasta el momento no ha habido ninguna investigación institucional / oficial independiente o un estudio específico sobre esta cuestión, por lo que se vienen manejando cifras muy diferentes sobre el número de personas afectadas. En 2002 el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por “la dicotomía entre la afirmación del Estado Parte de que en España no tiene lugar la tortura o malos tratos salvo en casos muy aislados [...] y la información recibida de fuentes no gubernamentales que revela la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” (2).

En el Informe de junio de 2008 se observó la necesidad de dedicar un apartado especial a las denuncias de tortura y se efectuó un análisis específico sobre las mismas. Por otro lado, se constató la necesidad de poner en marcha mecanismos de investigación más amplios y con medios más adecuados en la labor de hacer un análisis exhaustivo de los casos. Las personas que habrían sufrido torturas se enfrentan a un déficit de reconocimiento, rehabilitación y reparación efectiva por parte de las estructuras del estado (1).

En este sentido, experiencias en otros lugares han mostrado la importancia de la investigación de los derechos humanos. Expertos internacionales han señalado que la investigación científica puede ser un instrumento esencial para: 1) la documentación sistemática de violaciones de derechos humanos; 2) la elaboración de programas de prevención de la tortura; 3) la elaboración de programas de reparación y reconocimiento de las víctimas; y 4) la puesta en marcha de programas de tratamiento médico y psiquiátrico de las víctimas de violaciones de los derechos humanos (3-20).

En concreto – y por lo que se refiere al ánimo de este dictamen - la aplicación de análisis epidemiológicos y estadísticos ha sido considerada útil para presentar resultados que permitan una valoración de los datos de forma más fidedigna y creíble. El objetivo sería presentar los hallazgos ante las instituciones gubernamentales nacionales e internacionales; así como ante organizaciones de derechos humanos, la comunidad científica o los tribunales.

El objetivo principal del presente dictamen (complementario al informe de junio de 2008) es la realización de un análisis científico que nos acerque a la realidad de la tortura, mediante la utilización de instrumentos epidemiológicos y estadísticos. Otro de los objetivos, derivado del análisis anterior, es el de aportar evidencias contrastadas y fiables que ayuden a soportar una de las hipótesis contradictorias existentes sobre el fenómeno de la tortura.

[2.] .Objetivos

El presente trabajo pretende evaluar los datos de los malos tratos / tortura en detenidos en régimen de incomunicación en ciudadanos vascos durante un periodo de 9 años; así como valorar su distribución en relación a variables demográficas, procesales y criminológicas. Se trata de desarrollar un análisis estadístico / científico que nos aproxime a la realidad de la tortura en los detenidos incomunicados. Hasta el momento no existe ningún análisis científico institucional sobre ello.

Por otro lado, el presente dictamen tiene como objetivo utilizar instrumentos estadísticos que ayuden a soportar una de las hipótesis contradictorias existentes sobre este fenómeno.

[2.a.] *Objetivos específicos*

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Número y porcentaje de detenidos bajo la legislación antiterrorista que han denunciado torturas.
- Análisis epidemiológico de la incidencia de malos tratos / tortura en detenidos incomunicados y su distribución por sexo, edad, lugar de detención, motivo de detención, situación legal tras la detención, año de detención, Juzgado Central de Instrucción que conoció el caso y cuerpo policial que realizó el arresto.
- Estudio de la frecuencia de los métodos de malos tratos / tortura alegados por los detenidos bajo la legislación antiterrorista y su distribución por sexo, edad, lugar de detención, motivo de detención, situación legal tras la detención, año de detención y cuerpo policial que realizó el arresto.
- La influencia de variables demográficas, procesales y criminológicas que podrían ser de relevancia en la documentación de violaciones de derechos humanos.
- Comparación de los hallazgos del presente trabajo con los resultados de informes y estudios previos de detenidos incomunicados.

- Valoración de la fiabilidad global de las alegaciones de tortura, contrastando como hipótesis la postura del Gobierno de España de que las denuncias son falsas.

[2.b.] Contraste de las versiones contradictorias sobre el fenómeno de la tortura

Como se ha señalado existen versiones contradictorias sobre el fenómeno de la tortura en el País Vasco (1).

La postura oficial del Gobierno de España ha sido negar la existencia de torturas en España. La opinión de las autoridades españolas defendida ante el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en el año 2004 y ante el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo en el año 2008 era que las denuncias de tortura de personas detenidas en aplicación de medidas antiterroristas eran falsas y se formulaban sistemáticamente en el marco de la estrategia diseñada por ETA para desprestigiar el sistema español de justicia penal y para restar solidez a las pruebas obtenidas durante la investigación de delitos de terrorismo (21-22). El Gobierno facilitó al Relator Especial un documento aparentemente encontrado en la residencia de miembros del comando terrorista "ARABA/98" detenidos el 19 de marzo de 1998. El documento instruye sobre la forma de denunciar torturas durante la detención (21). Este documento puede ser consultado íntegramente en la siguiente página <http://www.secuestro-emocional.org/main/DenunciasFalsas-Manual-ETA.htm> (23).

Entre las instrucciones que se señalan apuntamos las siguientes que son de trascendencia para el Dictamen:

“Ante una detención, por corta e insignificante que sea, aunque os pongan en libertad sin cargos ni fianza, ni ninguna otra medida represora, hay que denunciar torturas”.

“Hablar de interrogatorios, golpes, bolsa, bañera, potro, tortura psicológica”. Se añade “el resto lo dejamos a vuestra imaginación” (23).

Por el contrario, desde diversas asociaciones se ha concluido que la tortura en los detenidos incomunicados es un problema con una prevalencia alta. Una ONG de ámbito local ha puesto en duda que tal documento sea atribuible a ETA y expone una serie de textos similares que a lo largo de estos años han sido utilizados para contrarrestar las denuncias de torturas (1: ver nota 42 del Informe de junio 2008; pg. 154).

Desde organismos internacionales oficiales se ha señalado que la frecuencia de la tortura es más que esporádica u ocasional y que el gobierno debe resistir la tentación de considerar todas las denuncias de tortura como parte de una estrategia inspirada por ETA. El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo mantiene que “una estrategia del tipo defendida por las autoridades españolas, de ser cierta, plantearía sin duda dificultades para distinguir entre denuncias creíbles y falsas” (22).

Precisamente uno de los objetivos que nos marcamos en el Dictamen era el aportar datos que nos permitieran explicar si existen evidencias estadísticas para defender que las denuncias en su globalidad son o no falsas. Para el contraste de las distintas versiones como hipótesis de trabajo partimos de la postura de las autoridades de España que señala que las denuncias de tortura son falsas y obedecen a unas instrucciones de ETA a sus militantes de que deben de denunciar sistemáticamente torturas.

En vista de ello consideramos que:

- Los detenidos incomunicados que quedan en libertad sin cargos tras la incomunicación o que son absueltos o no procesados no deberían denunciar torturas o a lo sumo denunciarlas de forma muy ocasional o esporádica.
- Las denuncias de tortura debería ser sistemáticas entre las personas que son encarceladas o condenadas.
- El número de denuncias de tortura no debería estar influenciado por el tiempo de incomunicación, ya que la supuesta instrucción es que “Ante una detención, por corta e insignificante que sea ...hay que denunciar torturas”.
- Los tipos de tortura mencionados en el documento atribuido a ETA (“Hablar de interrogatorios, golpes, bolsa, bañera, potro, tortura psicológica”) deberían tener una frecuencia muy alta. Así mismo, el porcentaje debería ser similar para todos ellos. Por el contrario, los métodos de tortura no mencionados en el documento deberían tener una incidencia inferior a los que sí se mencionan.
- La distribución de los métodos de tortura en relación a las variables externas al detenido debería ser “al azar”, sin existir diferencias entre los detenidos por distintos cuerpos policiales ni entre varones y mujeres.

[3] Introducción

[3.a.] Marco legal

El sistema de detención utilizado en los casos de terrorismo es el régimen de incomunicación, amparado por los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este sistema de detención se alargan los plazos para poner al sospechoso a disposición judicial, impidiéndose además otros derechos del detenido que constituyen el corazón garantista de la integridad física de la persona sometida a detención: el derecho a comunicar con su familia o con un abogado o médico de su confianza. Lejos de ser acortado el periodo de tiempo de cinco días de detención incomunicada, tal y como recomiendan unánimemente los organismos internacionales de monitoreo –Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Relator especial para la Tortura tras su visita a España en octubre de 2003-, la reforma introducida por la Ley Orgánica 15/03 del 25 de Noviembre dilata este periodo al incluir la posibilidad de su prórroga tras pasar a disposición judicial por otros 8 días en prisión incomunicada, lo cual hace un total de 13 días.

[3.b.] Postura oficial de las Instituciones españolas

En rigor, deberíamos de distinguir del posicionamiento ante la existencia de la tortura – credibilidad de los testimonios presentados, reconocimiento de casos de tortura- del posicionamiento ante la incomunicación, como modalidad específica de detención. La denegación de la existencia de tortura viene acompañada de una defensa del régimen de incomunicación, justificado en la eficacia antiterrorista. Por el contrario, el posicionamiento a favor de reconocer la existencia de la tortura, con más o menos matices o reservas, conlleva una petición inequívoca de la abolición de la custodia bajo incomunicación. Si bien la primera actitud es la habitual entre los responsables políticos e institucionales del ámbito estatal, la segunda se corresponde con la opinión de las instituciones vascas, así como con la tónica general de organismos de derechos humanos vascos, estatales e internacionales que han vertido declaraciones o

recomendaciones al respecto y que analizaremos más adelante. En ese sentido, apuntar simplemente que se aprecia una importante brecha, generalmente insalvable, entre quienes sostienen la primera postura y quienes defienden la segunda.

[3.b.i.] Autoridades del ámbito estatal

Congreso de los Diputados.

Durante el año 2006 se produjeron dos debates parlamentarios en referencia a la detención incomunicada. El 25 de abril se presentó en el Parlamento español una proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto por la que se solicita la supresión de los artículos 509, 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la derogación de los artículos referentes a la detención incomunicada. La votación posterior, con los votos en contra de los partidos mayoritarios PP y PSOE echó atrás la propuesta de ley. Nuevamente, el 19 de septiembre se produjo en el Congreso español un nuevo debate sobre una proposición no de ley que exigía al Gobierno español la derogación del régimen de incomunicación a los ciudadanos arrestados bajo la acusación de terrorismo. Los votos del PSOE y el PP bloquearon el acceso a trámite de la propuesta, a pesar de que contó con el respaldo de la mayoría de los grupos minoritarios en el Congreso.

Declaraciones públicas de responsables gubernamentales.

Sin pretender ser exhaustivos, la actitud de los responsables políticos gubernamentales, indistintamente del signo político a que estén adscritos, ha sido la de considerar la existencia de la tortura una falacia, apreciándose tres momentos en esta actitud. Un primero, consistente en negar los hechos y sin dar relevancia penal a las denuncias; un segundo momento, en el que se levantaron imputaciones de calumnias contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y un tercer momento, más reciente, que ha consistido en considerar que las denuncias responden a una directriz de ETA, interesada en desprestigiar con denuncias falsas la labor de las FSE y que, por tanto, pueden llegar a ser constitutivas de un delito de colaboración con organización armada (1: ver nota 42 del informe de junio 2008; pg. 154).

Como ya se apuntaba en el Informe de Junio 2008 (1; Informe de junio de 2008; pg 32), “según recoge el informe de Amnistía Internacional, en entrevistas mantenidas con la organización en 2007, representantes de las instituciones del Defensor del Pueblo, las autoridades judiciales y la policía reconocieron en general que se habían dado casos de malos tratos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley. No obstante, muchos de ellos afirmaron que se trataba de hechos aislados y que la gran mayoría de las denuncias de malos tratos presentadas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley eran falsas (aunque no especificaban si se habían investigado exhaustivamente)”.

Este posicionamiento se apoyaría en la presunta falta de casos de tortura sentenciados por los tribunales de justicia competentes. Por otro lado, representantes gubernamentales no han dudado en intentar desacreditar la actuación de ciertos órganos –Relator contra la Tortura, o el más reciente del Comité de Derechos Humanos- ante críticas o recomendaciones para la prevención y erradicación de la tortura en España (24-26).

[3.b.ii.] Instituciones de la Comunidad Autónoma vasca

Esta actitud mencionada contrasta con la mantenida por las Instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca en los últimos años.

A finales de 2003, el Departamento del Interior del Gobierno Vasco, en consulta con el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, adoptó cierto número de garantías adicionales, recogidas en un Protocolo que debería aplicar la Ertzaintza a las personas detenidas en régimen de incomunicación. El Protocolo trata de la coordinación de las actividades de la Ertzaintza, el Servicio Vasco de Salud y el Instituto Vasco de Medicina Legal (27).

El 1 de Diciembre de 2006 el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno Español a derogar la Ley Antiterrorista y a eliminar el régimen de incomunicación y las competencias del tribunal especial antiterrorista Audiencia Nacional. El 6 de julio de 2007 el Gobierno vasco presentó el «Plan de acción en defensa y promoción de los derechos civiles y políticos» en la que se exigen medidas concretas para la erradicación de la tortura y en concreto para la abolición del régimen de incomunicación. El 25 de Octubre de 2007 la Comisión de Interior del Parlamento Vasco aprobó una proposición de ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, eliminando el régimen de incomunicación que se tendría que debatir en el Parlamento español. Sin embargo, los partidos mayoritarios en las Cortes españolas –PSOE y PP- se opusieron a esta petición porque “no hace sino desarmar una parte importante de la legislación antiterrorista”.

[3.c.] Informes de Organismos Internacionales

Como se apuntaba en el Informe de junio de 2008 (1), la tortura en España ha sido objeto de observación y escrutinio regular y sistemático por organismos intergubernamentales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, todo ello en cumplimiento de una serie de instrumentos internacionales que España ha firmado y ratificado. Asimismo, organismos como Amnistía Internacional han prestado atención con regularidad a este fenómeno y sus peculiaridades. Estos órganos de derechos humanos llevan ya mucho tiempo expresando una profunda preocupación por casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España y por la impunidad efectiva de los responsables en muchos de ellos. Así mismo, han mostrado su preocupación por la persistencia de las deficiencias en relación a las garantías de los detenidos, por la demora y la falta de investigación de estos hechos por parte de los tribunales ordinarios competentes.

Estos organismos internacionales se han mostrado unánimemente en contra del régimen de incomunicación, posicionándose en multitud de ocasiones en contra de esta modalidad de detención por sus conexiones con los malos tratos y la tortura.

Sin embargo, nos parece extremadamente importante valorar no únicamente sus posicionamientos en contra de este régimen, sino los hallazgos que han hecho en el desarrollo de sus funciones, la mayoría de los casos por medio de visitas directas, enfrentando directamente la cuestión de la credibilidad de las fuentes, verdadera piedra de toque de este polémico fenómeno,

[3.c.i.] CPT:

Desde la ratificación por parte de España del Convenio Europeo Contra la Tortura, el 2 de mayo de 1989, ha recibido la visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura –CPT- en once ocasiones. De ellas, se han hecho públicos nueve informes, siendo que los referentes a las dos últimas visitas todavía son mantenidos en la confidencialidad por el Gobierno español (28-34). Sus recomendaciones son reiterativas en torno a la abolición del régimen de incomunicación.

Pero el contenido más relevante de sus informes, para lo que nos interesa en este Dictamen, es la parte referida a los hallazgos encontrados de primera mano por las diferentes delegaciones que han realizado las visitas. Por poner otro ejemplo de estos hallazgos, desde su primera visita cursada del 1 al 12 de abril de 1991 CPT/Inf (96) 9 [Part 1] en la que menciona que “la delegación escuchó un cierto número de alegaciones de naturaleza reciente sobre malos tratos severos y tortura, y no únicamente, lo cual debería subrayarse, de personas detenidas bajo la sospecha de delitos de naturaleza terrorista. Sería, por lo tanto, prematuro concluir que el fenómeno de la tortura y los malos tratos ha sido erradicado”. El CPT tras sus visitas a España en 1991 y 1994 y tras examinar las alegaciones de tortura - consistente en golpes, asfixia mediante la bolsa, descargas eléctricas, ejercicios físicos extenuantes etc. - de varios detenidos, consideró que las alegaciones eran de naturaleza no estereotipada, sino que eran detalladas y largamente concordantes, con variaciones que las hacían creíbles en vista de las circunstancias personales.

Esta opinión, según los datos recabados ha sido reiterada en varios de sus informes. Por poner un ejemplo, en el Informe CPT/Inf (2003) 22 tras la visita a España llevada a cabo del 22 al 26 de Julio de 2001 menciona: “la delegación del CPT entrevistó un número de personas detenidas en los meses recientes bajo sospecha de delitos relacionados con terrorismo. Algunas de ellas alegaron que habían sufrido malos tratos bajo custodia de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sus alegaciones incluían golpes en varias partes del cuerpo y, en algunos casos, formas más severas de malos tratos. Se incluían alegaciones de asfixia por la colocación de la bolsa de plástico en la cabeza y, en el caso de las personas detenidas por la Guardia Civil, descargas eléctricas. Como en algunas de sus visitas previas, la delegación obtuvo amplia evidencia, incluso de naturaleza médica coherente con las alegaciones de malos tratos recibidos. En

particular, y a pesar del tiempo transcurrido, en varios casos los médicos de la delegación observaron restos de heridas que estaban en consonancia con las alegaciones hechas por las personas en cuestión”.

En el mismo ámbito del Consejo de Europa, también el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles redactó un informe tras su visita a España del 10 a 19 de Marzo de 2005, de referencia CommDH(2005)8 coincidente con los hechos hallados por el CPT. En su informe recomendaba “revisar el régimen actual de la incomunicación, permitiendo que el detenido puede entrevistarse, al menos una vez, a solas con su abogado” (35).

[3.c.ii.] Naciones Unidas

De la misma manera que el CPT, organismos de Naciones Unidas para el monitoreo sobre la existencia de tortura se han posicionado contra la aplicación de la detención incomunicada y han mostrado su convicción sobre la persistencia de la tortura en España.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el examen sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su 29º período de sesiones emitió el informe CAT/C/XXIX/Misc.3 de 19 de noviembre de 2002 en el que reconoce que “El Comité sigue profundamente preocupado por el mantenimiento de la detención incomunicada hasta un máximo de 5 días, para determinadas categorías de delitos especialmente graves, durante la cual el detenido no tiene acceso ni a un abogado ni a un médico de su confianza ni a notificar a su familia. Si bien el Estado Parte explica que esta incomunicación no implica el aislamiento absoluto del detenido, ya que este cuenta con asistencia de un abogado de oficio y de un médico forense, el Comité considera que el régimen de la incomunicación, independientemente de los resguardos legales para decretarla, facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos” (36).

Posteriormente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas analizó el informe E/CN.4/2004/56/Add.2 de 6 de febrero de 2004, presentado por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven tras su visita a España (21). El

experto “atribuye gran valor a las opiniones de interlocutores fidedignos del poder judicial, el mundo académico y la sociedad civil en el sentido de que ciertos actores y militantes que apoyan la causa radical vasca puedan muy bien seguir la táctica de presentar sistemáticamente denuncias inventadas de torturas y malos tratos. Al mismo tiempo, esos interlocutores han transmitido también al Relator Especial su opinión de que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en particular en sus actividades antiterroristas, recurren más que esporádicamente a prácticas que constituyen torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta opinión es compartida por un considerable número de ONG con las que se entrevistó el Relator Especial y fue confirmada por una serie de testimonios que le presentaron personas arrestadas, detenidas e interrogadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sus afirmaciones se referían a malos tratos infligidos en forma de golpes, ejercicios físicos extenuantes, asfixia con la bolsa de plástico y acoso sexual humillante. A la luz de la coherencia interna de la información recibida y de la precisión de los detalles de hecho, el Relator Especial ha llegado a la meditada consideración de que esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones. El Relator Especial no concluye que los tratos que acaba de describir constituyan una práctica regular pero, a su juicio, su ocurrencia es más que esporádica e incidental”. Remarcaba esta idea, reconociendo que “recibió información fidedigna que le induce a creer que, aunque la tortura y los malos tratos no son sistemáticos en España, el sistema de detención practicado permite casos de tortura o malos tratos, en particular de personas detenidas en régimen de incomunicación por actividades terroristas”. A partir de aquí realiza ciertas recomendaciones que ayudarían a la erradicación de este fenómeno, entre ellas menciona que “la detención incomunicada crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y puede en sí constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante o incluso de tortura, el régimen de incomunicación se debería ser abolido”.

Uno de los últimos posicionamientos internacionales del sistema de Naciones Unidas proviene del quinto examen periódico realizado por el Comité de Derechos Humanos en octubre de 2008 (37). En su informe CCPR/C/ESP/CO/5/ de conclusiones se refiere que “el Comité observa con preocupación que continúan denunciándose casos de tortura y que el Estado parte no parece haber elaborado una estrategia global, ni haber tomado medidas suficientes para asegurar la erradicación definitiva de esta práctica”. Añade además que “El Comité no comparte la opinión del Estado parte en cuanto a la

necesidad de mantener el régimen de incomunicación, justificado en aras del "interés de la justicia". El Comité entiende que este régimen puede propiciar los malos tratos y lamenta que se mantenga, a pesar de las recomendaciones de diversos órganos y expertos internacionales para que se suprima". El estado español cursó respuesta a esta recomendación contundente, por medio del documento CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1 de 13 de enero de 2009, en el que, en la línea de los posicionamientos anteriormente mencionados, de negar la existencia de la tortura y asimismo desautorizar a quien la denuncia, considera que el análisis del Comité "no se corresponde con la realidad", añadiendo que "El Gobierno español considera que el Comité recoge ampliamente, por el contrario, opiniones distorsionadas de esta cuestión, que hacen que el proyecto de observaciones sea desequilibrado" (25).

Por último, el más reciente de los posicionamientos internacionales del sistema de Naciones Unidas proviene del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin tras su visita al Estado español en mayo del pasado año (22). En su informe A/HRC/10/3/Add.2 de fecha de 16 de diciembre de 2008 asegura que "el Relator Especial examinó en detalle el uso de la detención en régimen de incomunicación", ante el cual "expresa su preocupación por las alegaciones de tortura y otros malos tratos hechas por sospechosos de terrorismo mantenidos en régimen de incomunicación". Subraya que "Al Relator Especial le preocupan las denuncias de interrogatorios constantes sin la presencia de un abogado, combinados con amenazas asociadas al origen de los detenidos, privación de sueño y, en algunos casos, el uso de la fuerza física [...]. Teniendo en cuenta que muchos de los detenidos fueron más tarde puestos en libertad por falta de pruebas y ni siquiera fueron llamados a declarar, al Relator Especial le preocupa que, en algunos casos, pudiera haberse recurrido al régimen de incomunicación para obtener información que pudiera ayudar en las investigaciones". El experto recuerda al gobierno del Estado español que tiene "la obligación positiva de realizar una investigación pronta, independiente, imparcial y completa cuando haya motivos razonables para creer que se han infligido tratos prohibidos, así como de velar por que las víctimas de la tortura y los malos tratos tengan acceso a un recurso efectivo y reciban una reparación adecuada, incluso una indemnización".

[3.c.iii.] Organizaciones no Gubernamentales

Varias Organizaciones No Gubernamentales han recogido también datos sobre el terreno sobre el que poder hacer una apreciación sobre la existencia de la tortura en relación a la represión de delitos vinculados a acciones terroristas. Veamos aquellas de ámbito internacional que han trabajado sobre el terreno y que han aportado una visión en base a sus propias averiguaciones realizadas.

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional es, sin duda, la organización que en más ocasiones ha mencionado la existencia de la tortura en España y, asimismo, la que más ha insistido en mecanismos de prevención y erradicación (38-40).

Por poner algún ejemplo de sus menciones, en el informe anual de 2005 (38) recordaba que se habían recibido “muchas denuncias relacionados con la práctica de la detención en régimen de incomunicación”, considerando que “la precisión de los detalles de hecho facilitados en relación con varias denuncias sugerían que éstas no pueden considerarse meras fabulaciones”. A este comentario añadían que “La consigna de silencio que rodea al tema y el rechazo por las autoridades de las denuncias de torturas sin investigarlas ha hecho particularmente difícil la necesaria supervisión de la protección y las garantías”. Amnistía Internacional valoraba al respecto que “el gobierno anterior, que rechazó enérgicamente las conclusiones del informe, siguió negándose a introducir salvaguardas para los detenidos en régimen de incomunicación y, al final del año, el nuevo gobierno no había tomado ninguna medida para poner en práctica las recomendaciones del relator”.

En su último informe anual, referido al año 2007 (40) la organización internacional considera que “los informes de tortura y otros malos tratos por agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían estando extendidos”. En concreto menciona que “durante las investigaciones sobre el caso de 22 personas detenidas en enero de 2006 por cargos relacionados con terrorismo, varias de ellas contaron al juez de instrucción que habían sufrido torturas y otros malos tratos a manos de agentes de la Guardia Civil mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación. Al final del año no se tenía

conocimiento de que se hubiera realizado una investigación criminal sobre tales denuncias”.

Human Right Watch

Tal y como la organización no gubernamental expresa desde la primera línea en el informe “¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas en España” HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 17 NO. 1(D) enero de 2005 (41), se recoge que “en este informe se examinan aspectos del régimen antiterrorista de España que dan lugar a violaciones de las obligaciones contraídas por España en el derecho internacional de derechos humanos. Se hacen recomendaciones concretas al gobierno de España sobre maneras de hacer compatibles sus medidas antiterroristas con las normas internacionales”.

Si bien el informe en muchos puntos se focaliza en el tratamiento a detenidos acusados de terrorismo internacional, HRW reconoce que se les han aplicado “las estrictas medidas antiterroristas de España, conformadas por años de lucha contra la violencia de ETA (...). En virtud de estas medidas, recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, los detenidos sospechosos de pertenencia a una banda armada pueden estar recluidos en situación de incomunicación durante un máximo de 13 días y pueden estar en prisión provisional durante un máximo de cuatro años”. Prosigue denunciando que “durante la detención incomunicada, los detenidos están aislados y no tienen derecho a asesoramiento jurídico desde el comienzo de la detención ni a un abogado de su elección. [...] La ley y la práctica de la detención incomunicada en España hacen que sea prácticamente inútil para el detenido presentar un recurso de hábeas corpus cuestionando la legitimidad de su detención”.

[3.d.] ONG nacionales y locales:

Otras organizaciones de ámbito estatal y vasco trabajan también recogiendo la información directamente sobre el terreno. Los principales puntos de preocupación vienen recogidas también por esos organismos y asociaciones muchas de ellas agrupadas en la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Dicha plataforma ha recogido en sus informes anuales miles de casos individuales de tortura, entre ellos los concernientes a la detención bajo régimen de incomunicación, así como elaborado análisis y extraído recomendaciones (42-47). Torturaren Aurkako Taldea – TAT – es una ONG del País Vasco que forma

parte de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y que ha publicado informes anuales sobre el fenómeno de la tortura, principalmente en detenidos incomunicados (48-55).

[4].- Material y métodos

El presente Dictamen está basado en un estudio retrospectivo sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales en lo referido a alegaciones de malos tratos y/o tortura. La investigación se dividió en tres bloques:

- Análisis de la existencia o no de alegaciones de malos tratos / tortura en todos los detenidos incomunicados durante el periodo de análisis.
- Análisis específico de los métodos de malos tratos / tortura descritos en los testimonios / denuncias judiciales de los detenidos incomunicados.
- Análisis específico de los métodos de malos tratos / tortura descritos en los informes médico forenses de los detenidos incomunicados.

[4.a.] Realización del informe

Al igual que se realizó en el informe de junio de 2008 (1, pg 21) la Dirección de Derechos Humanos, además de contar con su estructura orgánica, constituyó una Secretaría Técnica que se ha encargado de coordinar y dinamizar la elaboración y redacción del informe, así como contactar con las organizaciones que pudieran tener a su disposición datos e informaciones necesarias para la elaboración del mismo. Ha sido la responsable de reunir – y acceder a – las diversas fuentes de información que se detallan el apartado siguiente. De igual manera la Secretaría Técnica ha contado con líneas de asesoramiento técnico en el tratamiento de vulneraciones de derechos humanos.

Se vuelve a recordar la necesidad de cumplir en todo momento con la normativa de protección de datos a la hora de, en su caso, utilizar, ceder, registrar o reproducir la información que mediante este informe se entrega.

[4.b.] Recogida de datos. Fuentes de estudio.

Para la recogida de datos se ha investigado en:

- Los periódicos y anuarios principales publicados en el País Vasco. Los datos obtenidos fueron posteriormente contrastados por otras fuentes.
- Página web del Ministerio de Interior (en la misma se especifica las fechas de comandos desarticulados en la lucha antiterrorista) (56).

- Informes del Relator Especial Contra la Tortura de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, Coordinadora para la Prevención de la Tortura y del TAT (“Torturaren Aurkako Taldea”) (38-40,43-55,57-69).
- Documentación obrante en el expediente judicial en aquellos casos en que hubo denuncia judicial. Esta documentación fue proporcionada por algunos de los abogados que ejercían la acusación particular. El equipo investigador pudo tener acceso a todo el expediente y obtener los datos de interés para el presente Dictamen (incluyendo una copia de la denuncia y los informes médico forenses cuando estaban aportados a la causa).
- Información referente a las variables analizadas en este trabajo (ver apartado 4d) facilitada por abogados defensores que tramitaban las causas de los detenidos.

No fue posible el acceso a las fuentes primarias de la Audiencia Nacional.

[4.c.] Población y ámbito temporal de estudio. Sujetos de estudio.

Todos los ciudadanos vascos detenidos en régimen de incomunicación en virtud de la “legislación antiterrorista” desde enero de 2000 a diciembre de 2008 en España fueron incluidos en el estudio. Como quedó definido en el informe de junio (1, Informe junio 2008; pg. 23) los datos aquí recogidos se circunscriben a:

- a) actuaciones sucedidas en Euskal Herria,
 - b) actuaciones en otros espacios geográficos pero cuyo objetivo son personas, vascas o no, pero con motivación o reivindicación relacionada con la problemática vasca o ETA.
- Según el Censo de Población del año 2001 la población total del ámbito territorial analizado es de 2.638.416 personas (70) (<http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp>).

[4.d.] Variables analizadas

De todos los casos de detenidos incomunicados identificados se analizaron los datos señalados en la *tabla 4.1*.

[4.e.] Análisis específico de testimonios / denuncias judiciales de malos tratos / tortura

En los casos en que el detenido interpuso una denuncia judicial se obtuvo por medio de los abogados una copia de la denuncia. No se pudo realizar un muestreo aleatorio de todas las denuncias ya que hubo algunos abogados que declinaron la invitación a colaborar y otros a los que no se pudo localizar. De aquellos abogados que accedieron a colaborar se obtuvo el material de todos los casos en los que en el momento del contacto tenían disponible. En los casos en que no se interpuso denuncia los testimonios se obtuvieron por medio del TAT.

Se analizaron los métodos de tortura alegados en los testimonios de acuerdo con la codificación de los métodos de tortura propuesta por el IRCT (71), parcialmente modificada (*tabla 4.2*).

Por otro lado, se codificó los siguientes datos:

- Detención violenta: si / no / desconocido
- Malos tratos / tortura en el lugar de detención: : si / no / desconocido
- Malos tratos / tortura en el traslado: : si / no / desconocido

Malos tratos / tortura en el lugar de destino: : si / no / desconocido

Tabla 4.1. Variables analizadas de todos los detenidos incomunicados bajo la “legislación antiterrorista”

Sexo	Situación legal tras la incomunicación
Edad (en años)	<ul style="list-style-type: none"> • Libertad sin cargos (sin pasar a disposición judicial)
Fecha de detención (día, mes, año)	
Hora de detención	<ul style="list-style-type: none"> • Libertad sin cargos (tras pasar a disposición judicial)
Provincia de detención	
Motivo de la detención:	<ul style="list-style-type: none"> • Libertad provisional (con fianza u otra medida) • Prisión comunicada • Prisión incomunicada
<ul style="list-style-type: none"> • Pertenencia en banda armada • Colaboración con banda armada • Sabotajes (kale borroka) • Comportamientos sin actividad violenta * 	Situación procesal actual / final
Detención en régimen de incomunicación:	<ul style="list-style-type: none"> • Absuelto • No fue procesado • Procesado pendiente de resolución • Sobreseimiento provisional • Sobreseimiento definitivo • Condenado • En curso sin haber sido procesado todavía • Archivo de la causa • Sin datos
<ul style="list-style-type: none"> • Si • No 	
Cuerpo policial que realizó el arresto	Alegaciones de malos tratos / tortura
<ul style="list-style-type: none"> • Guardia Civil • Policía Nacional • Ertzaintza • Otras Policías de España • Policía Francesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Si • No
Juzgado Central de Instrucción	Denuncia judicial por malos tratos / tortura
Duración de la detención (en días)	<ul style="list-style-type: none"> • Si • No

* El motivo denominado “Comportamientos sin actividad violenta” (22) hace referencia a aquellas personas detenidas por la extensión del concepto de terrorismo a actividades del denominado entorno político / social.

Tabla 4.2. Métodos de tortura alegados en los testimonios

TORTURA PSICOLÓGICA

Deprivación

Deprivación sensorial

Visual

Deprivación perceptiva

De sueño / Interrogatorio constante

Nutrición (sólidos y líquidos)

Insuficiente tratamiento de enfermedades

Higiene y condiciones del entorno

Acceso insuficiente / irregular al servicio, incluyendo por menstruación

Impedimento al aseo personal

Exposición a climas extremos: frío / calor, humedad / sequedad ambiental

Técnicas coercitivas

Opción imposible / realización de actos

incongruentes (conflicto trágico, dilema)

Presenciar la tortura o la ejecución de otras personas, incluyendo la participación en el evento

Impedimento de ayudar a otros

Traicionar, hacer revelaciones o “cantar”

información / firmar confesiones / Aprendizaje

Solicitud de obediencia ciega

Amenazas

Hacia la víctima

Simulacro de ejecución

Contra la integridad mental de la víctima

De producir una lesión permanente, una invalidez o cojera.

Contra otros

Humillaciones contra la dignidad de la víctima y su identidad.

Tortura sexual

Técnicas de comunicación

Cualquier repuesta que se dé, provoca un efecto contrario

Opiniones sobre buena / mala cooperación son motivo de continuar con la tortura

Situaciones de doble vínculo

Situaciones de policía bueno / policía malo

Informaciones y mensajes contradictorios

Información falsa

Rumores, cuchicheos, mensajes confusos

Ciertos beneficios se pueden sólo obtener mediante determinados comportamientos

Mal uso intencionado de métodos médicos de tratamiento en personas enfermas

TORTURA FISICA

Codificación de la parte del cuerpo:

Cabeza y cara

Cuello y garganta

Espalda

Tórax / abdomen

Extremidades superiores

Extremidades inferiores

Genitales / ano

Combinación de varios lugares

Abuso generalizado / sistemático en todo el cuerpo

Métodos de tortura físico

Golpes y empujones

Pellizcos y apretujones

Trauma penetrante

Inserción de objetos en orificios corporales

Sobreestiramiento del cuerpo o de una parte (incluyendo métodos de suspensión)

Agotamiento físico

Mantenimiento de posturas forzadas

Extenuación física

Plantón

Asfixia

Estrangulamiento

Obstrucción de la vía aérea (incluyendo nariz / boca)

Ahogamiento

Exposición a sustancias químicas

Exposición a temperaturas extremas

Frío

Calor

Exposición a electricidad (electrodos)

Exposición a luz intensa

Exposición a ruido

[4.f.] Análisis específico de las alegaciones de malos tratos / tortura en los informes médico forenses

Durante el periodo que dura la detención incomunicada los médicos forenses examinan regularmente (en general, suelo existir un reconocimiento diario) a los detenidos en las comisarías y de nuevo en dependencias de la propia Audiencia Nacional, el día en que los detenidos acuden a prestar declaración ante el Juzgado Central de Instrucción. Estos informes son generalmente efectuados por los médicos forenses de la Audiencia Nacional cuando el detenido se encuentra en Madrid y por los médicos forenses de los Juzgados ordinarios cuando el detenido se encuentra en una comisaría que no es de Madrid.

Los informes médico forenses analizados fueron obtenidos de las diligencias judiciales de las denuncias de tortura a través de los abogados que tramitaban la causa. Se analizaron todos los informes médicos existentes, tal y como se ha comentado en el apartado anterior.

En relación a los informes médico-forenses se recogieron los siguientes datos.

- Número de informes por detenido
- Referencias en relación a la posible existencia de malos tratos / tortura. Se clasificaron según las siguientes categorías de alegaciones de malos tratos / tortura:
 - “Si”: En aquellos casos en que existía alguna descripción de alegaciones de malos tratos / tortura en uno o algunos de los informe(s) del detenido.
 - “No”. Cuando existía una descripción (parcial o absoluta) sugerente de la no existencia de malos tratos / tortura.
 - No refiere mal trato físico ni psicológico
 - No refiere mal trato
 - No refiere mal trato físico
 - No refiere golpes
 - Preguntado por el trato, refiere “trato correcto” o “bien”.
 - Inconcluyente
 - “No indicado”. Cuando en el informe no existía mención alguna a la calidad del trato policial.

- “Ambiguo”. Cuando la terminología usada no permitía conocer el alcance de las manifestaciones del detenido (p.ej.: “mejor de lo que esperaba”; “del todo malo no”; “ponga normal”);
- “No colabora”. Cuando constaba que el detenido no contestaba a la pregunta de la posible existencia de malos tratos / tortura.

Las alegaciones de malos tratos / tortura fueron categorizadas de acuerdo a la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Métodos de malos tratos / tortura descritos en los informes médico forenses

Tortura física

Métodos de violencia física

Golpes

Electricidad

Otros

Extenuación física

Posturas anómalas / forzadas / plantón

Extenuación física

Asfixia

“Bolsa”

Otras

Tortura psicológica

Amenazas

Otras

Tortura sexual

Métodos físicos

Métodos psicológicos

Desnudez forzada

[4.g.] Análisis estadístico

Los resultados se expresaron como media (desviación estándar) de los valores individuales o como porcentajes.

El test X^2 con y sin la corrección de Yates, y el test exacto de Fisher fueron utilizados en el estudio estadístico a fin de evaluar la asociación entre las variables independientes: el período de tiempo, el sexo, la fuerza de policía y la situación legal tras la detención. También se emplearon para comparar la frecuencia de los diferentes métodos de tortura en relación con las variables demográficas, procesales y criminológicas. En este análisis, la variable año de detención fue codificada por trienios: años 2000-2002, años 2003-2005 y años 2006-2008.

Las variables cuantitativas se compararon utilizando el test de Student.

La prueba de regresión logística fue utilizada para aquellos supuestos en que se detectaron interacciones significativas entre las variables analizadas.

Todos los análisis se realizaron utilizando el programa SPSS (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales). El nivel de significancia se eligió como $p < 0.05$. Solo los métodos con una frecuencia superior al 10% se consideraron en el análisis estadístico.

[4.h.] Estudio epidemiológico

Las tasas de incidencia de tortura para el total de la población, para cada uno de los sexos y grupos de edad fueron calculadas en base a los datos del censo de población de las provincias estudiadas (70).

[5.]. Resultados

[5.a.] Descripción de las características demográficas, procesales y criminológicas de los detenidos incomunicados

De acuerdo a las fuentes consultadas durante los 9 años analizados 957 personas fueron detenidas en régimen de incomunicación en virtud de la legislación antiterrorista. Los datos demográficos y judiciales aparecen en la *tabla 5.1*. Hubo una mayoría de varones (79 %). En un alto porcentaje (77%) no se conoció la edad. La media de edad fue de 25 años. Los años con más detenidos fueron el 2001 y 2002. Guipúzcoa fue la provincia con mayor número de detenciones. El motivo de detención más habitual fue la colaboración con banda armada, seguido de los sabotajes (“kale borroka”). La Policía Nacional fue la que más detenciones efectuó y el Juzgado Central de Instrucción nº 5 el que más detenidos recibió (39%). Por el contrario, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 solo recibió el 5% de los detenidos. La situación legal más frecuente tras la declaración ante el Juzgado Central de Instrucción fue la de prisión comunicada (61%). La situación procesal actual los grupos más numerosos son los de condenado, procesado pendiente de resolución y no fue procesado.

El número de detenidos que alegó malos tratos / tortura fue 634; de los que 446 interpusieron denuncia judicial.

[5.b.] Frecuencia de alegaciones de malos tratos / tortura y de denuncias judiciales. Factores asociados. Análisis epidemiológico

En la *tabla 5.2*. se reflejan los hallazgos sobre el porcentaje de detenidos que alegaron malos tratos / tortura. No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de alegaciones de malos tratos / tortura en relación al sexo, edad o trienio de detención. Por provincias sobresale la mayor frecuencia de denuncias en Navarra (82%) que en el resto ($p < 0.01$).

En todas las variables procesales y criminológicas analizadas se observaron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de alegaciones de malos tratos / tortura: motivo de la detención, cuerpo policial que realizó el arresto, Juzgado Central de Instrucción, duración de la incomunicación, situación legal tras la incomunicación y situación procesal actual / final.

Cabe destacar los siguientes hallazgos con respecto a la frecuencia de alegaciones de malos tratos / tortura *tabla 5.2.*:

- La baja frecuencia (16%) en los detenidos por el motivo denominado “Comportamientos sin actividad violenta” (personas detenidas por la extensión del concepto de terrorismo a actividades del denominado entorno político / social).
- La alta frecuencia en los detenidos por la Guardia Civil (85%).
- La frecuencia inferior (55%) entre los detenidos del Juzgado Central de Instrucción nº 5 que entre los de otros juzgados.
- La relación directamente proporcional entre la frecuencia de alegaciones de tortura y la duración de la incomunicación.
- La menor frecuencia entre los detenidos que quedan en libertad sin cargos (sin pasar a disposición judicial) y la mayor entre los que ingresan en prisión incomunicada.

Significativo son también los siguientes datos sobre la frecuencia de alegaciones de malos tratos / tortura en personas en las que posteriormente no se apreció una actividad delictiva *tabla 5.2.*:

- el 35% de los detenidos que quedan en libertad sin cargos sin pasar a disposición judicial,
- el 64% de los detenidos que quedan en libertad sin cargos tras pasar a disposición judicial,
- el 69% de los que son absueltos,
- el 55% de los que no fueron procesados,
- el 70% de los casos en que se archivó la causa.

Otros hallazgos a subrayar son los siguientes:

- A partir del año 2004 (incluido) no existen denuncias judiciales ni públicas de alegaciones de malos tratos / tortura entre los detenidos por la Ertzaintza.

- De los 125 detenidos por el motivo denominado “Comportamientos sin actividad violenta” bajo instrucción del Juzgado de Instrucción nº 5 por la Policía Nacional el 91% no alegó malos tratos / tortura.

De los 634 incomunicados que alegaron malos tratos / tortura, 446 (70%) interpusieron denuncia judicial por este motivo. En la *tabla 5.3.* se reflejan los datos sobre el porcentaje de detenidos que presentó denuncia judicial entre los detenidos que alegaron malos tratos / tortura. No existieron diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje de detenidos que interpuso denuncia judicial en relación al sexo, edad, año de detención, provincia y Juzgado Central de Instrucción. Los porcentajes más altos de denuncias por malos tratos / tortura se dieron entre los detenidos por pertenencia, entre los detenidos por la Guardia Civil, entre los que sufren periodos de incomunicación más largos y entre los que ingresan en prisión. Sin embargo también un porcentaje considerable de los que quedan en libertad sin cargos, entre los que son absueltos o no procesados y entre los que se archiva la causa denunciaron judicialmente la existencia de malos tratos / tortura.

Análisis epidemiológico

La incidencia de detenidos incomunicados que alegaron malos tratos / tortura para la población total del ámbito geográfico analizado fue de 2,6 casos por 100.000 habitantes por año. La cifra más alta se dio en la provincia de Guipúzcoa con 3,9 casos por 100.000 habitantes por año.

De acuerdo a los datos conseguidos, el 55% de la muestra analizada eran varones de entre 20 y 29 años de edad. La incidencia de casos que alegaron malos tratos / tortura fue máxima entre varones jóvenes, con una cifra estimada de 18 casos por 100.000 habitantes por año.

Tabla 5.1. Datos demográficos, criminológicos y procesales

	N	%
Sexo		
Varones	760	79
Mujeres	197	21
Edad (en años)		
Media (desviación estándar)	25 (6) años	
Año de detención		
2000	124	13
2001	176	18
2002	183	19
2003	148	15
2004	74	8
2005	62	6
2006	20	2
2007	74	8
2008	95	10
Desconocido	1	0
Provincia de detención		
Álava	78	8
Guipúzcoa	394	41
Navarra	133	14
Vizcaya	271	28
Otras	81	9
Motivo de la detención		
Pertenencia en banda armada	166	17
Colaboración con banda armada	324	34
Sabotajes (kale borroka)	228	24
Sabotajes + otros	65	7
Comportamientos sin actividad violenta	157	16
Cuerpo policial que realizó el arresto		
Guardia Civil	260	27
Policía Nacional	512	54
Ertzaintza	181	19
Policía Francesa	4	0
Juzgado Central de Instrucción		
1	107	11
2	49	5
3	122	13
4	82	9
5	373	39
6	115	12
Otros Juzgados	41	4
Desconocido	68	7

	N	%
Duración de la incomunicación (en días)		
De 0 a 1	28	3
De 1 a 2	77	8
De 2 a 3	233	24
De 3 a 4	286	30
De 4 a 5	248	26
De 5 a 6	65	7
Desconocido	20	2
Situación legal tras la incomunicación		
Libertad sin cargos (sin pasar a disposición judicial)	62	6
Libertad sin cargos (tras pasar a disposición judicial)	72	7
Libertad provisional (con fianza u otra medida)	196	20
Prisión comunicada	582	61
Prisión incomunicada	38	4
Desconocido	7	1
Situación procesal actual / final		
Absuelto	59	6
No fue procesado	186	19
Procesado pendiente de resolución	203	21
Sobreseimiento provisional	33	3
Sobreseimiento definitivo	30	3
Condenado	276	29
En curso sin haber sido procesado todavía	98	10
Archivo de la causa	23	2
Sin datos	49	5
Alegaciones de malos tratos / tortura		
Si	634	66
No	323	34
Denuncia judicial		
Si	446	47
No	511	53

Tabla 5.2. Porcentaje de detenidos incomunicados que refiere alegaciones de maltrato / tortura

	Porcentaje que refiere alegaciones de maltrato / tortura (% de fila)
Año de detención	
2000	69
2001	58
2002	71
2003	63
2004	76
2005	84
2006	20
2007	61
2008	68
Provincia de detención	
Álava	50
Guipúzcoa	61
Navarra	82
Vizcaya	69
Motivo de la detención	
Pertenencia en banda armada	79
Colaboración con banda armada	77
Sabotajes (kale borroka)	72
Sabotajes + otros	88
Comportamientos sin actividad violenta	16
Cuerpo policial que realizó el arresto	
Guardia Civil	85
Policía Nacional	58
Ertzaintza	62

	Porcentaje que refiere alegaciones de maltrato / tortura (% de fila)
Juzgado Central de Instrucción	
1	78
2	69
3	88
4	83
5	55
6	77
Duración de la incomunicación (en días)	
De 0 a 1	7
De 1 a 2	35
De 2 a 3	57
De 3 a 4	65
De 4 a 5	90
De 5 a 6	67
Situación legal tras la incomunicación	
Libertad sin cargos (sin pasar a disposición judicial)	35
Libertad sin cargos (tras pasar a disposición judicial)	64
Libertad provisional (con fianza u otra medida)	65
Prisión comunicada	69
Prisión incomunicada	92
Situación procesal actual / final	
Absuelto	69
No fue procesado	55
Procesado pendiente de resolución	55
Sobreseimiento provisional	82
Sobreseimiento definitivo	70
Condenado	79
En curso sin haber sido procesado todavía	69
Archivo de la causa	70

Tabla 5.3. Porcentaje de detenidos incomunicados que interpone denuncia judicial de malos tratos / tortura

	Porcentaje de denuncia judicial (% de fila)
Motivo de la detención	$p < 0.05$
Pertenencia en banda armada	80
Colaboración con banda armada	65
Sabotajes (kale borroka)	71
Sabotajes + otros	70
Comportamientos sin actividad violenta	72
Cuerpo policial que realizó el arresto	$P \leq 0.01$
Guardia Civil	80
Policia Nacional	65
Ertzaintza	66
Duración de la incomunicación (en días)	$P \leq 0.001$
De 1 a 2	52
De 2 a 3	59
De 3 a 4	68
De 4 a 5	83
De 5 a 6	71

	Porcentaje de denuncia judicial (% de fila)
Situación legal tras la incomunicación	$P \leq 0.001$
Libertad sin cargos (sin pasar a disposición judicial)	45
Libertad sin cargos (tras pasar a disposición judicial)	39
Libertad provisional (con fianza u otra medida)	66
Prisión comunicada	76
Prisión incomunicada	77
Situación procesal actual / final	$P \leq 0.001$
Absuelto	66
No fue procesado	52
Procesado pendiente de resolución	60
Sobreseimiento provisional	70
Sobreseimiento definitivo	86
Condenado	79
En curso sin haber sido procesado todavía	76
Archivo de la causa	87

% representa el porcentaje de detenidos que presentó denuncia judicial entre los detenidos que alegaron malos tratos / tortura.

[5.c.] Análisis específico de los testimonios / denuncias judiciales de malos tratos / tortura: Métodos de tortura alegados. Factores asociados.

Se analizaron los métodos de malos tratos / tortura relatados por 288 detenidos incomunicados durante los años 2000-2008. En el 90% de ellos hubo denuncia judicial. La frecuencia de varones fue del 81%. La media de edad fue de 26,2 años (desviación estándar de 6,3 años). Por trienios la distribución de casos fue la siguiente: del 2000 al 2002 122 casos, del 2003 al 2005 118 y del 2006 al 2008 48. Las fuerzas policiales implicadas más comúnmente en la detención fueron la Guardia Civil (121 casos) y la Policía Nacional (118 casos), seguidas de la Ertzaintza (45 casos) y otras policías (4 casos). Cuando se conocía la hora de arresto una alta frecuencia ocurrió en horas nocturnas: 130 de los 192 casos en los que se conocía la hora del arresto fueron detenidos entre las 23 y las 07 horas; 86 de ellos entre las 01 a las 04 horas de la noche.

[5.c.i.]. Relaciones entre las variables independientes

No existían diferencias significativas en la distribución de frecuencias entre sexo y cuerpo policial ni entre sexo y año de detención. Por el contrario, sí que existieron en la frecuencia de detenidos por cada cuerpo policial en base a los trienios establecidos ($p < 0.001$) (*tabla 5.4.*).

Tabla 5.4. Frecuencia de detenidos por cuerpo policial en relación al periodo de tiempo

	2000-02		2003-05		2006-08	
	N	%	N	%	N	%
GC	65	53,3%	31	27,2%	25	52,1%
PN	29	23,8%	66	57,9%	23	47,9%
Ertzaintza	28	23,0%	17	14,9%		

La media de edad no varió significativamente en razón al sexo y el trienio de detención. Los detenidos por la Guardia Civil tuvieron una media de edad significativamente más

alta que los detenidos por la Policía Nacional y la Ertzaintza (28; 25,3 y 23,7 años, respectivamente).

[5.c.ii.] Momento en el que se refieren las vulneraciones de derechos

Noventa y dos (32%) detenidos refirieron un arresto con violencia en la persona o en las cosas: 58 detenidos (20%) alegaron malos tratos / tortura en el mismo lugar del arresto; 153 (53%) durante el traslado (casi siempre desde la localidad en que se produjo el arresto hasta Madrid) y 285 (99%) en el lugar de destino.

Una de las actividades que en este estudio se han incluido como maltrato es la obligación al detenido de efectuar el traslado desde la ciudad de origen hasta Madrid en posición anómala: flexión de la columna vertebral debiendo colocar la cabeza entre los muslos. Otras de las actuaciones descritas durante el traslado fueron la privación de visión, las amenazas y los golpes.

[5.c.iii.] Principales métodos de malos tratos / tortura relatados

En la *tabla 5.5.* aparecen los métodos de malos tratos / tortura referidos que tenían una frecuencia > del 10%.

Tabla 5.5. Métodos de malos tratos / tortura referidos. Frecuencia y porcentaje.

	N	%
Tortura física	281	97
Golpes	245	85
Posición anómala / forzada	210	73
Plantón	145	50
Exposición a ruido	126	44
Asfixia con la “bolsa”	105	36
Extenuación física	102	35
Empujones	75	26
Tirones de pelo	63	22
Golpes contra objetos	58	20
Métodos de privación	255	88
Visual	164	57
De sueño	161	56
Interrogatorio constante	124	43
Tortura sexual	197	68
Humillaciones sexuales	131	45
Desnudez parcial o total	104	36
Golpes en región genital	82	28
Tocamientos	80	28
Amenazas	279	97
De tortura o daño físico	214	74
Contra otros	193	67
De ejecución	107	37
Humillaciones	192	67
Técnicas coercitivas	236	82
Aprendizaje / firmar confesiones falsas	152	53
Oír actos de tortura	128	44
Actos incongruentes	73	25
Simulacro de ejecución	44	15
Obediencia ciega	40	14
Otras	61	21
Técnicas de comunicación	206	71
Policía bueno / policía malo	126	44
Información falsa	125	43

Métodos de violencia física. Golpes

Los distintos métodos de tortura física con violencia se especifican en la *tabla 5.5*. En la *tabla 5.6*. aparecen los hallazgos en relación a los golpes.

Los golpes se habrían propinado principalmente con la mano (y con menor frecuencia con un listín o similar) en la cabeza. Los golpes con los pies fueron más frecuentes en las piernas. Los golpes en región genital se describen en el capítulo de malos tratos / tortura sexual.

Tabla 5.6. Golpes: instrumento lesivo y región golpeada.

	N	%
Golpes	245	85
<i>Instrumento lesivo</i>		
Mano	174	60
Puño	67	23
Pié	59	20
Listín o similar	56	19
Otros	20	7
No especificado	45	16

	N	%
<i>Región golpeada</i>		
Cabeza / cara	214	74
Tórax - abdomen	65	23
Piernas	35	12
Espalda	31	11
Generalizado	29	10
Cuello	28	10
No especificado	18	6
Zonas sensibles	10	3
Brazos	3	1

Técnicas de agotamiento físico

Las técnicas de agotamiento físico fueron unas de las más habitualmente denunciadas, con una frecuencia del 87% (N = 251). De los distintos métodos este fue su orden en sentido decreciente: La obligación a estar en posiciones anómalas / forzadas durante periodos más o menos prolongados de tiempo, la obligación a estar de pie durante periodos prolongados de tiempo “plantón” y la extenuación física (obligación de realizar ejercicios físicos forzados) (*tabla 5.5*).

En relación a la obligación a estar en posiciones anómalas / forzadas durante periodos más o menos prolongados de tiempo había dos momentos en los que eran relatados: uno era durante el traslado desde el lugar de detención a Madrid. En este sentido, era frecuente la postura de estar obligado a estar durante el viaje con la columna flexionada y la cabeza entre las piernas, postura que al ser prolongada producía dolor. Otro

momento en el que se relataba era durante los interrogatorios, llegando en no pocas ocasiones al agotamiento físico y al dolor en las articulaciones afectadas.

Por lo que respecta al plantón también se relataba en dos momentos: uno durante los interrogatorios y otro durante la estancia en la celda, en la que el detenido era impedido a sentarse o tumbarse.

Técnicas de asfixia

La frecuencia de las técnicas de asfixia habría sido del 41% (N = 119). La “bolsa” - con 105 casos referidos – fue la principal. Otro tipo de métodos (p.ej. presión torácica) (n = 22), la obstrucción de boca-nariz (n = 16) o la bañera (n = 4) fueron manifestados esporádicamente.

Electricidad

Atendiendo al relato dado por los detenidos, 13 personas habrían sufrido descargas eléctricas.

Estrés climático, agresión acústica y exposición a luz

En la revisión de las denuncias judiciales / testimonios analizados se recogieron quejas sobre la existencia de situaciones compatibles con estrés climático en 97 casos (34%): frío en 57 (20% del total), calor en 34 (12%) y humedad en 30 (10%). En bastantes ocasiones la sensación de frío era sentida por el detenido mientras estaba en los calabozos, quejándose de que no se le proporcionó la ropa de abrigo necesaria. En relación a la humedad, en bastantes casos el detenido refirió haber sido mojado con agua fría durante la práctica de interrogatorios, normalmente vinculado a la escenificación o simulacro bajo amenaza de aplicación de electrodos.

El 44% de los detenidos refirió alguna práctica policial que fue categorizada por los evaluadores como exposición a ruido (agresión acústica). Las 2 situaciones que se observaron fueron las siguientes: la primera la práctica de realizar ruidos constantes mientras el detenido estaba en la celda; que bien podía ser de ruidos por puertas o cerrojos que se abrían y cerraban constantemente impidiendo la conciliación del sueño o bien de música a un volumen muy alto; la segunda actuación categorizada como ruidos constantes se daba en los interrogatorios y consistía en gritos al oído y golpes de los agentes contra muebles o paredes mientras se interrogaba al detenido.

Por lo que respecta a la exposición a luz (n = 75) incluimos aquellos casos en los que la queja del detenido era que mientras estaba en la celda la luz estaba siempre encendida, lo que unido a otros factores, impedía el sueño y descanso del detenido durante los días que duraba la detención.

Sándwich

En esta categoría incluimos la siguiente práctica para restringir la movilidad y defensa del detenido mientras era sometido a otra práctica de tortura física: el detenido era envuelto con una manta o un colchón espuma o colocado entre 2 colchones espuma mientras era interrogado y sometido a otra clase de torturas. Fue relatado por 45 detenidos (16% del total).

Técnicas de deprivación

Las técnicas de deprivación fueron recogidas en 255 testimonios / denuncias judiciales (88% del total). En la *tabla 5.5.* se especifican el porcentaje de las más frecuentes: privación de visión, de sueño y los interrogatorios constantes. La privación de comida en algún momento de la detención, la higiene deficiente y el tratamiento insuficiente de enfermedades (en algunas ocasiones se incluyó la imposibilidad de usar las gafas) tuvieron una frecuencia entre el 6 y el 7%.

Malos tratos / tortura sexual

Un 68% de la muestra de detenidos analizado refirió algún método de tortura sexual. Las humillaciones fue el método más frecuente: 67 detenidos refirieron haber sufrido humillaciones de contenido sexual sobre él / ella; 28 sobre su pareja o un familiar y 36 tanto sobre él como sobre su pareja o un familiar. Otros métodos con una alta frecuencia fueron la desnudez forzada durante los interrogatorios, los golpes en región genital y los tocamientos. En torno a los últimos, se aprecia una versión agravada de estos, que es el tocamiento con palos o pistolas como escenificación o simulacro añadido a la amenaza de que serían introducidos por la vagina o por el ano.

Otros métodos descritos mucho menos frecuentemente fueron la introducción de un objeto en el ano (9 casos), la tortura eléctrica (2 casos) y la introducción de un objeto en vagina (1 caso). Otro tipo de métodos fue relatado por 21 detenidos.

Técnicas de coacción: Amenazas, humillaciones y otras

Las amenazas fueron referidas prácticamente por todos los detenidos. Las humillaciones / insultos, la obligación a firmar confesiones falsas y el oír actos de tortura también tuvieron frecuencia alta. En la categoría de “aprendizaje / obligación a firmar confesiones falsas” se incluyeron aquellos casos en los que el detenido relataba la obligación a memorizar una declaración impuesta por la policía o las instrucciones bajo coacciones de lo que debían (o no debían decir) al médico forense, juez, abogado, etc. En el capítulo de oír actos de tortura se incluyen casos en los que el detenido durante los interrogatorios o estancia en celda oía gritos o lloros o quejas de personas que él creía que podían estar torturando. En algunas ocasiones posteriormente el detenido reflexionaba que podían estar en relación con una puesta en escena. En la categoría de actos incongruentes se incluyeron aquellos testimonios en los que el detenido era coaccionando para que cantara o realizara actos de contenido ideológico. En el capítulo de otras sobre todo se incluyeron actuaciones por la que habrían inducido sentimientos de culpabilidad al detenido (se le hace saber de que por su actividad un familiar suyo o su pareja ha sufrido o puede sufrir un daño; p.ej. ser detenido o que ha sufrido un problema de salud).

Técnicas de comunicación

Este tipo de métodos fue alegado por 206 detenidos (71%). La estratagema de policía bueno – policía malo y el uso de información falsa fueron los procedimientos más frecuentemente recogidos (*tabla 5.5.*). La información falsa generalmente habría consistido en noticias sobre que sus familiares / parejas habían sido detenidos o sufrido alguna enfermedad grave o que habían fallecido. La mayoría de casos de “otorgar beneficios” eran ofrecimientos de colaboración policial.

[5.c.iv.]. Influencia de las variables independientes demográficas, procesales y criminológicas.

Sexo (*figura 5.1.*)

La frecuencia de varones que alegaron malos tratos / tortura en el mismo lugar del arresto fue superior al de las mujeres (27% versus 6%; $p < 0.01$).

En la *figura 5.1.* se reflejan los métodos de malos tratos / tortura que tuvieron significación estadística en relación al sexo. Las mayores diferencias fueron en la

tortura sexual; la mayoría de los métodos variaron marcadamente para ambos sexos. Mientras que entre los varones predominaron los métodos de violencia física (golpes en región genital o retorcionas o presión de testículos) en las mujeres predominaron las humillaciones y los tocamientos. Así mismo, la distribución de la tipología de las humillaciones sexuales varió entre varones y mujeres ($p < 0.001$). Los detenidos varones frecuentemente refirieron haber sufrido humillaciones en relación a una tercera persona, frecuentemente su pareja (que en ocasiones también había sido detenida con ellos) (61% versus 15% entre los que refieren humillaciones sexuales). En las mujeres los comentarios humillantes o degradantes siempre habrían sido en relación a ella. El porcentaje de alegaciones de las siguientes técnicas fue estadísticamente superior entre varones que entre mujeres: golpes, privación de sueño, interrogatorio constante, amenazas de ejecución y amenazas contra otros. Por el contrario, la frecuencia de tirones de pelo fue superior entre mujeres.

Edad del detenido

Sólo dos métodos de tortura mostraron diferencias estadísticamente significativas en relación a la media de edad: la asfixia con la bolsa y la desnudez forzada. En ambos casos la media fue más alta entre los que lo sufrieron que entre los que no lo sufrieron (27 versus 25 años para ambas técnicas; $p < 0,05$).

Cuerpo policial (*figura 5.2*) (*figura 5.3*).

Sin duda alguna la variable independiente más decisiva en la distribución de los distintos métodos de malos tratos / tortura fue el cuerpo policial que realizó la detención.

La frecuencia de maltrato / tortura alegada durante el traslado fue superior entre los detenidos por la Guardia Civil (74%) y Policía Nacional (62%) que por la Ertzaintza (18%) ($p < 0.001$).

La frecuencia de alegaciones de golpes fue más alta entre los detenidos por la Guardia Civil y más baja entre los detenidos por la Ertzaintza. Una vez seleccionados aquellos que refirieron golpes, se observó una diferente distribución del instrumento lesivo y de la región vulnerada en relación al cuerpo policial. Así, los golpes con la mano fue mas frecuentemente referido por los detenidos por la Guardia Civil y Policía Nacional; los golpes con listín o similar por los detenidos por la Guardia Civil y los golpes con los

pies por los detenidos por la Ertzaintza. También se apreciaron diferencias con respecto a la zona vulnerada.

Otras diferencias estadísticamente significativas se observaron para las alegaciones de empujones y golpes contra objetos (más alta en el grupo de la Ertzaintza).

Para las técnicas de agotamiento físico se encontró un distinto patrón de actuación en relación al cuerpo policial. La Policía Nacional fue el cuerpo policial que menos lo utilizó. La postura anómala fue alegada hasta por el 93% de los detenidos por la Ertzaintza. Además, su uso fue referido característicamente por los detenidos durante los interrogatorios. Por el contrario, la Ertzaintza – al igual que la Policía Nacional - apenas utilizó la obligación a realizar ejercicios físicos forzados (“flexiones” o similares). En cambio, este tipo de práctica fue denunciada hasta por el 57% de los detenidos por la Guardia Civil.

Con las técnicas de asfixia se observó de nuevo una clara diferencia en el uso por cada cuerpo policial en base a los relatos hechos por los detenidos. Hasta el 81% de los detenidos por la Guardia Civil refirieron algún método de asfixia, y hasta un 78% denunciaron haber sufrido la práctica de la bolsa. Por el contrario, los detenidos por la Ertzaintza nunca alegaron haber sufrido la bolsa.

Los 13 casos referidos de posible tortura eléctrica fueron detenidos por la Guardia Civil. Este método no fue descrito ni por los detenidos por la PN ni los detenidos por la Ertzaintza. En relación al cuerpo policial las prácticas de estrés climático fueron más frecuentes entre los detenidos por la Guardia Civil (47%), seguidos de los detenidos por la Ertzaintza (36%), siendo la más baja para la Policía Nacional (19%). Especialmente demostrativo es la categoría de “humedad” que tuvo una frecuencia del 21% en los detenidos por la Guardia Civil y del 0% en los detenidos por la Policía Nacional.

Uno de los métodos de tortura con una clara diferencia entre los distintos cuerpos policiales es el de “exposición a ruido”. La frecuencia en los detenidos por la Ertzaintza fue de hasta el 84%, mientras que entre los detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional fue del 39 y 33%, respectivamente.

El uso del método conocido como “sándwich” fue prácticamente exclusivo de la Guardia Civil (36%), mientras que fue solo relatado por un detenido de la Policía Nacional y ninguno de los detenidos por la Ertzaintza.

Atendiendo a las denuncias analizadas, la frecuencia de los métodos de privación fue significativamente más alta ($p < 0.001$) entre los detenidos por la Guardia Civil (96%) y la Ertzaintza (93%), que entre los detenidos por la Policía Nacional (80%). La privación

de visión fue mucho más frecuentemente relatada por los detenidos por la Guardia Civil. La privación de sueño habría sido más alta entre los detenidos por la Ertzaintza. La frecuencia total de tortura sexual habría sido mucho más prevalente entre los detenidos por la Guardia Civil (83%) que entre los detenidos por la Ertzaintza (60%) y la Policía Nacional (58%) ($p < 0.001$). Además todos los métodos fueron más frecuentes en el grupo de la Guardia Civil. La comparación entre los otros 2 cuerpos policiales también muestra un dato diferencial, mientras que en el grupo de detenidos por la Policía Nacional la frecuencia de violencia física en región genital habría sido relativamente alta, la frecuencia de tocamientos fue relativamente baja. Por el contrario, en los detenidos por la Ertzaintza se observó el fenómeno contrario. Así mismo, en base a la muestra analizada se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la actuación de los distintos cuerpos policiales y un gran número de métodos de tortura psicológica (*figura 5.3*). Los métodos de amenazas de ejecución, amenazas de tortura (o daño físico o psicológico), el oír actos de tortura (incluido actos de sufrimiento como lloros, quejidos), la realización de actos incongruentes fue superior en el grupo de la Guardia Civil. De todos los casos referidos sugestivos de simulacro de ejecución ninguno fue reportado por los detenidos por la Ertzaintza. Por el contrario, entre los detenidos por este cuerpo policial el porcentaje de humillaciones / insultos fue significativamente alto. En amenazas “otras” la mayoría (o todas) de las relatadas por los detenidos por la Ertzaintza harían referencia a la amenaza de entregarle a la Guardia Civil.

Año en el que se realizó la detención

La variable “año de detención” fue agrupada por trienios: años 2000-02; años 2003-05; y años 2006-08.

Con la prueba estadística χ^2 se observaron diferencias estadísticamente significativas en los siguientes métodos: golpes, extenuación física, posición anómala, bolsa, golpes en región genital, humillación sexual, amenazas otras y simulacro de ejecución. Sin embargo, debido a la asociación que existían entre las variables independientes año de detención y cuerpo policial (*tabla 5.4.*), se efectuó un estudio de regresión logística controlando ambas variables. Con esta prueba se observó que todas los métodos de malos tratos / tortura antes mencionados fueron significativos para el cuerpo policial. Sin embargo, sólo se obtuvieron diferencia significativas ($p < 0.05$) para la variable trienio de detención para los métodos de extenuación física, golpes en región genital y

amenazas otras. La primera de las técnicas fue más frecuente en el tercer periodo, mientras que los otros 2 métodos fueron usados menos frecuentemente en los periodos sucesivos (*figura 5.4.*).

[5.d.] Análisis específico de los informes médico-forenses.

Métodos de tortura alegados. Factores asociados

La muestra estaba compuesta por los informes médico forenses pertenecientes a 146 detenidos incomunicados durante el período 2000-2008.

Se analizaron un total de 507 informes, siendo la media de informes por detenido de 3,5. El número de informes disponible de cada detenido fue el siguiente (*tabla 5.7.*):

Tabla 5.7. Número de informes médico forenses por detenido

Número de informes por detenido	Número de detenidos	%
1	12	8,2%
2	22	15,1%
3	30	20,5%
4	42	28,8%
5	29	19,9%
6	9	6,2%
7	1	0,7%
8	1	0,7%

De ellos 114 (78%) eran hombres y 32 (22%) mujeres. El rango de edad fue de 18 a 55 años y la media de 27 años (desviación estándar de 6 años). En 32 casos no se conocía la edad del detenido. El número de detenidos por año y por cuerpo policial se reflejan en la *tabla 5.8.*

Tabla 5.8. Número de detenidos por año y por cuerpo policial

Año de detención	Número de detenidos	%
2000	14	9,6%
2001	11	7,5%
2002	47	32,2%
2003	33	22,6%
2004	14	9,6%
2005	19	13,0%
2006	1	,7%
2007	4	2,7%
2008	3	2,1%

Cuerpo Policial	Número de detenidos	%
Ertzaintza	21	14,4%
Guardia Civil	74	50,7%
Policía Nacional	51	34,9%

[5.d.i.] Referencias de maltrato / tortura descritas en los informes. Datos generales.

En la *tabla 5.9.* se aportan los datos de los informes médico forenses en relación a la descripción contenida en el informe.

Tabla 5.9. Referencias de maltrato / tortura en los informes médico forenses

Referencias de maltrato / tortura	Número de detenidos	%
Si	89	61,0%
No	15	10,3%
Inconcluyente	24	16,4%
No + Inconcluyente	18	12,3%

El 61% de los detenidos en alguno(s) de los informes médico forenses alegaron referencias de maltrato / tortura.

En el 10% de los casos el detenido no alegó malos tratos / tortura en el (los) informe(s) médico forense(s). En bastantes informes sólo se negaban la existencia de malos tratos de manera parcial. En esta categoría se incluyeron los informes en los que constaba que “el detenido no refiere malos tratos”, “el detenido no refiere malos tratos físicos”, “el detenido no refiere golpes”, “el detenido refiere trato correcto” o “trato bien”. Solo en una minoría de informes se especifica que “el detenido no refiere malos tratos físicos ni psicológicos”.

En el 16% de los detenidos no existía ninguna referencia en sus informes sobre la existencia o no de alegaciones de maltrato / tortura, bien porque el detenido no contestó a la pregunta (“no colabora”) o bien porque no se reseñó el dato (“dato no indicado”) o se utilizó una terminología ambigua.

En otro 12% de los casos en algunos informes consta que el sujeto no refirió malos tratos mientras que en otros reconocimientos es un dato que no se ofrecía.

[5.d.ii.] Referencias de maltrato / tortura en relación a las variables sexo, edad, cuerpo policial y año de detención (tablas 5.10).

Sexo	Hombres (n = 114)		Mujeres (n= 32)	
Referencias de maltrato / tortura	Número de detenidos	%	Número de detenidos	%
Si	72	63,2%	17	53,1%
No	7	6,1%	8	25,0%
Inconcluyente	22	19,3%	2	6,3%
No + Inconcluyente	13	11,4%	5	15,6%

Cuerpo policial	Ertzaintza		Guardia Civil		Policía Nacional	
Referencias de maltrato / tortura	Número de detenidos	%	Número de detenidos	%	Número de detenidos	Col %
Si	14	66,7%	47	63,5%	28	54,9%
No	1	4,8%	7	9,5%	7	13,7%
Inconcluyente	6	28,6%	12	16,2%	6	11,8%
No + Inconcluyente	0	0%	8	10,8%	10	19,6%

Año de detención	Años 2000-2002		Años 2003-2005		Años 2006-2008	
	Número de detenidos	%	Número de detenidos	%	Número de detenidos	%
Si	45	62,5%	38	57,6%	6	75,0%
No	8	11,1%	7	10,6%	0	0%
Inconcluyente	13	18,1%	9	13,6%	2	25,0%
No + Inconcluyente	6	8,3%	12	18,2%	0	0%

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación a la frecuencia de detenidos que alegaron malos tratos / tortura en relación al sexo, periodo de

detención y cuerpo policial. La media de edad de los que alegaron malos tratos / tortura era similar a la del resto (26 y 27 años, respectivamente; no significativo).

[5.d.iii.] Métodos de tortura

En la *tabla 5.11*, se ofrecen los datos en relación a los distintos métodos de malos tratos / tortura descritos en los informes médico forenses.

Tabla 5.11. Métodos de tortura descritos en los informes médico - forenses

	Número de detenidos N = 146
Tortura física	
<i>Métodos de violencia física</i>	
Golpes	52
Tirones de pelo	8
Electricidad	2
Otros	14
<i>Extenuación física</i>	
Posturas anómalas / forzadas	37
Ejercicios físicos	10
<i>Asfixia</i>	
“Bolsa”	21
“Bañera”	1
Tortura psicológica	
Amenazas	28
Otras	40
Tortura sexual	
Métodos físicos	14
Métodos psicológicos	5
Desnudez forzada	5

Métodos de violencia física

Este tipo de técnicas aparece descrito en los informes médico forenses correspondientes a 61 personas (42% del total). La frecuencia fue superior entre varones (44%) que entre mujeres (34%), pero sin significación estadística. Tampoco se observaron diferencias

significativas en relación al cuerpo policial que realizó la detención (la frecuencia más baja fue entre los detenidos por la Policía Nacional; 37%) ni en relación al periodo de tiempo.

El método más frecuentemente descrito fueron los golpes ($n = 52$). En bastantes ocasiones la descripción era escasa; en general predominaron los golpes con la mano y localizados en la cabeza. Otros métodos de violencia física descritos fueron los tirones de pelo, la presión o retorcimiento de los testículos, los empujones y la presión sobre una zona corporal, con una frecuencia entre 8 y 3 casos.

Los dos detenidos que refirieron haber sufrido tortura eléctrica fueron detenidos en el año 2001 por la Guardia Civil.

Métodos de extenuación física

Este tipo de métodos fue descrito por 41 detenidos (28%), con un porcentaje similar entre varones y entre mujeres (30% y 22%, respectivamente). En relación a los periodos analizados la frecuencia fue del 21% en el periodo 2000-02, del 33% en el 2003-05 y del 50% en el 2006-08. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. La frecuencia fue significativamente más alta entre los incomunicados por la Ertzaintza (57%) que entre los incomunicados por la Guardia Civil (26%) y la Policía Nacional (20%) ($p < 0.01$).

De los 41 detenidos que describieron este método de tortura, 31 refirieron posturas anómalas / forzadas por periodos prolongados de tiempo, 4 la obligación de realizar ejercicio físico hasta la extenuación (“flexiones”) y 6 ambos tipos de maniobras.

Por lo que respecta a los 10 detenidos que denunciaron la obligación de realizar ejercicios físicos, los 10 eran varones. Nueve fueron detenidos por la Guardia Civil y uno por la Policía Nacional. Los detenidos por la Ertzaintza no alegaron este método. El nivel de significación estadística fue de $p < 0.05$

Métodos de asfixia.

Este tipo de métodos fue referido en informes pertenecientes a 22 sujetos (15% del total). La “bolsa” con 21 casos fue el tipo más frecuentemente relatado. Solo en un caso se describió el uso de la “bañera”.

La frecuencia de la asfixia fue superior entre varones (17%) que entre mujeres (6%), si bien no alcanzó diferencias estadísticamente significativas.

Un hallazgo especialmente significativo es que este método solo fue denunciado por los detenidos por la Guardia Civil (frecuencia del 30% entre los incomunicados por este cuerpo policial). Por otro lado, fue denunciado en los 3 periodos de tiempo con una frecuencia del 29% en entre los años 2000-2002, del 21% entre los años 2003 y 2005 y del 67% entre los años 2006-2008 (si bien en este periodo solo se analizaron 6 casos de detenidos por la Guardia Civil). Las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Ninguno de los detenidos por la Ertzaintza o por la Policía Nacional refirió haber sufrido métodos de asfixia.

Métodos psicológicos

La frecuencia observada de este tipo de métodos puede que esté infraestimada ya que en varios informes que fueron clasificados como “no refiere malos tratos”, sólo se especificó que no refiere malos tratos físicos o golpes, surgiendo la duda de si pudieron existir o no métodos psicológicos.

Cincuenta y tres detenidos (36%) refirieron algún tipo de maltrato psicológico.

Amenazas fueron alegadas por 28 detenidos y otro tipo de maltrato psicológico por 40 (en 15 casos se describieron tanto amenazas como otro tipo de maltrato psicológico).

Entre las vulneraciones incluidas en este apartado están las siguientes: privación de sueño, privación de visión, humillaciones, insultos, trato vejatorio, presión psicológica, oír gritos, deprivación sensorial.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en razón al sexo, si bien la frecuencia fue superior entre varones (39%) que entre mujeres (28%). La frecuencia fue más alta entre los detenidos por la Ertzaintza (62%) que entre los detenidos por la Guardia Civil (35%) y la Policía Nacional (27%). En relación a la distribución temporal la frecuencia fue del 36% entre los años 2000-02; del 35% entre los años 2003-05 y del 50% en el periodo 2006-08.

Métodos de tipo sexual

En los informes médico forenses de 19 detenidos (13%) se recogió alguna alegación con respecto a la existencia de malos tratos / tortura de tipo sexual. Métodos físicos fueron descritos por 14 detenidos, métodos psicológicos por 5 y desnudez forzada por otros 5 (5 de los 19 describieron más de un método de tipo sexual).

La frecuencia de este tipo de métodos fue similar entre varones y mujeres (13% y 12%, respectivamente); si bien la tipología varió entre ambos sexos. Así, se observó que los

14 casos de métodos físicos eran varones; los cuales refirieron golpes en genitales y/o presión de los testículos.

La frecuencia de alegaciones de maltrato / tortura sexual fue más frecuente entre los detenidos por la Guardia Civil (16%) y la Policía Nacional (12%) que entre los detenidos por la Ertzaintza (5%).

[6] Discusión

Los datos presentados en este dictamen intentan cumplir con el mandato dado a esta Dirección por parte del Parlamento Vasco para la realización de un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política. Para ello se ha efectuado un abordaje científico exhaustivo partiendo de fuentes diversas. A pesar de las dificultades encontradas en la recogida de datos (inherentes a trabajos sobre documentación de derechos humanos), el volumen de la muestra analizada es muy grande. Se investigaron los datos sobre la existencia o no de alegaciones de vulneraciones de derechos humanos de 957 detenidos en régimen de incomunicación; así mismo se analizaron casi 300 denuncias judiciales y testimonios de malos tratos / tortura y más de 500 informes médico - forenses.

Los datos ofrecidos en este Dictamen, conjuntamente con los del Informe de Junio de 2008 de esta Dirección (1) y del Informe sobre Derechos Civiles y Políticos del Instituto Vasco de Criminología (72), deben ayudar a clarificar una realidad que no tenía hasta ahora un registro oficial nítido y suponen un enorme desafío desde el punto de vista institucional.

[6.a.] Principales hallazgos del presente Dictamen

Los resultados obtenidos sobre la incidencia y extensión de la práctica de la tortura en la población analizada son, cuando menos, preocupantes y deberían ser considerados “en sí mismos” como un auténtico problema por las autoridades competentes. El número de detenidos bajo la legislación antiterrorista en los 9 años analizados que alegaron malos tratos / tortura fue muy elevado: 634. Hasta un 47% de los detenidos incomunicados identificados habría denunciado judicialmente malos tratos / tortura. La incidencia estimada para jóvenes varones sería de 18 casos por 100.0000 personas por año. Las cifras son, por lo tanto, indicadoras de un problema cuantitativamente serio. Los datos extraídos de los informes médico forenses (a pesar de sus deficiencias en la escasez de los datos aportados) son también significativos: hasta en un 61% de detenidos incomunicados habría denunciado malos tratos / tortura al médico forense durante el periodo que duró la incomunicación.

En el Informe sobre Derechos Civiles y Políticos del Instituto Vasco de Criminología sobre una muestra similar a la nuestra (detenidos incomunicados de la CCAA del País Vasco) se recogieron los datos de la declaración judicial sobre vulneraciones de derechos alegadas por 165 detenidos en el Juzgado Central de Instrucción. Seis de ellos no desearon contestar sobre si habían sufrido vulneración de derechos cuando declararon ante el juez. En 61 documentos consta que el detenido manifestó algún tipo de vulneración de derechos cuando pasó a disposición judicial. En los restantes 98 documentos de declaración judicial no constan datos sobre violación de derechos, bien porque el detenido los negó o bien porque es un dato no indicado ni afirmativa ni negativamente (72).

Los hallazgos obtenidos se vienen a sumar a lo apuntado desde diversas instancias, nacionales e internacionales (ver introducción): los malos tratos / tortura en los detenidos incomunicados ocurren con una frecuencia más que esporádica u ocasional.

La caracterización de modelos diferenciados de malos tratos / tortura en relación al cuerpo policial que realizó la detención es de suma importancia. La Guardia Civil fue la policía relacionada con un patrón más severo de malos tratos / tortura. Por un lado, fue el cuerpo policial con un porcentaje más alto de alegaciones de malos tratos / tortura; y por otro lado, el que habría empleado métodos de tortura más graves. Algunas de las técnicas de tortura sólo o prácticamente solo fueron alegadas por los detenidos por la Guardia Civil (bolsa, electricidad, sándwich, extenuación física). Para otra amplia variedad de técnicas, la frecuencia de uso fue significativamente más alta entre los detenidos por la Guardia Civil que en el resto. En el otro extremo, los detenidos del grupo de la Ertzaintza denunciaron un patrón menos severo de malos tratos físicos, y algunos métodos que fueron manifestados por los detenidos por la Guardia Civil (por ejemplo, bolsa, “sándwich”, electricidad) nunca fueron denunciados por este grupo. Sin embargo, en base a las denuncias la Ertzaintza se habría caracterizado hasta el año 2003 por el uso habitual durante los interrogatorios de las posiciones anómalas, la agresión con ruido y las humillaciones.

La existencia de un patrón característico de tortura en determinadas regiones en un periodo concreto de tiempo y por un determinado cuerpo policial ha sido descrita en otras publicaciones internacionales (73,74). Este hecho ha sido considerado interesante para la valoración de la fiabilidad de las denuncias individuales, ya que declaraciones

similares de tortura por un número significativo de detenidos arrestados por la misma policía pueden ayudar a soportar la credibilidad de las denuncias (75).

Con respecto a la distribución de los métodos de tortura en razón al sexo, las principales diferencias fueron encontradas en la tortura sexual: las mujeres habrían sufrido más habitualmente humillaciones sexuales, tocamientos y otras técnicas, mientras que los hombres golpes en región genital. La existencia de un patrón diferente de tortura sexual en razón al sexo ha sido observado en previos estudios de víctimas de tortura (76-79).

Comparado con las décadas precedentes se ha observado un cambio en el tipo de torturas alegadas por los detenidos bajo la legislación antiterrorista. Algunos métodos denunciados en los setenta, como por ejemplo la falanga, tortura de los dedos o suspensión de una “barra” han dejado de utilizarse; la frecuencia de otros métodos tales como la “bañera” y la tortura eléctrica han disminuido considerablemente. Por el contrario, las técnicas de agotamiento físico se han incrementado. Por lo que se refiere al periodo 2000-2008, la principal tendencia detectada fue el incremento del método de extenuación física.

[6.b.] Implicaciones de nuestros hallazgos sobre las versiones contradictorias del fenómeno de la tortura

Uno de los elementos claves en la documentación de la tortura es la determinación de la fiabilidad de las denuncias presentadas. En relación con los datos examinados se puede objetar que algunas personas arrestadas bajo la legislación antiterrorista podrían hacer falsas alegaciones de tortura, con el objetivo de dañar la reputación de las fuerzas policiales. Por el contrario, también se ha concluido que la lucha contra la tortura se ve dificultada porque los Estados que la practican están interesados en negar su uso dadas las repercusiones que tiene a nivel internacional.

En este apartado se va discutir sobre las implicaciones de los hallazgos del presente Dictamen en relación a las versiones contradictorias que existen sobre el fenómeno de la tortura en el País Vasco. En efecto, uno de los objetivos principales dictamen era aportar evidencias contrastadas y fiables que ayudaran a soportar o no la hipótesis de que todas

(o prácticamente todas) denuncias de tortura son falsas y obedecen a directrices marcadas en documentos atribuidos a ETA.

En la siguiente tabla se ha efectuado una correlación entre los hallazgos esperables en base a la argumentación del Gobierno de España y los hallazgos encontrados en el presente Dictamen.

Hallazgos esperables en base a la argumentación del Gobierno de España	Hallazgos encontrados en el presente Dictamen
Los detenidos incomunicados que quedan en libertad sin cargos tras la incomunicación o que son absueltos o no procesados no deberían denunciar torturas o a lo sumo denunciarlas de forma muy ocasional o esporádica.	<p>El porcentaje de detenidos que denunció malos tratos / tortura fue del</p> <p>Libertad sin cargos sin pasar a disposición judicial 35%</p> <p>Libertad sin cargos tras pasar a disposición judicial 64%</p> <p>Absuelto 69%</p> <p>No fue procesado 55%</p> <p>Archivo de la causa 70%</p>
Las denuncias de tortura debería ser sistemáticas entre las personas que son encarceladas o condenadas	<p>El porcentaje de detenidos que denunció malos tratos / tortura fue del</p> <p>Prisión comunicada 69%</p> <p>Prisión incomunicada 92%</p> <p>Condenado 79%</p>
El número de denuncias de tortura no debería estar influenciado por el tiempo de incomunicación, ya que la supuesta instrucción es que “Ante una detención, por corta e insignificante que sea ...hay que denunciar torturas”.	<p>Existe una correlación directa entre la duración de la incomunicación y la frecuencia de alegaciones de malos tratos / tortura en la muestra entera.</p> <p>Si seleccionamos los que ya han sido condenados, la frecuencia de malos tratos / tortura es del 52% cuando la incomunicación es ≤ 3 días y del 88% cuando es superior ($p < 0.001$).</p>
Los tipos de tortura mencionados en el documento atribuido a ETA (“Hablar de interrogatorios, golpes, bolsa, bañera, potro, tortura psicológica”) deberían tener una frecuencia muy alta. Así mismo, el porcentaje debería ser similar para todos ellos. Por el contrario, los métodos de tortura no mencionados en el documento deberían tener una incidencia inferior a los que sí se mencionan.	<p>La frecuencia de estos métodos en los testimonios /denuncias y en los informes médico forenses fue respectivamente:</p> <p>Golpes: 85%; 36%</p> <p>Bolsa: 36%; 14%</p> <p>Bañera: 1,4%; 0,7%</p> <p>“Potro”: 0% ; 0%</p> <p>Interrogatorios: 43%;</p> <p>T psicológica: 100%; 36%</p> <p>Existen numerosos métodos no mencionados en el</p>

	documento que tuvieron una frecuencia mucho más alta: posición anómala 73%; plantón 50%, exposición a ruido (44%), extenuación física 35%.
La distribución de los métodos de tortura en relación a las variables externas al detenido debería ser “al azar”, sin existir diferencias entre los detenidos por distintos cuerpos policiales ni entre varones y mujeres.	Las diferencias estadísticamente encontradas en muchas de las técnicas analizadas en razón del cuerpo policial, son indicativas de un patrón de conducta diferencial. Existe un modelo diferencial de tortura sexual en relación al sexo del detenido

En conclusión, las evidencias encontradas en el presente Dictamen no soportan la hipótesis de que todas o casi todas las denuncias son falsas y obedecen a una instrucción genérica.

Para aceptar la versión del Gobierno de España, a la vista de los presentes hallazgos se deberían admitir todas y cada una de las siguientes premisas:

1. Una parte muy elevada de todos los detenidos incomunicados son instruidos para que efectúen denuncias falsas de maltrato / tortura con unos métodos específicos;
2. Un porcentaje significativo de los detenidos que quedan en libertad sin cargos y de las personas que finalmente son absueltas o no procesadas (sin supuesta relación con ETA u otras actividades ilegales) también han recibido instrucciones para efectuar denuncias falsas;
3. Un porcentaje de militantes / colaboradores de ETA desobedecen las órdenes al no denunciar torturas;
4. Los denunciante desobedecen las instrucciones marcadas en el documento incautado ya que los métodos de tortura que aparecen en el mismo no son luego referidos (por ejemplo, la bañera y el potro);
5. La instrucción de denunciar torturas no es la misma para todos los detenidos, sino que varía atendiendo a diversas situaciones diferenciales;
6. El denunciante antes de su detención ha recibido instrucciones para denunciar un relato diferente para cada cuerpo policial;
7. El denunciante dependiendo de si es hombre o mujer ha recibido instrucciones diferentes para determinados métodos de tortura (principalmente de tortura sexual).

Es más, nuestros hallazgos muestran que hay otros factores que son contrarios a la existencia de una instrucción genérica de denunciar torturas. Existen tres datos que creemos que son especialmente significativos a la hora de rechazar la existencia de una instrucción genérica de denuncias de torturas:

- Si analizamos los datos de los detenidos por el motivo denominado “comportamientos sin actividad violenta” (que hace referencia a aquellas personas detenidas por la extensión del concepto de terrorismo a actividades del denominado entorno político / social) por la Policía Nacional bajo la instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 5, observamos que el número de denuncias de tortura es sólo del 9% (lo que contrasta con el 66% de la muestra), a pesar que varias personas fueron condenadas como miembros o dirigentes de ETA o como colaboradores de ésta.
- Otro dato que se valora como fundamental en este Dictamen es la ausencia de denuncias de tortura contra la Ertzaintza desde el año 2004 (inclusive), si bien el número de detenidos ha sido pequeño. Este hallazgo debe ser interpretado en el contexto de que este cuerpo policial ha continuado siendo objeto de ataques. Por ello, este cambio parece ser debido a una actitud política más firme contra la práctica de torturas por parte de las instituciones del Gobierno Vasco, como se ha apuntado en la introducción.
- La duración de la incomunicación es un factor de riesgo esencial (con independencia del resto variables independientes) para la existencia de malos tratos / tortura. El siguiente dato es por sí mismo elocuente: la frecuencia de alegaciones de malos tratos / tortura entre los condenados con una detención incomunicada \leq de 3 días es del 52% mientras que la frecuencia entre los que son absueltos o no procesados cuando la duración de la incomunicación es $>$ de 3 días es del 70%.

Otro elemento de solidez de la información sobre vulneración de derechos humanos ofrecidas por distintas instituciones internacionales y ONG locales es la concordancia entre las evidencias recogidas por los expertos que se han entrevistado con posibles víctimas de tortura y entre éstas y los hallazgos de este Dictamen. Según los informes del Relator Especial para la Tortura de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional y del CPT, los métodos de tortura más frecuentemente denunciados en España son los golpes (con las manos, pies, guías telefónicas), la asfixia con la bolsa de plástico, la obligación a estar de pie durante periodos prolongados, la obligación a hacer ejercicios físicos

extenuantes, las vejaciones sexuales, las amenazas, el encapuchamiento y la desnudez forzada.

[6.c.] Fiabilidad / credibilidad de los testimonios de denuncias de tortura en detenidos incomunicados

Además de los hallazgos cuantitativos obtenidos en este trabajo, es necesario hacer mención al aspecto cualitativo de la fiabilidad de las denuncias de tortura. No se trata de un planteamiento novedoso, ya que las principales instituciones internacionales de control de los derechos humanos se han pronunciado sobre ello en las visitas que han efectuado a España, existiendo consenso entre las mismas.

Los expertos del CPT tras entrevistarse directamente con varios detenidos por su presunta relación con la organización ETA consideraron que las alegaciones de tortura hechas por los mismos no eran de naturaleza estereotipada, sino que eran detalladas y largamente concordantes, con variaciones que las hacían creíbles en vista de las circunstancias personales. La delegación del CPT tuvo la impresión de que algunas de las alegaciones podían haber sido algo exageradas, aunque de cualquier manera, en su integridad eran verosímiles. Estas alegaciones de tortura incluían la utilización de golpes, de métodos de asfixia (la “bolsa”), de tortura eléctrica, de técnicas de extenuación física y de amenazas. En otra de las ocasiones que se entrevistaron con detenidos que habían denunciado torturas, concluyeron que existía amplia evidencia, incluida de naturaleza médica, coherente con las denuncias de maltrato (28-34).

En análogos términos se expresó el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en el año 2004: “a la luz de la coherencia interna de la información recibida y de la precisión de los detalles de hecho, el Relator Especial ha llegado a la meditada consideración que esas denuncias de tortura y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones” (21).

Amnistía Internacional en el informe anual de 2005 apuntaba que se habían recibido “muchas denuncias relacionados con la práctica de la detención en régimen de incomunicación”, considerando que “la precisión de los detalles de hecho facilitados en relación con varias denuncias sugerían que éstas no pueden considerarse meras fabulaciones” (38).

Aunque el objetivo de este Dictamen no era probar, más allá de la duda razonable, si se han producido o no malos tratos en cada uno de los casos analizados, la impresión obtenida -tras la lectura de casi 300 denuncias de tortura y testimonios - es totalmente concordante con lo manifestado por estas tres instituciones internacionales.

[6.d.] Investigación judicial de las denuncias de tortura

Como se ha comentado en la sección de Métodos analizamos los testimonios de tortura recogidos en más de 250 denuncias judiciales, pero no se hizo un análisis del procedimiento y de la situación de cada denuncia. Sin embargo, creemos que ninguna ha finalizado en una condena judicial. A este respecto, el posicionamiento para defender que las denuncias son falsas se apoya en la presunta falta de casos de tortura sentenciados por los tribunales de justicia competentes.

Sin embargo, tal y como se ha señalado desde diversas fuentes la ausencia de condenas puede ser debido a otros factores. Los organismos internacionales de monitoreo han mostrado su profunda preocupación por la inactividad de los tribunales en la investigación y represión de los delitos de tortura. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en el año 2004 llamó la atención sobre la “ausencia de una política y de una práctica de investigaciones prontas e imparciales en materia de tortura y malos tratos” (21). Así mismo, expertos internacionales se quejaron sobre “la prolongada dilación de las investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura;” así como sobre “la ausencia de una investigación rápida, rigurosa, y exhaustiva de todas las denuncias de posibles torturas y malos tratos”. Por otro lado, desde diversos ámbitos también se ha llamado la atención sobre las deficiencias en la investigación médico forense (20, 28, 80,81).

Simplemente por aportar un dato concreto, el Comité contra la Tortura de la ONU, de 17 de mayo de 2005 valoró el caso de Kepa Urra Guridi en su Comunicación No. 212/2002 (82). El Comité de la ONU contra la Tortura consideró que las acciones del Estado eran contrarias a sus obligaciones en virtud del artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que exige a los Estados partes que adopten medidas efectivas para prevenir actos de tortura. El Comité concluyó asimismo que la reducción de las penas y la concesión de indultos violaba el artículo 4 de la Convención, que obliga a las autoridades a garantizar que los

actos de tortura se castigan con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad del delito. El Comité concluyó que la víctima no había recibido una reparación adecuada, que, tal como exige el artículo 14, debe incluir restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. En consecuencia, el Comité llegó a la conclusión de que el Estado había violado la Convención. Por todo ello, se le imponía a España la obligación de adoptar medidas para resarcir a la víctima en el plazo de un año. Ninguna medida ha sido adoptada al respecto.

En el reciente estudio empírico realizado por el Instituto Vasco de Criminología se ha efectuado un análisis sobre este asunto, en el capítulo de “Denuncias por vulneración de derechos interpuestas por detenidos (2000-2007) (72). Se observó que el Juez / Fiscal apenas proponen la práctica de diligencias para realizar la investigación, que la mayoría de pruebas son solicitadas por la acusación particular, que solo en pocas ocasiones se admiten las pruebas solicitadas por la acusación particular, que otras veces no se investiga en base a lo solicitado por los denunciantes y que la motivación del archivo es muy genérica. Consideraron que todo ello “puede influir a la hora de llevar a cabo una investigación eficaz que posibilite identificar y sancionar a las personas responsables de los delitos de tortura” y que “pondría en entredicho la rigurosidad de las investigaciones y podría vulnerar el principio de celebrar un proceso con todas las garantías”. Los autores del trabajo concluyeron sobre la carencia de una investigación exhaustiva de las denuncias por tortura interpuestas por personas detenidas como consecuencia de la aplicación de la legislación antiterrorista.

A las deficiencias en la investigación, se le debe añadir las dificultades probatorias derivadas de la existencia de espacios carentes de efectivo control judicial (72). En este sentido, hay que recordar que debido a la naturaleza de muchos de los maltratos frecuentemente alegados, puede resultar difícil o imposible obtener evidencias médicas de su uso. Las técnicas de tortura actuales, que son cada vez más sofisticadas, sólo excepcionalmente dejan huellas corporales que pueden ser relacionadas con la tortura alegada.

En relación a la ausencia de salvaguardas efectivas contra la tortura los expertos internacionales han mencionado las siguiente: ausencia de acceso completo al abogado desde el primer momento de la detención; la imposibilidad de notificación la detención a un tercero hasta por cinco días, la imposibilidad a acceder a un médico de confianza. Por ello se le ha recomendado al Estado el establecimiento de procedimientos

transparentes y equitativos para la realización de investigaciones independientes sobre las denuncia de malos tratos y tortura.

[6.e.] Limitaciones

La primera de las limitaciones fue la identificación de los detenidos incomunicados durante el periodo de estudio. Como se comentó en el informe de junio de 2008 aunque intentamos acceder a las fuentes primarias de la Audiencia Nacional no se consiguió. Según los datos del Ministerio de Interior (recogidos en el “libro Blanco del PSOE”) el número de detenidos dentro del capítulo de “Terrorismo ETA. Detenidos ETA” fue de 1231 (913 ETA y 318 kale borroka) (83). En ausencia de datos oficiales, utilizamos una diversidad de fuentes que permitieron incluir hasta 957 casos de detenidos incomunicados. Por lo tanto, nuestra muestra representa hasta el 78% de las cifras oficiales consignadas. En relación con los casos no identificados desconocemos si sufrieron o no malos tratos; pero asumimos que es más probable que hayan pasado desapercibidos para los medios de comunicación y para el resto de fuentes consultadas aquellos que no habrían denunciado malos tratos / tortura. También es posible que no todos 1231 detenidos fueran incomunicados. Aun admitiendo que ninguno de los casos no identificados por nosotros sufrió malos tratos, el porcentaje de detenidos que alegaron malos tratos / tortura seguiría siendo muy alto.

De los casos que denunciaron torturas no pudimos realizar un muestreo aleatorio, ya que no pudimos tener acceso a las diligencias judiciales de todos los casos. No se pudo comparar las características de los incluidos y los no incluidos y no podemos descartar un sesgo de selección. Las dificultades metodológicas inherentes en ciencias sociales tienen tendencia a ser particularmente pronunciadas en las violaciones de derechos humanos. Estas dificultades en la documentación son generalizadas en todos los estudios hasta ahora practicados, ya que el acceso a la información relevante es limitado.

La categorización de los métodos de malos tratos / tortura estuvo basado en el relato espontáneo del detenido. Cuando se consideró que el sujeto alegaba un método era porque el mismo aparecía en el testimonio o en la denuncia judicial. Por ello, podría darse el caso que una persona hubiera sufrido algún método que no al no ser relatado no fue incluido. Con este modelo, es posible que aquellas personas que habrían recibido un

maltrato / tortura más intenso, con métodos físicamente más duros, no describan malos tratos de menor severidad, que por el contrario, si serían descritos por detenidos que sufrieron un maltrato de menor intensidad. Sin embargo, los expertos en derechos humanos aconsejan este método de documentación, evitando pasar un formulario al ex-detenido o efectuar preguntas dirigidas (79). Este abordaje desde el testimonio espontáneo tiene la ventaja de que se puede valorar la fiabilidad de los hechos relatados, cuestión que no sería posible con el cuestionario estructurado.

Otra de las limitaciones de este trabajo es que no se clasificó la intensidad del maltrato / tortura. Solo se valoró como “sí” o como “no”. En el caso de los golpes es especialmente importante, ya que la intensidad y frecuencia de los golpes varió de manera importante entre los detenidos. En bastantes casos el detenido solo refirió golpes leves ocasionales con la mano en la cabeza, mientras que en otros casos la intensidad y frecuencia de los golpes fue relativamente importante. Esta limitación es extrapolable a la mayoría de métodos, como puede ser el de la desnudez (consignamos como “sí” tanto la parcial como la desnudez total), la posición anómala, la privación de visión, los tocamientos sexuales, etc.

El presente Dictamen identifica casos posibles / probables de vulneración de derechos que una investigación posterior mucho más concreta y completa deberá dilucidar. Es decir, el abordaje usado no permite realizar una valoración individual de la fiabilidad del testimonio de torturas de cada caso particular. Para ello sería necesario poner en marcha mecanismos más amplios y con medios materiales y personales más adecuados.

[7.] Conclusiones

1. Los datos presentados, unido a los hallazgos descritos por los organismos internacionales de supervisión y por estudios nacionales, indican que la tortura es un serio problema en España en relación a los detenidos incomunicados y que las medidas de prevención de la tortura son deficientes e ineficaces.
2. Nuestros hallazgos están en consonancia con los datos ofrecidos por los organismos internacionales en sus visitas a España. Si bien la práctica de la tortura no puede considerarse sistemática en España, en la población de riesgo analizada las evidencias sugieren que nos encontramos ante un problema de vulneración de derechos de una incidencia y extensión considerable.
3. De acuerdo a los datos del Ministerio hubo 1231 detenidos, de los que con las fuentes utilizadas identificamos 957. De ellos 634 casos realizaron alegaciones de malos tratos / tortura. Admitiendo que ninguno de los 274 detenidos que no identificamos habría sufrido vulneración de derechos, la frecuencia de alegaciones de malos tratos / tortura sería del 51% (634/1231). Dato que se ve refrendado por la existencia de un 60% de detenidos que alegaron malos tratos / tortura en los reconocimientos médico forenses y por la frecuente denuncia de vulneraciones de derechos efectuada por este tipo de detenidos ante el Juzgado Central de Instrucción.
4. Existen varias variables independientes criminológicas y procesales que se asocian con la frecuencia de las alegaciones de malos tratos / tortura: motivo de la detención, tiempo que duró la incomunicación, cuerpo policial que realizó el arresto y situación legal tras la incomunicación.
5. La duración de la incomunicación – con independencia de otras variables – se asocia con la frecuencia de las alegaciones de malos tratos / tortura: el riesgo incrementa marcadamente cuando la duración de la incomunicación supera los 3 días.
6. En base a las denuncias analizadas, se observó la existencia de un modelo diferencial de malos tratos / tortura para cada cuerpo policial. Así mismo, se encontró un modelo diferencial de alegaciones de malos tratos / tortura de tipo sexual entre los varones y mujeres. En relación con las décadas anteriores, apreciamos el declinar de ciertos métodos de tortura (bañera, electricidad) y la desaparición de otros (suspensión, “potro”); así como el aumento de las técnicas de agotamiento físico.

7. A partir del año 2003 las instituciones vascas muestran un compromiso firme contra la tortura, lo que coincide con la inexistencia de denuncias de tortura contra la Ertzaintza. Este dato parece indicar la importancia del compromiso político e institucional firme contra este tipo de violaciones de derechos humanos.
8. En las detenciones por el motivo denominado “Comportamientos sin actividad violenta” (personas detenidas por la extensión del concepto de terrorismo a actividades del denominado entorno político / social) practicadas por la Policía Nacional bajo la instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 5 se apreció una baja prevalencia (9%) de alegaciones de malos tratos / tortura, a pesar que varias personas fueron condenadas como miembros o dirigentes de ETA o como colaboradores de ésta.
9. Los hallazgos observados no permitieron soportar la hipótesis de que todas o casi todas denuncias de tortura son falsas y obedecen a una instrucción genérica. Existen numerosos indicadores estadísticos que son contrarios a dicha hipótesis.
10. Nuestro análisis está también en consonancia con la observación hecha por el CPT, por el Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas y por Amnistía Internacional de que las denuncias de tortura no pueden considerarse como meras fabulaciones.

[8.] Recomendaciones

El abordaje del presente trabajo no permite realizar una valoración individual de la fiabilidad del testimonio de torturas de cada caso particular. Para ello sería necesario poner en marcha mecanismos más amplios y con medios materiales y personales más adecuados. El siguiente paso al presente dictamen de cara a la documentación de la tortura y reparación de sus víctimas sería que tras ser presentadas las demandas individuales sean analizadas y evaluadas de forma exhaustiva y rigurosa por un equipo multidisciplinar, con juristas, criminólogos, médicos, psicólogos, etc. El procedimiento podría ser similar al efectuado en otros países europeos con emigrantes que solicitan asilo político por denuncias de tortura.

Esta labor no puede sustituir en ningún caso la necesaria investigación de los Tribunales ordinarios, así como el procesamiento y la sanción efectiva por los delitos de tortura.

Además, de las implicaciones para la instauración de medidas para el reconocimiento moral y reparación de las víctimas, los hallazgos también deberían apuntar a la necesidad del establecimiento de mecanismos adecuados y eficaces para la prevención. La puesta en marcha de sistemas de grabación de todo el periodo de detención, el concurso de un médico de confianza en el diagnóstico del médico forense, la supervisión efectiva del juez responsable de la detención incluyendo visitas a la persona detenida, así como el diseño de mecanismos externos e independientes de monitoreo, es una prioridad para la prevención de la tortura y los malos tratos.

Sin embargo, la derogación de la detención incomunicada sería, sin duda alguna, un factor esencial de cara a disminuir las denuncias por este tipo de violaciones de derechos humanos.

[9.] Referencias

1. Landa Gorostiza JM. Dirección de Derechos Humanos. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Gobierno Vasco. Informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política. Vitoria-Gasteiz. Junio 2008.
2. Comité Contra la Tortura Naciones Unidas: Spain. 23/12/02, CAT/c/CR/29/3.
3. Stover E, Nightingale EO. The medical profession and the prevention of torture. *N Engl J Med* 1985;313:1102-4
4. Harding TW. Prevention of torture and inhuman or degrading treatment: medical implications of a new European Convention. *Lancet* 1989;27:1191-1193
5. American College of Physicians. The role of physician and the medical profession in the prevention of international torture and in the treatment of its survivors. *Ann Intern Med* 1995;122:607-613.
6. Geiger HJ, Cook-Deegan MC. The role of physicians in conflicts and humanitarian crises. *JAMA* 1993; 270:616-620.
7. Rasmussen OV. Medical aspects of torture. *Dan Med Bull* 1990;37(Suppl 1):1-88.
8. Thomsen JL, Helweg-Larsen K, Rasmussen OV. Amnesty International and the forensic sciences. *Am J Forensic Med Pathol* 1984;5:305-311.
9. Petersen HD, Wandall JH. Evidence of physical torture in a series of children. *Forensic Sci Int* 1995;75:45-55.
10. The truth of torture [editorial]. *Lancet* 1996;347:1345.
11. Goldfeld AE, Mollica RF, Pesavento BH, Faraone SV. The physical and psychological sequelae of torture. *JAMA* 1988;259:2725-2729.
12. Jandoo R. Human rights abuses and the medical profession. *Forensic Sci Int* 1987;35:237-247.
13. Petersen HD, Christensen ME, Kastrup M, Thomsen JL, Foldspang A. General health assessment in refugees claiming to have been tortured. *Forensic Sci Int* 1994;67:9-16.
14. Iacopino V, Heisler M, Pischevar S, Kirschner RH. Physician complicity in misrepresentation and omission of evidence of torture in postdetention medical examinations in Turkey. *JAMA* 1996;276:396-402.
15. Quiroga J; Jaranson JM. Politically-motivated torture and its survivors. A desk study review of the literature. *Torture* 2005;15:1-111.
16. Mandel L, Worm L. Documentation of torture victims. Implantation of medico-legal protocols. *Torture* 2007;17:18-26.
17. Moisaner PA, Edston E. Torture and its sequel – a comparison between victims from six countries. *Forensic Sci Int* 2003;137:133-40.
18. Reis C, Ahmed AT, Amowitz LL, Kushner AL, Elahi M, Iacopino V. Physician participation in human rights abuses in southern Iraq. *JAMA*. 2004; 291: 1480-6. Erratum in: *JAMA*. 2004;291:2316.

19. Morentin B., Idoyaga M.I., Callado L.F. and Meana J.J. Prevalence and methods of torture claimed in the Basque Country (Spain) during 1992-1993. *Forensic Sci Int* 1995;76:151-8.
20. Petersen HD, Morentin B, Callado LF, Meana JJ, Idoyaga MI. Assessment of the quality of medical documents issued in central police stations in Madrid, Spain: the doctor's role in the prevention of ill-treatment. *J Forensic Sci* 47 (2002) 293-298. Erratum in *J Forensic Sci* 47 (2002) 928.
21. Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en el año 2004 E/CN.4/2004/56/Add.2 de 6 de febrero de 2004, presentado por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven tras su visita a España
22. Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo en el año 2008. informe A/HRC/10/3/Add.2 de fecha de 16 de diciembre de 2008
23. <http://www.secuestro-emocional.org/main/DenunciasFalsas-Manual-ETA.htm> .
24. E/CN.4/2004/SR.34 Sra. de RIVERO (Servicio Internacional para los Derechos Humanos). Servicio de Prensa de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 31 de marzo de 2004 respuesta del Sr. PÉREZ-VILLANUEVA Y TOVAR, embajador de España al Relator Espacial contra la Tortura.
25. Documento CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1, 13 de enero de 2009 Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto. Adición Comentarios del Gobierno de España sobre las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/ESP/CO/5).
26. Observaciones del gobierno de España al informe del Relator Especial sobre la Tortura, E/CN.4/2004/G/19, 4de mayo de 2004. Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 60 periodo de sesiones, tema 11ª del programa provisional.
27. Departamentos de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Sanidad e Interior del Gobierno Vasco Protocolo Ertzantza. Protocolo para la Coordinación de la asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación. 2003.
28. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 1 to 12 April 1991. CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 1) - Publication Date: 5 March 1996. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-1.htm>. Accessed January 30, 2007.
29. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 22 April 1994 CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 2) - Publication Date: 5 March 1996. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-2.htm>. Accessed January 30, 2007.

30. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 14 June 1994 Ref.: CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 3) - Publication Date: 5 March 1996. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-3.htm>. Accessed January 30, 2007.
31. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 18 January 1997. Ref.: CPT/Inf (2000) 3 [EN] - Publication Date: 13 April 2000. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2000-03-inf-eng.htm>. Accessed January 30, 2007.
32. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 28 April 1997. Ref.: CPT/Inf (98) 9 [EN] - Publication Date: 19 May 1998. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1998-09-inf-eng.htm>. Accessed January 30, 2007.
33. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 November to 4 December 1998. Ref.: CPT/Inf (2000) 5 [EN] - Publication Date: 13 April 2000. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2000-05-inf-eng.htm>. Accessed January 30, 2007.
34. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 to 26 July 2001. CPT/Inf (2003) 22. Publication [13/03/2003]. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.htm>. Accessed January 30, 2007.
35. Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles informe tras su visita al Estado español del 10 a 19 de Marzo de 2005, CommDH(2005)8
36. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el examen sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su 29º período de sesiones emitió el informe CAT/C/XXIX/Misc.3 de 19 de noviembre de 2002
37. Naciones Unidas quinto examen periódico realizado por el Comité de Derechos Humanos en octubre de 2008. informe CCPR/C/ESP/CO/5/
38. Amnistía Internacional Informe 2005: Una nueva y peligrosa agenda. Índice AI: POL 10/006/2005. http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/Mas_20alla_20del_20papel.pdf
39. Amnistía Internacional la Sal en la herida: La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos” (EUR 41/006/2007),

40. Amnistía Internacional Informe 2007 de Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo. Índice AI: POL 10/001/2007. <http://report2007.amnesty.org/document/172>
41. “¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas en España” HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 17 NO. 1(D) enero de 2005
42. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) – World Organisation Against Torture and Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Human Rights violations in the Spanish state. Lizarra., 2006.
43. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La Tortura en el Estado español, 2004. <http://www.prevenciontortura.org/InformeCPT.pdf>
44. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La Tortura en el Estado español, 2005. <http://www.prevenciontortura.org/informe2005/Informe2005.pdf>
45. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La tortura en el Estado español, 2006. <http://www.prevenciontortura.org/spip/documents/2006-InformeCPT.pdf>
46. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La tortura en el Estado español 2007. Informe
47. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La tortura en el Estado español 2008. Primer borrador, informe en elaboración.
48. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. Informe anual TAT 2000. Bilbao 2001.
49. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. Informe anual TAT 2001. Bilbao 2002.
50. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. Informe anual TAT 2002. Bilbao 2003.
51. . Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. Informe anual TAT 2003. Bilbao 2004.
52. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. Informe anual TAT 2004. Bilbao 2005.
53. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. Informe anual TAT 2005. Bilbao 2006.
54. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. Informe anual TAT 2007. Bilbao 2008.
55. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. Informe anual TAT 2008. Bilbao 2009.
56. Página web del Ministerio de Interior. <http://www.mir.es/>
57. Report E/CN.4/2001/66/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Theo van Boven.
58. Report E/CN.4/2002/76/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Theo van Boven.
59. Report E/CN.4/2003/68/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Theo van Boven.

60. Report E/CN.4/2004/56/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Theo van Boven.
61. Report E/CN.4/2005/62/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Manfred Nowack.
62. Report E/CN.4/2006/6/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Manfred Nowack.
63. Amnistía Internacional. Informe 2008 de Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo. Índice AI: POL 10/002/2008. <http://thereport.amnesty.org/document/43>
64. Amnistía Internacional Informe 2006 de Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo. Índice AI: POL 10/001/2006. www.web.amnesty.org/report2006/index-esl
65. Amnistía Internacional. Informe 2004: Amnistía Internacional. Informe 2004: Resonaron las voces de los jamás escuchados. <http://asiapacific.amnesty.org/report2004/index-esl>
66. Amnistía Internacional Informe anual 2003. Índice AI: POL 10/006/2003/. <http://www.amnesty.org/es/library/info/POL10/006/2003>
67. Amnistía Internacional Informe anual 2002. Índice AI: EUR 01/007/2002)
68. Amnistía Internacional Informe anual 2001. Índice AI: POL 10/001/2001
69. Amnistía Internacional Informe anual 2000. Índice AI: POL 10/001/00
70. Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp>
71. Bojholm S, Foldspang A, Juhler M, Kastrop M, Skylv G, Somnier F. Monitoring the health and rehabilitation of torture survivors. The Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, Copenhagen, 1992.
72. Instituto Vasco de Criminología. Informe sobre Derechos Civiles y Políticos del Instituto Vasco de Criminología. 2007-2008.
73. Paz AB, Portillo C, Arestivo C, Métodos de tortura empleados en Paraguay. In A.B. Paz, C. Portillo, C. Arestivo (eds.), *Médicos, ética y tortura en Paraguay*. RP ediciones. Asunción, 1992 ,pp.29-33.
74. Petersen HD, Wandall JH, Evidence of organized violence among refugees from Indian-held Kashmir. *Torture*, 4 (1994) 90-95.
75. Petersen HD, The controlled study of torture victims. *Scand. J. Soc. Med.*, 17 (1989) 13-20.
76. Lunde I, Ortmann J. Prevalence and sequelae of sexual torture. *Lancet* 1990;336:289-91.
77. Meana JJ, Morentin B, Callado LF, Idoyaga MI. Prevalence of sexual torture in political dissidents. *Lancet* 1995;345:1307.
78. Goldfeld AE, Mollica RF, Pesavento BH, Faraone SV, The physical and psychological sequelae of torture. *J. Am. Med. Assoc.*, 259 (1988) 2725-2729.
79. Rasmussen OV, Medical aspects of torture. *Dan. Med. Bull.*, 37(suppl.1) (1990) 1-88.
80. Morentin B, Petersen HD, Callado LF, Idoyaga MI, Meana JJ. A follow-up investigation on the quality of medical documents from examinations of Basque incommunicado detainees The role of the medical doctors and national and international authorities in the prevention of ill-treatment and torture. *Forensic Science International* 2008;182:57-65.

81. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Informe preliminary al Comité Contra la Tortura. Quinto informe periódico – Noviembre 2009.
82. Comité contra la Tortura de la ONU, de 17 de mayo de 2005. Comunicación No. 212/2002.
83. PSOE. “Libro Blanco del PSOE” 2008. www.psoe.es/download.do?id=122146

REPORT ON VICTIMS OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
DERIVED FROM POLITICALLY MOTIVATED VIOLENCE.
DOCUMENTATION OF TORTURE OF DETAINEES HELD
INCOMMUNICADO IN THE BASQUE COUNTRY FROM
2000 TO 2008:
A SCIENTIFIC APPROACH

Table of Contents

- [0.]. Summary
- [1.]. Basis
- [2.]. Objectives
 - a. Specific objectives
 - b. Comparison of contradicting versions of the phenomenon of torture
- [3.]. Introduction
 - a. Legal framework
 - b. Official position of the Spanish institutions
 - i. National scope
 - ii. Autonomous Community of the Basque Country
 - c. Reports issued by international bodies
 - i. CPT
 - ii. United Nations
 - iii. Non-Governmental Organisations
 - 1. Amnesty International
 - 2. Human Rights Watch
 - d. National and regional NGOs
- [4.]. Material and Methods
 - a. Preparation of the report
 - b. Data collection. Study sources
 - c. Population and period covered for the study. Study subjects
 - d. Variables analysed
 - e. Specific analyses of testimonies/legal claims filed for ill-treatment and/or torture
 - f. Specific analysis of allegations of ill-treatment and/or torture in medical-forensic reports
 - g. Statistical study
 - h. Epidemiological study
- [5.]. Results
 - a. Description of demographic, procedural and criminological characteristics of detainees held incommunicado

- b. Frequency of allegations of ill-treatment and/or torture and of claims filed before the court. Associated factors. Epidemiological analysis
- c. Specific analyses of testimonies/legal claims for ill-treatment and/or torture: Alleged methods of torture. Associated factors
 - i. Relationships between independent variables
 - ii. Moment at which rights are violated
 - iii. Principal methods of ill-treatment and/or torture described
 - iv. Influence of independent demographic, procedural and criminological variables
- d. Specific analysis of medical-forensic reports. Alleged methods of torture. Associated factors
 - i. References to ill-treatment and/or torture described in the reports. General data
 - ii. References to ill-treatment and/or torture in relation to variables of gender, age, law enforcement agency and year of detention
 - iii. Methods of torture

[6.]. Discussion

- a. Main findings of the present report
- b. Implications of our findings on the contradicting versions of the phenomenon of torture
- c. Reliability/credibility of testimonies in allegations of torture among detainees held incommunicado
- d. Legal investigation into allegations of torture
- e. Limitations

[7.]. Conclusions

[8.]. Recommendations

[9.]. References

[0.] Summary

Introduction and Basis

A mandate from the Basque Government Office on Human Rights called for "an exhaustive and rigorous report on the situation of other victims of human rights violations derived from politically motivated violence, with particular emphasis on identifying victims and studying the necessary measures to provide the victims with proper moral recognition and reparation". The outcome of the mandate was the first comprehensive report on these human rights violations. The "*Report on Victims of Human Rights Violations Derived from Politically Motivated Violence*" was submitted to the Basque Parliament Committee for Human Rights and Citizen Requests by the Office on Human Rights on 24 June 2008. Findings from the report suggested the need to dedicate a special section to allegations of torture, since no institutional investigation had been conducted previously.

The phenomenon of torture is subject to contradicting versions. The official position of the Spanish authorities has been to deny its existence. However, a number of associations have concluded that torture is a problem with a high prevalence among detainees held incommunicado (in solitary confinement). Official international bodies have pointed out that "it is premature to conclude that torture has been eradicated in Spain" or that "the frequency of torture is more than sporadic or occasional".

Objectives

To conduct scientific analysis to provide a realistic indication of the incidence of torture and associated factors among detainees held incommunicado.

To provide referenced evidence which helps to corroborate one of the contradicting hypotheses on the phenomenon of torture.

Material and Methods

Retrospective study on possible cases of ill-treatment and/or torture in detainees held incommunicado between 2000 and 2008. The research was divided into three parts:

- Analysis among all detainees held incommunicado during the period under study of the existence of allegations of ill-treatment and/or torture.

- Specific analysis of the methods of ill-treatment and/or torture described in the testimonies/legal claims filed by detainees held incommunicado.
- Specific analysis of the methods of ill-treatment and/or torture described in the medical-forensic reports on detainees held incommunicado.

Numerous sources were consulted for the report: the media, reports by local NGOs and official international organisations, the Ministry of the Interior, judicial proceedings and medical-forensic reports.

The demographic, criminological and procedural factors analysed as independent variables were gender, age, year and province of detention, law enforcement agency making the arrest, Central Examining Court hearing the case, duration of incommunicado detention, legal status following confinement, current/final procedural status.

Results

According to the Ministry of the Interior, 1231 people were detained in relation to ETA. Using the various sources consulted, we identified 957 detainees held incommunicado. 634 of them alleged ill-treatment and/or torture, 446 of whom filed legal claims. The estimated incidence of ill-treatment and/or torture among young men would be 18 cases per 100,000 inhabitants per year.

The following findings stood out: 1) the high rate (85%) of people detained by the "Guardia Civil" (Civil Guard, Spanish military corp) and of detainees held in prison incommunicado (92%); 2) the directly proportional relationship between the frequency of allegations of torture and the duration of solitary confinement; 3) the frequency, between 55% and 70%, among detainees who were later absolved, not prosecuted or whose cases were dismissed.

There are two situations that contrast with this high prevalence: the absence of torture claims filed against the *Ertzaintza* (Basque Police) since 2004 (inclusive), and the low percentage of claims among detainees for reasons of "conducts without violent activity" (people detained as a result of expanding the concept of terrorism to include activities by the so-called political/social structure) by the *Policía Nacional* (National Police) and Central Examining Court No 5 of the National Court of Justice.

We analysed the methods of ill-treatment and/or torture described in 289 testimonies of ill-treatment and/or torture (legal claims were filed in 90% of the cases). The most frequent methods of physical torture were: beatings (85%), awkward/forced positions

(73%), standing for prolonged periods (50%), noise exposure (44%), asphyxiation by placing a plastic bag over the head (36%), and physical exertion (35%). Sexual torture showed a frequency of 68% (mainly sexual humiliation and forced nudity). The most frequent methods of psychological torture were threats (97%), humiliation (67%), visual deprivation (57%) and sleep deprivation (56%). The torture techniques varied depending mainly on the type of law enforcement agency involved; different patterns were observed for the different police agencies. The Civil Guard was the law enforcement agency associated with the most severe pattern. The methods of sexual torture varied in relation to the gender of the detainee. We observed changes in methods compared to the methods described several decades ago.

We analysed a total of 507 medical-forensic reports. 61% of the detainees alleged ill-treatment and/or torture in one or more of the medical-forensic reports. 16% of the detainees made no reference to any allegations of ill-treatment and/or torture. The most frequent methods of physical torture were: beatings, awkward/uncomfortable positions, asphyxiation by plastic bag, and physical exercises.

Discussion and Conclusions

The results on the incidence and extension of the practice of torture in the study population are, at least, disturbing and should in themselves be considered a serious problem by the competent authorities. This concern has been seconded by a number of national and international agencies – incidences of ill-treatment and/or torture of detainees held in incommunicado are more than sporadic or occasional.

The evidence does not support the hypothesis that all or nearly all of the allegations are false and that detainees are routinely instructed to make false claims if caught; statistical indicators show otherwise.

Although the aim of this Report was not to prove beyond a reasonable doubt whether or not detainees have been subjected to ill-treatment, the impression is consistent with pronouncements by international organisations: the allegations were not stereotypical and could not be attributed to mere fabrications.

The absence of effective safeguards against torture, the lack of an exhaustive investigation into the claims, and the problems involved in proving this type of conduct make it difficult to prevent the phenomenon of torture.

The data included in this Report also suggest the importance of a firm political and institutional commitment to prevent human rights violations of this type. Since 2004 the

Basque institutions have demonstrated a strong commitment against torture, a fact made evident by the lack of allegations of torture brought against the Basque Police.

The results of this work underline the need identified in the June 2008 report: The Basque Government should set up an office to respond to the needs of victims of politically motivated violence. With regard to the documentation and reparation of torture victims, the report recommends that after each individual claim is presented, it should be thoroughly analysed and evaluated by a multidisciplinary team of jurists, criminologists, physicians, psychologists, etc.

Besides having implications for establishing measures on moral recognition and reparation of victims, the findings must also incorporate preventive measures.

Abolishing the practice of incommunicado detention would without question be an essential factor in lowering the number of claims for this type of human rights violations.

[1.] Background

During a plenary session in October 2007 dedicated exclusively to the victims of terrorism, the Basque Parliament expressed institutional solidarity with the victims of terrorism and adopted several resolutions reaffirming the commitment of the principal Basque institutions to the victims. The Parliament passed another resolution which mandated that a report be prepared on the situation of other victims of human rights violations derived from politically motivated violence.

A mandate from the Basque Government Office on Human Rights called for "an exhaustive and rigorous report on the situation of other victims of human rights violations derived from politically motivated violence, with particular emphasis on identifying the victims and studying the measures needed to provide the victims with proper moral recognition and reparation".

The outcome of the mandate was the first comprehensive report on these human rights violations. The "*Report on Victims of Human Rights Violations Derived from Politically Motivated Violence*" was submitted to the Basque Parliament Committee for Human Rights and Citizen Requests by the Office on Human Rights on 24 June 2008 (1). The report confirmed the existence of a void in terms of investigation and official recognition of human rights violations caused by political violence in different periods of recent history. This report has been the first step taken by the institutions to assess the number and type of politically motivated human rights violations.

As for the dimension of the problem, until now no institutional or official investigation or specific study has been conducted on the issue; thus, different sources have come up with very different figures on the number of persons affected. In 2002 the UN Committee against Torture expressed its concern for "the dichotomy between the assertion of the State party that, isolated cases apart, torture and ill-treatment do not occur in Spain [...] and the information received from non-governmental sources which reveals continued instances of torture and ill-treatment by the State security and police forces" (2)

The June 2008 report revealed the need to dedicate a special section to allegations of torture, and specific analysis of the allegations was carried out. The report also identified the need to implement extended investigation mechanisms and better

resources to undertake an exhaustive analysis of the cases. The people who have suffered from torture are experiencing a lack of recognition, rehabilitation and effective redress on the part of state structures (1).

In this regard, experiences in other places have shown the importance of investigating human rights violations. International experts have pointed out that scientific investigation can be an essential instrument for: 1) the systematic documentation of human rights violations; 2) the development of programmes related to the prevention of torture; 3) the development of programmes for the reparation and recognition of victims; and 4) the implementation of medical and psychological treatment programmes for victims of human rights violations (3-20).

With regard to the intention of this Report, the application of epidemiological and statistical analyses is considered useful in presenting results which allow for a more accurate and credible assessment of the data. The objective would be to present the findings to national and international governmental institutions, to human rights organisations, the scientific community and/or the courts.

The main objective of the present Report (complementary to the June 2008 report) is to provide a scientific analysis based on epidemiological and statistical instruments which gives us a truer picture of the actual conditions and circumstances surrounding torture. Stemming from this analysis, a further objective is to provide credible and verifiable evidence that helps to corroborate one of the contradicting hypotheses on the phenomenon of torture.

[2.] Objectives

The goal of this paper is to evaluate data covering a period of 9 years on ill-treatment and/or torture in Basque citizens held incommunicado; and to assess data distribution in terms of demographic, procedural and criminological variables. The idea is to develop a statistical/scientific analysis which provides a clear picture of the situation of torture of detainees held incommunicado. There has been no institutional scientific analysis conducted so far on the matter.

Another goal of the present Report is to use statistical instruments to support one of the contradicting hypotheses on this phenomenon.

[2.a.] Specific objectives

The specific objectives are as follows:

- Ascertain the number and percentage of people arrested under anti-terrorist legislation who have made allegations of torture.
- Conduct epidemiological analysis of the incidence of ill-treatment and/or torture in detainees held incommunicado, and their distribution by gender, age, place of arrest, reason for detention, year of detention, Central Examining Court hearing the case, and the law enforcement agency making the arrest.
- Study the frequency of the different methods of ill-treatment and/or torture alleged by detainees arrested under anti-terrorist legislation and their distribution by gender, age, place of arrest, reason for detention, legal situation after arrest, year of detention and the law enforcement agency that made the arrest.
- Study the influence of demographic, procedural and criminological variables which could be relevant in the documentation of human rights violations.
- Compare the findings from this report with the results from earlier reports and studies on incommunicado detainees.

- Assess the overall reliability of allegations of torture, contrasting as a hypothesis the Spanish Government's position that detainees consistently make false allegations.

[2.b.] Comparison of contradicting versions of the phenomenon of torture

As pointed out above, there are contradicting versions of the phenomenon of torture in the Basque Country (1).

The official version of the Spanish Government has been to deny the existence of torture in Spain. The opinion expressed by the Spanish authorities before the UN Special Rapporteur on torture in 2004, and before the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism in 2008 was that reports of torture by persons detained in connection with counter-terrorism measures were false and made systematically as part of the ETA strategy to undermine the Spanish criminal justice system (21-22). The Government provided the Special Rapporteur with a document reportedly found in the residence of members of the "ARABA/98" terrorist cell arrested on 19 March 1998. The document is said to provide instructions on how to claim that one was tortured when in detention (21). The complete document (in Spanish) is available online at <http://www.secuestro-emocional.org/main/DenunciasFalsas-Manual-ETA.htm> (23).

Among the various instructions, the following are of importance for the purposes of this report:

"In any case of detention, however brief and insignificant, even if you are released without charges, without bail or any other repressive measures, you should claim torture."

"Talk about interrogations, beatings, asphyxiation by *bolsa*¹, *bañera*², the rack, and psychological torture." It goes on to say that "the rest we'll leave up to your imagination" (23).

However, a number of associations have concluded that torture is a problem with a high prevalence among detainees held *incommunicado*. One local NGO expressed doubts about actually attributing the document to ETA, presenting a series of similar texts

¹ Asphyxiation with a plastic bag placed over the head.

² Forced immersion of head, also known as the submarine method.

which over the years have been used to offset complaints of torture(1: see note 42 of the June 2008 report, p. 154).

Official international bodies have stated that the occurrence of torture is more than sporadic or incidental, and that the Government should resist the temptation of considering all allegations of torture part of an ETA-inspired strategy. In reference to the strategy defended by the Spanish authorities, the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism maintained that "such a strategy, if true, would unquestionably make it difficult to distinguish between credible and false claims" (22).

One of the objectives described in this Report is precisely to provide data to explain if in fact statistical evidence exists to support whether or not the claims as a whole are false. As a work hypothesis for comparing the different versions, we will assume that the position of the Spanish authorities, i.e. that the allegations of torture are false, the product of ETA instructing its members to systematically report torture.

We therefore consider that:

- There should be no allegations of torture, or at most sporadic or incidental reports, among incommunicado detainees who are released without charges, absolved or not prosecuted.
- Allegations of torture should be systematic among people who are imprisoned or convicted.
- The amount of time held incommunicado should have no effect on the number of torture claims since the supposed instruction says that "In any case of detention, however brief and insignificant (...), you should claim torture".
- The types of torture mentioned in the document attributed to ETA ("Talk about interrogations, beatings, asphyxiation by *bolsa* (plastic bag) or *bañera* (submarine), the rack and psychological torture") should have a high rate of occurrence. Moreover, the percentage should be similar for all of them. On the contrary, the methods of torture not included in the document should be less frequent than the ones that are mentioned.
- The distribution of the methods of torture in relation to external variables should be random; in other words there should be no differences between different law enforcement agencies or between males and female detainees.

[3] Introduction

[3.a.] Legal framework

Under Articles 509, 520 bis and 527 of the Spanish Code of Criminal Procedure, in cases of terrorism detainees are held in incommunicado detention. This system of detention allows for longer periods of time before suspects are brought before a court, in addition to denying them additional rights aimed at protecting the physical integrity of detainees: the right to communicate with a member of the family, attorney or trusted medical doctor. Far from shortening the five-day incommunicado period, as unanimously recommended by international watchdog organisations – United Nations Committee against Torture, Committee for the Prevention of Torture (Council of Europe), Special Reporter on torture after his visit to Spain in October 2003 – under Organic Law 15/03 of 25 November, individuals can be held in incommunicado custody for another 8 days, thus bringing the total to 13 days.

[3.b.] Official position of the Spanish institutions

For the sake of rigor, we should differentiate between the stance regarding the existence of – credibility of the testimonies presented, recognition of torture cases – and the stance regarding solitary confinement as a specific form of detention. The denial of torture goes hand in hand with the defence of the regime of incommunicado detention grounded in anti-terrorist efficiency. Conversely, the position which recognises the existence of torture, regardless of nuances or reservations, carries with it an unequivocal call for the abolition of incommunicado custody. Although the first attitude is the most common among political leaders and institutions at the State level, the second coincides with the opinion of the Basque institutions and with the general attitude of national and international human rights organisations, which have issued statements or recommendations on the issue and which will be the focus of analysis later in this report. In this regard, we should point out that there is a significant and generally unbridgeable divide between the two positions.

[3.b.i.] Authorities at the State level

Congress of Deputies

In 2006 Parliamentary debates were held on the subject of incommunicado detention. A bill was introduced to the Spanish Parliament on 25 April by the Mixed Parliamentary Group which called for the repeal of Articles 509, 520 bis and 527 of the Code of Criminal Procedure for the purpose of revoking incommunicado detention. The bill was later rejected by the votes of the majority parties *Partido Popular* (PP) and the *Partido Socialista* (PSOE). On 19 September a new debate was held in the Spanish Congress on a position paper which called for the Spanish Government to revoke the regime of incommunicado detention of people arrested on the grounds of terrorism. Votes from the PSOE and the PP kept the position paper from going forward despite support from most of the minority parties in the Congress.

Public statements by government officials

It is not our intention here to provide a comprehensive review, but the attitude of government officials, regardless of their political affiliation, was to consider the existence of torture a fallacy. Three factors make this attitude evident. The first was to deny the facts and attach no criminal relevance to the allegations; the second was when accusations of slander were brought against the State security forces; the third and more recent was to regard the allegations as coming from an ETA directive aimed at using false claims to undermine the State security forces, and could therefore constitute the crime of collaborating with an armed group (1: see note 42 of the June 2008 report; p. 154).

As pointed out in the June 2008 report 2008 (1; June 2008 report; p. 32), "According to the Amnesty International report, in interviews held in 2007 with the organisation, representatives from the office of the Ombudsman, judicial authorities and the police recognised in general that there had been cases of ill-treatment by law enforcement officers. However, many of them said that the incidents were isolated and that the vast majority of the complaints against law enforcement officers for ill-treatment were false (although they did not specify whether they had been thoroughly investigated)".

This statement is based on the apparent lack of torture cases decided by competent courts of justice. Thus, government representatives have not hesitated to attempt to discredit the work of certain organisations – United Nations Special Rapporteur on Torture, or the more recent Human Rights Committee – in response to criticism or recommendations for the prevention and eradication of torture in Spain (24-26).

[3.b.ii.] Institutions of the Autonomous Community of the Basque Country

The attitude described above has differed markedly in recent years from the position held by the Institutions of the Autonomous Community of the Basque Country.

In late 2003 the Basque Department of the Interior, in consultation with the Basque Department of Health, incorporated a number of additional safeguards in a protocol to be applied by the Ertzaintza (Basque Police) in cases of incommunicado detention. The Protocol outlines how activities are coordinated between the Basque Police, the Basque Health Service and the Basque Institute of Legal Medicine (27).

On 1 December 2006 the Basque Parliament approved a position paper which called for the Spanish Government to repeal the Anti-Terrorism Act and eliminate the regime of incommunicado detention and the competences of the *Audiencia Nacional* (National High Court). On 6 July the Basque Government presented the "Plan for the defence and promotion of civil and political rights", which calls for concrete measures to be taken to eradicate torture and specifically to abolish the regime of incommunicado detention. On 25 October 2007 the Interior Committee of the Basque Parliament passed a bill to amend the Code of Criminal Procedure, eliminating incommunicado detention, which would have to be put to debate by the Spanish Parliament. However, the majority parties in the Cortes (Spanish legislative assembly) – PSOE and PP – opposed the request arguing that "it would only serve to dismantle an important part of the anti-terrorist legislation".

[3.c.] Reports issued by international bodies

The June 2008 report (1) points out that torture in Spain has been the subject of observation and regular systematic scrutiny by inter-governmental agencies, including the United Nations Committee against Torture and the European Committee for the Prevention of Torture. All of the investigations have been in accordance with a series of

international instruments signed and ratified by Spain. Organisations such as Amnesty International have also paid regular attention to this phenomenon and its peculiarities. For years these human rights organisations have expressed a deep concern about reports of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment at the hands of Spanish law enforcement authorities and about the effective impunity of police officers in many of the cases. They have also expressed concerns about the persistence of shortcomings in guarantees accorded to detainees and the excessive delay and failure on the part of the competent investigating courts to thoroughly examine the events.

These international bodies have unanimously expressed their opposition to the regime of incommunicado detention, taking a stance against this practice on numerous occasions because to its association with ill-treatment and torture.

Nevertheless, we feel that it is extremely important to value not only their position, but also the facts found during course of their work, most of which have been the outcome of face-to-face interviews. In this way, they have directly addressed the issue of source credibility, the central touchstone of this controversial phenomenon.

[3.c.i.] CPT:

Since Spain ratified the European Convention for the Prevention of Torture on 2 May 1989, the European Committee for the Prevention of Torture (CPT) has visited the country on eleven occasions. While nine reports on the visits to Spain have been made public, the Spanish Government has kept the last two reports confidential (28-34). The recommendations repeatedly include the abolition of incommunicado detention.

However, for the purposes of this Report, the most relevant part of the CPT reports are the findings from interviews conducted by the various delegations that have visited Spain. One example is the report from the CPT's first periodic visit on 1 to 12 April 1991 CPT/Inf (96) 9 [Part 1], which said that the "delegation did hear a certain number of allegations of very recent torture or severe ill-treatment, and not only, it should be stressed, from persons detained on suspicion of offences of a terrorist nature. It would therefore be premature to conclude that the phenomena of torture and severe ill-treatment have been eradicated." After visiting Spain in 1991 and 1994 and examining allegations of torture (asphyxiation by the placing of a plastic bag over the head, electric shocks, strenuous physical exercises, etc.) from several prisoners, the CPT concluded that the accounts were not of a stereotyped nature. Instead, they were detailed and largely concordant, displaying variations which were credible in view of the personal circumstances of the individuals concerned.

This opinion, according to the information collected, has been repeated in a number of CPT reports. Another example can be seen in CPT/Inf (2003) 22, the report drawn up after the visit to Spain from 22 to 26 July 2001: "... the CPT's delegation interviewed a number of persons detained in recent months on suspicion of terrorist-related offences. Certain of them alleged that they had been ill-treated while held in the custody of the National Police and the Civil Guard. Their allegations included blows to various parts of the body and, in some cases, more severe forms of ill-treatment. The latter included allegations of asphyxiation by plastic bag, and of electric shocks in the case of detainees arrested by the Civil Guard. Much like some of its previous visits, the delegation gathered ample evidence, including of a medical nature, consistent with allegations of ill-treatment received by it. In particular, despite the time elapsed, in several cases, the delegation's doctors observed traces of injuries which were consistent with the allegations made by the persons in question."

Also in the scope of the European Commission, the findings contained in the report by Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights on his visit to Spain from 10 to 19 March 2005, CommDH(2005)8, concur with the CPT. One of the recommendations in his report is to "review the current regime of incommunicado detention so as to allow the detainee to meet his or her counsel in private, at least once".

[3.c.ii.] United Nations

In line with the CPT, United Nations monitoring bodies on the prevention of torture have also taken a position against incommunicado detention and expressed their conviction that instances of torture persist in Spain.

In its twenty-ninth session, the United Nations Committee against Torture issued a report on compliance with the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT/C/XXIX/Misc.3). The report concluded: "The Committee continues to be deeply concerned by the fact that incommunicado detention up to a maximum of five days has been maintained for specific categories of particularly serious offences. During this period, the detainee has no access to a lawyer or to a doctor of his choice nor is he able to notify his family. Although the State party explains that incommunicado detention does not involve the complete isolation of the detainee, who has access to an officially appointed lawyer and a forensic physician, the Committee considers that the incommunicado regime, regardless of the legal safeguards for its application, facilitates the commission of acts of torture and ill-treatment" (36).

The United Nations Committee against Torture later analysed the Report of the Special Rapporteur on the question of torture, E/CN.4/2004/56/Add.2, written by Theo van Boven on his visit to Spain (21). The expert "attaches great value to the opinion of credible interlocutors from the judiciary, the academic world and civil society that certain actors and militants supporting radical Basque causes may well use as a tactic the systematic practice of trumped-up allegations of torture and ill-treatment. At the same time, these interlocutors also conveyed their opinion to the Special Rapporteur that security and law enforcement agents, particularly in their counter-terrorist activities, do resort more than sporadically to practices that constitute torture or cruel,

inhuman or degrading treatment. This opinion was shared by a considerable number of non-governmental organizations that the Special Rapporteur met and was confirmed by a series of testimonies presented to the Special Rapporteur by persons who had been arrested, detained and interrogated by the State security and police forces. These statements referred to treatment that included beatings, exhausting physical exercises, asphyxiation by placing a plastic bag over the head (*bolsa*), and humiliating sexual harassment. It is the considered view of the Special Rapporteur, in the light of the internal consistency of the information received and the precision of factual details, that these allegations of torture and ill-treatment cannot be considered to be fabrications. The Special Rapporteur does not conclude that the treatment just described would constitute a regular practice but, in his view, their occurrence is more than sporadic and incidental." He underlined this idea, adding that "The Special Rapporteur concludes that torture or ill-treatment is not systematic in Spain, but that the system as it is practised allows torture or ill-treatment to occur, particularly with regard to persons detained incommunicado in connection with terrorist-related activities." In the section on recommendations to eradicate the phenomenon of torture, the Special Rapporteur stated: "Since incommunicado detention creates conditions that facilitate the perpetration of torture and can in itself constitute a form of cruel, inhuman or degrading treatment or even torture, the incommunicado regime should be abrogated."

One of the United Nations' most recent international positions is included in the Human Rights Committee's fifth periodic report of Spain, October 2008 (37). One of the concluding observations (CCPR/C/ESP/CO/5/) states that "The Committee notes with concern that there continue to be reports of cases of torture and that the State party does not seem to have prepared a comprehensive strategy or taken adequate steps to eradicate this practice once and for all". It goes on to say that "The Committee does not share the State party's view that maintaining the practice of incommunicado detention is necessary and justified by 'the interests of justice'. It considers that the practice can be conducive to ill-treatment, and regrets that it persists despite recommendations by several international bodies and experts that it should be abolished". The Spanish Government's categorical response to the recommendation is included in CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1 of 13 January 2009. In line with the positions mentioned earlier – denying the existence of torture and disavowing anyone who makes claims thereof – the Spanish Government feels that the Committee's analysis "does not reflect

reality," adding that "The Spanish Government takes the view that the Committee has, on the contrary, accepted a wide range of distorted views on the situation, with the result that the draft observations are unbalanced" (25).

Lastly, the United Nations' most recent international position comes from the Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, by Martin Scheinin after he conducted a visit to Spain in May 2008 (22). Scheinin's report, A/HRC/10/3/Add.2, dated 16 December 2008, states: "The Special Rapporteur considers in detail the use of incommunicado detention", adding that "he expresses concern about allegations of torture and other ill-treatment made by terrorism suspects held incommunicado". The report goes on to say that "The Special Rapporteur is concerned about allegations of continuous interrogations without the presence of a lawyer, combined with threats related to the origin of the detainees, deprivation of sleep and in some cases the use of physical force. (...) Considering that a large part of those arrested were later released due to lack of evidence and were not even called to testify, the Special Rapporteur is worried that, in some cases, the incommunicado regime might have been used for the purpose of obtaining information that could further the investigations rather than merely in respect of actual terrorism suspects". The expert reminds the State that it "has positive obligations to conduct prompt, independent, impartial and thorough investigations whenever there are reasonable grounds to believe prohibited treatment has taken place, as well as to ensure that victims of torture and ill-treatment have access to an effective remedy and receive adequate reparation, including compensation".

[3.c.iii.] Non-Governmental Organisations

Several non-governmental organisations have also gathered field data with which to make an assessment on the existence of torture in the repression of crimes linked to terrorist activities. Included here are international NGOs that have worked 'in the field' and have provided a perspective based on their own findings.

Amnesty International

Amnesty International is unquestionably the organisation that has referred to the existence of torture in Spain more than any other, and the one that has insisted the most on the implementation of prevention and eradication mechanisms (38-40)

One example was a reminder in the 2005 Annual Report for Spain (38), that they had received "a large of allegations connected with the practice of incommunicado detention", considering that "the precision of factual details provided in relation to a number of allegations suggested that they could not be fabrications". The report also added that "the degree of silence that surrounds the subject and the denial by the authorities without investigating the allegations of torture have made it particularly difficult to provide the necessary monitoring of protection and guarantees". Amnesty International pointed out that "The former government, which vigorously repudiated the report's conclusions, continued to refuse to introduce safeguards for incommunicado detainees and by the end of the year the new government had made no moves to implement the Rapporteur's recommendations".

In its 2007 annual report (40), Amnesty International said that "There continued to be reports of torture and ill-treatment by law enforcement officers". It specifically mentions that "During investigations into the case of 22 people arrested in January 2006 on terrorism-related charges, several detainees told the investigating judge that they had been tortured and otherwise ill-treated by Civil Guard agents while held incommunicado. No criminal investigation into these claims was known to have been made by the end of the year".

Human Rights Watch

The Human Rights Watch report "Setting and Example? Counter-Terrorism Measures in Spain", Vol. 17 No. 1(D), January 2005 (41) begins with the following explanation: "This report examines aspects of Spain's antiterrorism regime that give rise to violations of Spain's obligations under international human rights law. It makes concrete recommendations to the government of Spain on ways to bring its counter-terrorism measures into conformity with international standards".

Although many of the points focus on the treatment of detainees accused of international terrorism, HRW recognises that Spain has applied "strict antiterrorism

measures, shaped by years of grappling with ETA violence (...). Under these measures, spelled out in Spain's Code of Criminal Procedure, detainees suspected of membership in an armed group may be held in incommunicado detention for up to thirteen days and may be held in pre-trial detention for up to four years". It goes on to say that "During incommunicado detention, detainees are held in isolation and do not have the right to counsel from the outset of detention or to a lawyer of their own choosing. [...] The law and practice of incommunicado detention in Spain renders the right of detainees to file a writ of habeas corpus challenging the lawfulness of their detention virtually meaningless".

[3.d.] National and regional NGOs:

Other Spanish and Basque organisations also collect information directly 'in the field'. The main areas of concern are recorded by these organisations and associations, many of which are part of the umbrella organisation for the prevention of torture "Coordinadora para la Prevención de la Tortura". In its annual reports the organisation has documented thousands of individual cases of torture, including cases of prisoners held incommunicado. It has also prepared analyses and issued recommendations (42-47). Torturaren Aurkako Taldea (TAT) is a Basque NGO and member of "Coordinadora para la Prevención de la Tortura". The group against torture has published annual reports on the phenomenon of torture, focusing primarily on detainees held incommunicado. (48-55).

[4].- Material and Methods

The present Report is based on a retrospective study of potential violations of fundamental rights in connection with allegations of ill-treatment and/or torture. The research was divided into three parts:

- Analysis among all detainees held incommunicado during the period under study of the existence of allegations of ill-treatment and/or torture.
- Specific analysis of the methods of ill-treatment and/or torture described in the testimonies/legal claims filed by detainees held incommunicado.
- Specific analysis of the methods of ill-treatment and/or torture described in the medical-forensic reports on detainees held incommunicado.

[4.a.] Preparation of the report

Along the same lines as the June 2008 report (1, p. 21), , the Office on Human Rights, in addition to its own organic structure, created a Technical Department to coordinate and give impulse to the preparation and publication this Report. It was also in charge of contacting the organisations that provided the data on which this paper is based. The Technical Department was responsible for collecting – and accessing – the various sources of information described in the following section. The Technical Department also had outside technical support in the enquiry on human rights violations.

It is important to bear in mind the obligation to comply with data protection regulations regarding usage, conveyance, distribution, recording or reproduction of the information provided in this report.

[4.b.] Data collection. Study sources.

Information was gathered from the following sources:

- The leading newspapers and yearbooks published in the Basque Country. The data obtained was then crosschecked with other sources.
- Ministry of the Interior website (the website contains the dates the terrorist cells were broken up) (56).
- Reports by the United Nations Special Rapporteur against Torture, Amnesty International, Coordinadora para la Prevención de la Tortura and TAT (Torturaren Aurkako Taldea) (38-40,43-55,57-69).

- Legal records from cases in which claims were filed. This documentation was made available by some of the lawyers acting as private prosecutor. The investigative team had access to the entire docket and was able to obtain the information needed for the present Report (including copies of the claims and of medical-forensic reports when included in the case).
- Information related with the variables analysed in this study (see section 4d) provided by the defence lawyers representing the detainees.

Primary sources from the National High Court were not accessible.

[4.c.] Population and period covered for the study. Study subjects.

All of the Basque people held in incommunicado detention arrested in Spain under anti-terrorist legislation from January 2000 to December 2008. As defined in the June 2008 report (1, June 2008 Report; p. 23), all of the data included here is limited to:

- a) events occurring in the Basque Country,
- b) events occurring in other geographic areas, which targeted Basques or other people, and which were related to the 'Basque problem' or ETA.

According to the 2001 Population Census, the total population of the geographical area analysed was 2,638,416 inhabitants (70) (<http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp>).

[4.d.] Variables analysed

Table 4.1 shows the data analysed from all of the cases of incommunicado detention.

[4.e.] Specific analysis of testimonies/legal claims for ill-treatment and/or torture

In cases in which the detainee filed a legal claim, the lawyers provided a copy of the claim. It was impossible to represent a random sampling of the claims since some of the lawyers declined the invitation to cooperate and others could not be located. The lawyers who did cooperate handed over the material in their possession at the time

regarding all of the cases. When legal claims were not filed, TAT provided testimonies by the detainees.

The methods of torture described in the testimonies were analysed using a partially modified version of the RCT/IRCT protocol (71) (*Table 4.2*).

The following data was also codified:

- Violent detention: yes / no / unknown
- Ill-treatment and/or torture at place of arrest: yes / no / unknown
- Ill-treatment and/or torture during transfer: yes / no / unknown

Ill-treatment and/or torture at destination: yes / no / unknown

Table 4.1. Variables analysed of all incommunicado detainees arrested under anti-terrorist legislation.

Gender	<ul style="list-style-type: none"> Released without charges (without remand in custody)
Age (years)	
Date of detention (day, month, year)	<ul style="list-style-type: none"> Released without charges (after being brought before a court)
Time of arrest	
Province of detention	<ul style="list-style-type: none"> Pre-trial release (on bail or other measures)
Reason for detention:	<ul style="list-style-type: none"> Imprisonment without solitary confinement Incommunicado imprisonment
<ul style="list-style-type: none"> Membership in an armed group Collaboration with an armed group Sabotage (street violence) Conducts without violent activity * 	Current/final procedural status
Regime of incommunicado detention:	<ul style="list-style-type: none"> Absolved Not prosecuted Prosecution pending resolution Provisional dismissal Definitive dismissal
<ul style="list-style-type: none"> Yes No 	<ul style="list-style-type: none"> Convicted In progress, not yet prosecuted Case dismissed No data
Law enforcement agency making arrest	Allegations of ill-treatment and/or torture
<ul style="list-style-type: none"> Civil Guard National Police Basque Police Other police forces in Spain French Police 	<ul style="list-style-type: none"> Yes No
Central Examining Court	Legal claim for ill-treatment and/or torture
Duration of detention (days)	<ul style="list-style-type: none"> Yes No

Legal status following confinement

* The reason “Conducts without violent activity” (22) refers to people detained as a result of expanding the concept of terrorism to include activities carried out by the so-called political/social structure.

Table 4.2. Methods of torture described in testimonies.

PSYCHOLOGICAL TORTURE

Deprivation

- Sensory deprivation
 - Visual deprivation
- Perceptual deprivation
- Sleep deprivation/Constant interrogation
- Nutrition withheld (solids and liquids)
- Insufficient treatment of illness
- Hygiene and living conditions
 - Insufficient/irregular access to toilets, including during menstruation
 - Preventing personal cleanliness
- Exposure to extremes of heat or cold: cold/heat, wet/dry conditions

Coercive techniques

- Impossible choice/incongruent actions (tragic conflict, dilemma)
 - Forced to watch other people tortured or executed, or to take part in the act
 - Kept from helping others
 - Betrayal, revealing information/signing false confessions/Memorisation
 - Blind obedience
- Threats**
- Against victim
 - Feigned execution
 - Against mental integrity of victim
 - Of causing permanent injury, disability or limp
 - Against others
 - Humiliation against victim's dignity and identity

Sexual torture

Communication techniques

- Whatever answer is given has the opposite effect
 - Opinions on good/bad cooperation are a reason to continue with the torture
 - Double blind situations
 - Good cop/bad cop routine
 - Contradictory information and messages
 - False information
 - Rumours, whispering, confusing messages
 - Benefits obtained only through certain conducts.
 - Intentional misuse of medical methods for treatment on ill persons
-

PHYSICAL TORTURE

Codification of part of body:

- Head and face
- Neck and throat
- Back
- Thorax/abdomen
- Upper extremities
- Lower extremities
- Genitals/anus
- Combination of several areas
- Generalized/systematic abuse affecting all of the body

Methods of physical torture

- Beating and shoving
 - Pinching and squeezing/pressure
 - Penetrating trauma
 - Insertion of objects into bodily orifices
 - Overstretching of the body or a part thereof (including suspension methods)
 - Physical exhaustion
 - Forced to remain in uncomfortable positions
 - Physical exertion
 - Standing for prolonged periods
 - Asphyxiation
 - Strangulation
 - Obstruction of the airway (including nose/mouth)
 - Drowning
 - Exposure to chemicals
 - Exposure to extreme temperatures
 - Cold
 - Heat
 - Exposure to electricity (electrodes)
 - Exposure to bright light
 - Exposure to noise
-

[4.f.] Specific analysis of allegations of ill-treatment and/or torture in medical-forensic reports

During the period of incommunicado detention forensic doctors examine the detainees on a regular basis (generally daily) at the police station, and again at the National Court facility on the day they are scheduled to appear before the Central Examining Court.

The reports are generally made by the forensic doctors of the National Court when the detainee is held in Madrid, and by the forensic doctors of the ordinary courts when the detainee is held in a police station outside of Madrid.

The medical-forensic reports analysed were part of the judicial proceedings into allegations of torture obtained through the lawyers that handled the cases. As pointed out in the previous section, we analysed all of the extant medical reports.

The data collected from the medical-forensic reports are as follows.

- Number of reports per detainee
- References to the existence of ill-treatment and/or torture. The references were divided into the following categories with regard to allegations of ill-treatment and/or torture:
 - “Yes”. When allegations of ill-treatment and/or torture were described in one or more of the reports on the detainee.
 - “No”. When the description (partial or absolute) suggested that ill-treatment and/or torture did not take place.
 - No reference to physical or psychological ill-treatment
 - No reference to ill-treatment
 - No reference to physical ill-treatment
 - No reference to beatings
 - Reference to "correct" or "good" when asked about treatment.
 - Inconclusive
 - "Not indicated". When the report made no mention of the type of treatment by police.
 - “Ambiguous”. When the terminology used did not reveal the full implications of the statement made by the detainee (e.g.: "better than I expected"; "not all bad"; "average";

- “Non-collaboration”. When the record showed that the detainee did not answer the question of whether there was ill-treatment and/or torture.

The allegations of ill-treatment and/or torture were categorised as shown in *Table 4.3*.

Table 4.3. Methods of ill-treatment and/or torture described in medical-forensic reports

Physical torture

Methods of physical violence

Beatings

Electricity

Other

Physical exertion

Awkward/uncomfortable positions / standing for prolonged periods

Physical exertion

Asphyxiation

Plastic bag

Other

Psychological torture

Threats

Other

Sexual torture

Physical methods

Psychological methods

Forced nudity

[4.g.] Statistical analysis

The results are expressed as means (standard deviation) of individual values or as percentages.

The X^2 test with and without Yates' correction, and Fisher's exact test were used in the statistical study in order to evaluate the association between period of time, gender, law enforcement agency and legal situation after arrest. They were also employed to compare the frequency of the different methods of torture in relation to demographic, procedural and criminological variables. In this analysis, the year of detention variable was coded into three-year groups: 2000-2002, 2003-2005 and 2006-2008.

The quantitative variables were compared using Student's t Test.

The logistic regression test was used when significant interactions were observed between variables.

All analyses were carried out using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program. The level of significance was chosen as $p < 0.05$. Only the methods with a frequency higher than 10% were considered in the statistical analysis.

[4.h.] Epidemiological study

The incidence of torture for the entire population, including both genders and all age groups, was calculated based on the census data for the provinces studied (70).

[5.]. Results

[5.a.] Description of demographic, procedural and criminological characteristics of detainees held incommunicado

According to the sources consulted during the 9-year study period, 957 people were held in incommunicado detention under Spain's anti-terrorist legislation. The demographic and legal data are shown in *Table 5.1*. There was a majority of males (79%). The average age was 25, although in a large percentage of the cases (77%), the age was not known. The greatest number of arrests took place in 2001 and 2002. Guipúzkoa was the province with the most arrests. The most common reason for detention was collaboration with an armed group, followed by Sabotage (street violence). The National Police was the agency that made the most arrests and Central Examining Court No 5 received the most detainees (39%). In contrast, Central Examining Court No. 2 only received 5% of the detainees. The most frequent legal situation after appearing before the Central Examining Court was imprisonment without solitary confinement (61%). The most common procedural situations are convicted, prosecution pending resolution and not prosecuted. 634 detainees made allegations of ill-treatment and/or torture; 446 of them filed legal claims.

[5.b.] Frequency of allegations of ill-treatment and/or torture and of claims filed before the court. Associated factors. Epidemiological analysis

The findings on the percentage of detainees who reported ill-treatment and/or torture are shown in *Table 5.2*. There were no statistically significant differences in the percentage of allegations of ill-treatment and/or torture with regard to gender, age or three-year period. By province, the frequency of allegations was higher in Navarra (82%) than in other areas ($p < 0.01$).

Statistically significant differences were observed across all of the procedural and criminological variables in the frequency of allegations of ill-treatment and/or torture: reason for detention, law enforcement agency making arrest, Central Examining Court, duration of incommunicado detention, legal status following confinement and current/final procedural status.

Particularly noteworthy are the following findings on the frequency of allegations of ill-treatment and/or torture *Table 5.2.:*

- The low rate (16%) among detainees arrested for “conducts without violent activity” (people detained as a result of expanding the concept of terrorism to include activities by the so-called political/social structure).
- The high rate among detainees arrested by the Civil Guard (85%).
- The lower rate (55%) among detainees brought before Central Examining Court No. 5 than other courts.
- The directly proportional relationship between the frequency of allegations of torture and the duration of incommunicado detention.
- The low rate among detainees released without charges (without being brought before a court) and the high rate among prisoners held in incommunicado detention.

Also significant are data on the frequency of allegations of ill-treatment and/or torture among detainees who were later dissociated from any criminal activity *Table 5.2.:*

- 35% of the detainees released without charges and without being brought before a court,
- 64% of the detainees released without charges after being brought before a court,
- 69% of the detainees who were absolved,
- 55% of the detainees who were not prosecuted,
- 70% of the detainees for whom the case was dismissed.

Other notable findings:

- Since 2004 (inclusive) there have been no legal or public allegations of ill-treatment and/or torture by the Basque police.
- 91% of the 125 detainees arrested by the National Police for “Conducts without violent activity” and brought to Central Examining Court No. 5 did not claim ill-treatment and/or torture.

446 (70%) of the 634 detainees held incommunicado who made allegations of ill-treatment and/or torture filed legal claims. *Table 5.3* presents data on the percentage of detainees who filed legal claims among those making allegations of ill-treatment and/or torture. There were no statistically significant differences between the percent of detainees who filed legal claims with regard to gender, age, year of detention, province and Central Examining Court. The highest percentages of claims of ill-treatment and/or torture were observed among detainees arrested for membership in an armed group, detainees arrested by the Civil Guard, detainees held incommunicado for the longest periods of time, and detainees who enter prison. However, a considerable percentage of detainees who were released without charges, absolved or not prosecuted, or whose cases were dismissed filed legal claims for ill-treatment and/or torture.

Epidemiological analysis

The incidence of allegations of ill-treatment and/or torture among detainees held incommunicado for the total population of the study's geographical scope was 2.6 cases per 100,000 inhabitants per year. The highest number was in the province of Guipúzcoa, with 3.9 cases/100,000 inhabitants/year.

In accordance with the data obtained, 55% of the sample analysed were males between 20 and 29 years of age. The estimated incidence of alleged ill-treatment and/or torture was highest among young males, accounting for 18 cases/100,000 inhabitants/year.

Table 5.1. Demographic, criminological and procedural data

	N	%
Gender		
Male	760	79
Female	197	21
Age (years)		
Mean (standard deviation)	25 (6) years	
Year of detention		
2000	124	13
2001	176	18
2002	183	19
2003	148	15
2004	74	8
2005	62	6
2006	20	2
2007	74	8
2008	95	10
Unknown	1	0
Province of detention		
Álava	78	8
Guipúzcoa	394	41
Navarra	133	14
Vizcaya	271	28
Other	81	9
Reason for detention		
Membership in an armed group	166	17
Collaboration with an armed group	324	34
Sabotage (street violence)	228	24
Sabotage + other	65	7
Conducts without violent activity	157	16
Law enforcement agency making arrest		
Civil Guard	260	27
National Police	512	54
Basque Police	181	19
French Police	4	0
Central Examining Court		
1	107	11
2	49	5
3	122	13
4	82	9
5	373	39
6	115	12
Other Courts	41	4
Unknown	68	7
	N	%

Duration of incommunicado detention (days)		
0 to 1	28	3
1 to 2	77	8
2 to 3	233	24
3 to 4	286	30
4 to 5	248	26
5 to 6	65	7
Unknown	20	2
Legal status following confinement		
Released without charges (without being brought before a court)	62	6
Released without charges (after being brought before a court)	72	7
Pre-trial release (on bail or other measures)	196	20
Imprisonment without solitary confinement	582	61
Incommunicado imprisonment	38	4
Unknown	7	1
Current/final procedural status		
Absolved	59	6
Not prosecuted	186	19
Prosecution pending resolution	203	21
Provisional dismissal	33	3
Definitive dismissal	30	3
Convicted	276	29
In progress, not yet prosecuted	98	10
Case dismissed	23	2
No data	49	5
Allegations of ill-treatment/torture		
Yes	634	66
No	323	34
Legal claim filed		
Yes	446	47
No	511	53

Table 5.2. Percentage of detainees held incommunicado who made allegations of ill-treatment and/or torture

	Allegations of ill-treatment/torture (%)
Year of detention	
2000	69
2001	58
2002	71
2003	63
2004	76
2005	84
2006	20
2007	61
2008	68
Province of detention	
Álava	50
Guipúzcoa	61
Navarra	82
Vizcaya	69
Reason for detention	
Membership in an armed group	79
Collaboration with an armed group	77
Sabotage (street violence)	72
Sabotage + other	88
Conducts without violent activity	16
Law enforcement agency making arrest	
Civil Guard	85
National Police	58
Basque Police	62

	ill-treatment/torture (%)
Central Examining Court	
1	78
2	69
3	88
4	83
5	55
6	77
Duration of incommunicado detention (days)	
0 to 1	7
1 to 2	35
2 to 3	57
3 to 4	65
4 to 5	90
5 to 6	67
Legal status following confinement	
Released without charges (without being brought before a court)	35
Released without charges (after being brought before a court)	64
Pre-trial release (on bail or other measures)	65
Imprisonment without solitary confinement	69
Incommunicado imprisonment	92
Current/final procedural status	
Absolved	69
Not prosecuted	55
Prosecution pending resolution	55
Provisional dismissal	82
Definitive dismissal	70
Convicted	79
In progress, not yet prosecuted	69
Case dismissed	70

	Allegations of
--	----------------

Table 5.3. Percentage of detainees held incommunicado who filed legal claims for ill-treatment and/or torture

	Legal claims filed (%)		claims filed (%)
Reason for detention	$p < 0.05$	Legal status following confinement	$P \leq 0.001$
Membership in an armed group	80	Released without charges (without being brought before a court)	45
Collaboration with an armed group	65	Released without charges (after being brought before a court)	39
Sabotage (street violence)	71	Pre-trial release (on bail or other measures)	66
Sabotage + other	70	Imprisonment without solitary confinement	76
Conducts without violent activity	72	Incommunicado imprisonment	77
Law enforcement agency making arrest	$P \leq 0.01$	Current/final procedural status	$P \leq 0.001$
Civil Guard	80	Absolved	66
National Police	65	Not prosecuted	52
Basque Police	66	Prosecution pending resolution	60
Duration of incommunicado detention (days)	$P \leq 0.001$	Provisional dismissal	70
1 to 2	52	Definitive dismissal	86
2 to 3	59	Convicted	79
3 to 4	68	In progress, not yet prosecuted	76
4 to 5	83	Case dismissed	87
5 to 6	71		

	Legal
--	-------

% represents the percentage of detainees who filed legal claims among all allegations of ill-treatment and/or torture.

[5.c.] Specific analysis of testimonies/legal claims filed for ill-treatment and/or torture Alleged methods of torture. Associated factors.

We analysed the methods of ill-treatment and/or torture described by 288 detainees held incommunicado in the period from 2000-2008. In 90% of the cases formal legal claims were filed. The frequency of males was 81%. The average age was 26.2 years (standard deviation 6.3 years). The distribution per three-year period was as follows: 2000–2002, 122 cases; 2003–2005, 118 cases; 2006–2008, 48 cases. The law enforcement agencies more commonly involved in detention were the Civil Guard (121 cases) and the National Police (118 cases), followed by the Basque Police (45 cases) and other police forces (4 cases). Among the cases with a known time of arrest, the most common time was during the night: In 130 of the 192 cases with a known time of arrest detainees were taken into custody between 11:00 pm and 7:00 am; 86 were detained between 1:00 am and 4:00 am.

[5.c.i.i.] Relationships between independent variables

There were no significant differences in the distribution of frequencies between gender and law enforcement agency, or between gender and year of detention. However, significant differences were observed in the frequency of arrests made by each law enforcement agency based on the three-year periods established ($p < 0.001$) (Table 5.4.).

Table 5.4. Detainees by law enforcement agency in relation to period of time

	2000-02		2003-05		2006-08	
	N	%	N	%	N	%
Civil Guard	65	53.3%	31	27.2%	25	52.1%
National Police	29	23.8%	66	57.9%	23	47.9%
Basque Police	28	23.0%	17	14.9%		

The mean age did not vary significantly across gender and three-year period. The average age of the group arrested by the Civil Guard was significantly higher than those arrested by the National Police and the Basque Police (28, 25.3 and 23.7 years, respectively).

[5.c.ii.] Moment at which rights are violated

Ninety-two (32%) detainees referred to violence against person or property at the time of arrest: 58 (20%) reported ill-treatment and/or torture at the place of arrest; 153 (53%) reported ill-treatment and/or torture during transfer (almost always from the place of arrest to Madrid), and 285 (99%) at the destination.

One of the activities included in this study as a form of ill-treatment is the transfer of detainees to Madrid in an awkward position, with the back bent forward and the head placed between the knees. Other acts described during transfer were sight deprivation, threats and beatings.

[5.c.iii.] Principal methods of ill-treatment and/or torture described

Table 5.5. shows the methods described of ill-treatment and/or torture with a frequency of > 10%.

Table 5.5. Methods of ill-treatment and/or torture described. Frequency and percentage.

	N	%
Physical torture	281	97
Beatings	245	85
Awkward/forced position	210	73
Standing for prolonged periods	145	50
Exposure to noise	126	44
Plastic bag	105	36
Physical exertion	102	35
Shoving	75	26
Hair pulling	63	22
Banging on objects	58	20
Methods of deprivation	255	88
Visual deprivation	164	57
Sleep deprivation	161	56
Constant interrogation	124	43
Sexual torture	197	68
Sexual humiliation	131	45
Partial or total forced nudity	104	36
Blows to the genital area	82	28
Fondling	80	28
Threats	279	97
Of torture or physical abuse	214	74
Against others	193	67
Of execution	107	37
Humiliation	192	67
Coercive techniques	236	82
Memorisation/forced signing of false confessions	152	53
Hearing acts of torture	128	44
Incongruent actions	73	25
Feigned execution	44	15
Blind obedience	40	14
Other	61	21
Communication techniques	206	71
Good cop/bad cop	126	44

False information	125	43
-------------------	-----	----

Methods of physical violence. Beatings

The different methods of physical torture with violence are listed in *Table 5.5*. *Table 5.6* summarizes the findings regarding beatings.

Blows were generally delivered to the head with the hand (and to a lesser degree with a phonebook or similar instrument). Kicks were most often delivered to the legs. Blows to the genital area are described in the paragraph on sexual ill-treatment and/or torture.

Table 5.6. Beatings: Instrument of delivery and part of body receiving the blow.

	N	%
Beatings	245	85
<i>Instrument of delivery</i>		
Hand	174	60
Fist	67	23
Foot	59	20
Phonebook or similar	56	19
Other	20	7
Not specified	45	16
	N	%

<i>Part of body receiving blow</i>		
Head/face	214	74
Thorax/abdomen	65	23
Legs	35	12
Back	31	11
Generalized	29	10
Neck	28	10
Not specified	18	6
Sensitive areas	10	3
Arms	3	1

Physical exhaustion techniques

Physical exhaustion techniques were among the most commonly reported, with a frequency of 87% (N = 251). The different methods are listed here in decreasing order: being forced to remain in awkward/uncomfortable positions for extended periods of time, being forced to stand for prolonged periods, and physical exertion (forced physical exercises) (*Table 5.5*).

As regards being kept in awkward/uncomfortable positions for extended periods of time, the detainees reported two moments when this generally took place. One of them was while being transferred from the place of arrest to Madrid. The most common practice was being forced to bend the back forward, placing the head between the thighs, a posture which was

painful when held too long. Another moment was during the interrogations, often resulting in physical exhaustion and pain in the affected joints.

As for standing for prolonged periods, detainees also reported two moments. One was during interrogations and the other was in the cell, where the detainee was not allowed to sit or lie down.

Asphyxiation techniques

The frequency of asphyxiation techniques was 41% (N = 119). The most common was asphyxiation by plastic bag, accounting for 105 cases. Other methods (i.e. thoracic pressure) (n = 22), obstruction of mouth-nose (n = 16) and submarine (n = 4) were reported sporadically.

Electricity

According to detainee accounts, 13 were subjected to electric shocks.

Exposure to extreme temperatures, acoustic aggression and exposure to light

A review of the legal claims and testimonies revealed 97 cases (34%) of situations compatible with exposure to extreme temperatures: 57 reports of cold (20% of total), 34 reports of heat (12%) and 30 cases of wet conditions (10%). There were numerous reports of detainees experiencing cold temperatures in the prison cells and not being provided with proper protective clothing. With regard to wet conditions, there were several reports of detainees being doused with cold water during interrogations, generally associated with the staging or threat of applying electrodes.

44% of the detainees reported some type of police practice categorised by the evaluators as exposure to loud noise (acoustic aggression). Two situations were observed. The first was to subject detainees to continuous noise while in their jail cells; noises included the constant opening and closing of doors or locks, or playing very loud music, keeping detainees from being able to sleep. The second activity categorised as constant exposure to noise took place during the interrogations, consisting in officers shouting in detainees' ears or banging on furniture or walls during the interrogations.

Exposure to light (n = 75) included cases in which detainees complained of lights being on constantly in the cell; coupled with other factors, this kept them from being able to sleep or rest while in custody.

Sandwich

Included in this category is a practice used to prevent detainees from moving and defending themselves while being subjected to another kind of physical torture. The detainee was wrapped in a blanket or foam pad, or 'sandwiched' between two foam pads, while being interrogated or subjected to other types of torture. This activity was reported by 45 detainees (16% of total).

Deprivation techniques

Deprivation techniques were gleaned from 255 testimonies/legal claims (88% of total).

Table 5.5. shows the percentages of the most common techniques: sight deprivation, sleep deprivation and constant interrogation. Food deprivation at some point during the detention, hygiene deprivation and insufficient treatment of illness (in some case, this included preventing detainees from using glasses) accounted for a frequency of between 6 to 7%.

Sexual ill-treatment and/or torture

68% of the sample analysed reported some method of sexual torture. Humiliation was the most common method: 67 detainees reported being subjected to humiliation of a sexual nature directed at themselves; 28 reported sexual humiliation directed at partners or family members, and 36 at themselves and partners or family members. Other methods with a high frequency were forced nudity during interrogations, blows to the genital area and fondling. As for the latter two, there were also cases involving aggravating circumstances, i.e. using truncheons or guns and threatening to insert them into detainee's vagina or anus.

Other methods described much less frequently were inserting an object in the anus (9 cases), electric torture (2 cases) and inserting an object in the vagina (1 case). Other types of methods were reported by 21 detainees.

Coercive techniques Threats, humiliation and others

Threats were reported by practically all of the detainees. There was also a high frequency of humiliation/insults, the forced signing of false confessions and hearing acts of torture. The category "memorisation/forced signing of false confessions" included cases in which detainees described being forced to memorise a statement imposed by the police or were told, under coercive conditions, what they should and should not say to the forensic doctor, judge, lawyer, etc. Hearing acts of torture included cases in which detainees, while in their cells or being interrogated, heard screams and sobs of people they thought were being

tortured. In some instances the detainees later thought that the scenes may have actually been staged. The category of incongruent actions included testimonies in which the detainee was coerced into revealing information or performing actions with ideological content. The category 'other' mainly includes actions which would induce feelings of guilt by detainees (being told that due to their actions a family member or partner was or could be in jeopardy, e.g. arrested or suffer a health related problem).

Communication techniques

Methods of this type were alleged by 206 detainees (71%). The good cop-bad cop routine and the use of false information were the most commonly found (*Table 5.5.*). False information generally consisted of news that family members/partners had been arrested, had suffered a serious illness or had died. Most of the cases of "benefits" had to do with police making offers in exchange for cooperation.

[5.c.iv.]. Influence of independent demographic, procedural and criminological variables.

Gender (*Figure 5.1.*)

The frequency of allegations of ill-treatment and/or torture at the place of arrest was higher among males than females (27% versus 6%; $p < 0.01$).

Figure 5.1. shows the methods of ill-treatment and/or torture that were were statistically significant with regard to gender. The greatest differences were found in sexual torture, although noticeable differences were observed between men and women for most of the methods. Methods involving physical violence were more predominant among males (blows to the genital area, twisting or squeezing of the testicles), while humiliation and fondling were more predominant among women. The distribution of type of sexual humiliation also varied between males and females ($p < 0.001$). Male detainees frequently reported humiliation associated with a third person, often their partner (who in some cases were detained with them) (61% versus 15% among reports of sexual humiliation). For female detainees, the humiliating remarks always had to do with the detainee herself. The percentage of allegations of the following techniques was statistically higher among men than women: beatings, sleep deprivation, threats of execution and threats against others. In contrast, the frequency of hair pulling was higher among women.

Age of detainee

Only two methods of torture showed statistically significant differences in mean age: asphyxiation by plastic bag and forced nudity. In both cases the average was higher for detainees subjected to this type torture than for those who were not (27 versus 25 years for both techniques; $p < 0,05$).

Law enforcement agency (*Figure 5.2*) (*Figure 5.3*).

Without a doubt, the most decisive independent variable in the distribution of methods of ill-treatment and/or torture was the law enforcement agency making the arrest.

The frequency of allegations of ill-treatment and/or torture during transfer was higher among detainees arrested by the Civil Guard (74%) and National Police (62%) than by the Basque Police (18%) ($p < 0.001$).

The frequency of allegations of beatings was higher among detainees arrested by the Civil Guard and lower among detainees arrested by the Basque Police. After identifying the allegations of beatings, a different distribution was observed for the instrument of delivery and area receiving the blow in terms of law enforcement agency. Detainees arrested by the Civil Guard and the National Police reported a higher frequency of beatings with the hand; reports of beatings with phonebooks or similar items were more frequent among detainees arrested by the Civil Guard, and kicks were more frequently associated with the Basque Police. There were also differences with regard to the part of the body receiving the blow. There were other statistically significant differences for allegations of shoving and banging on objects (highest among the Basque Police group).

Physical exhaustion techniques revealed a different pattern in relation to law enforcement agency. The National Police used these techniques the least. Awkward positions were reported by 93% of detainees arrested by the Basque Police. Moreover, the detainees typically associated this technique with interrogations. On the contrary, there were very few reports of the Basque Police – or the National Police – forcing detainees to perform physical exercises (push-ups or similar callisthenics). As many as 57% of the detainees did, however, report this practice associated with the Civil Guard.

A clear difference between law enforcement agencies was observed once again in the use of asphyxiation techniques. As many as 81% of the detainees arrested by the Civil Guard reported some type of asphyxiation method, and as many as 78% claimed they had been subjected to the so-called plastic bag technique. In contrast, there were no reports of the plastic bag being used by the Basque Police.

All 13 allegations of electric torture were made by detainees arrested by the Civil Guard. This method was not described by detainees arrested by the National Police or the Basque Police. In relation to law enforcement agency, extreme temperature practices were more frequent among detainees arrested by the Civil Guard (47%), followed by the Basque Police (36%), and in last place the National Police (19%). Particularly indicative is the "doused with water" category, with a frequency of 21% by the Civil Guard and 0% by the National Police.

One of the methods of torture showing a clearly marked difference with regard to police force is "exposure to noise". As many as 84% of the detainees arrested by the Basque Police reported noise exposure, while figures for the Civil Guard and National Police were 39 and 33%, respectively.

The so-called "sandwich" method was practiced almost exclusively by the Civil Guard (36%); only one person detained by the National Police and none by the Basque Police reported this method.

According to the claims included in this study, the frequency of deprivation methods was significantly higher ($p < 0.001$) among detainees arrested by the Civil Guard (96%) and the Basque Police (93%) than by the National Police (80%). Reports of sight deprivation were much more frequent from detainees arrested by the Civil Guard. Reports of sleep deprivation were highest among detainees arrested by the Basque Police.

The total frequency of sexual torture was much more prevalent among detainees arrested by the Civil Guard (83%) than by the Basque Police (60%) or the National Police (58%) ($p < 0.001$). Moreover, all of the methods were more frequent in the Civil Guard group. A comparison between the other two police forces revealed another difference. Reports of physical violence to the genital area were relatively high among the group of detainees arrested by the National Police, while the frequency of fondling was relatively low. The opposite phenomenon was observed for the Basque Police.

Based on the sample analysed, there were statistically significant differences between the actions of the different law enforcement agencies and the numerous psychological torture methods used (*Figure 5.3*). Threats of execution, threats of torture (or physical or psychological harm), hearing acts of torture (including sounds of suffering such as sobs and moans) and incongruent actions were all more frequent in the Civil Guard group. None of the reports suggesting feigned executions were associated with the Basque Police. In contrast, the percentage of humiliation/insults by the Basque Police was significantly high.

Most (or all) of the "other" threats reported by detainees referred to threats by the Basque Police of being turned over to the Civil Guard.

Year of detention

The "year of detention" variable was grouped into three-year periods: 2000-02; 2003-05; and 2006-08.

Using the $X\chi^2$ test, statistically significant differences were observed in the following methods: beatings, physical exertion, awkward position, asphyxiation by plastic bag, blows to the genital area, sexual humiliation, other threats, and feigned execution. Nonetheless, due to the association between the independent variables "year of detention" and "law enforcement agency" (*Table 5.4.*), a logistic regression analysis was performed on the two variables. With this test we observed that all of the methods of ill-treatment and/or torture reported were significant for the law enforcement agency. However, significant differences ($p < 0.05$) were only obtained for the three-year period for the methods of physical exertion, blows to the genital area and other threats. The first of these techniques was more frequent in the third period, while the other two methods were used less frequently in subsequent three-year periods (*Figure 5.4.*).

[5.d.] Specific analysis of medical-forensic reports. Alleged methods of torture. Associated factors

The sample consisted of the medical-forensic reports on 146 incommunicado detainees over the period from 2000-2008.

We analysed a total of 507 reports, with an average of 3.5 reports per detainee. The number of reports available from each detainee was as follows (*Table 5.7.*):

Table 5.7. Number of medical-forensic reports per detainee

Number of reports per detainee	Number of detainees	%
1	12	8.2%
2	22	15.1%
3	30	20.5%
4	42	28.8%
5	29	19.9%
6	9	6.2%
7	1	0.7%
8	1	0.7%

114 (78%) of the detainees were men and 32 (22%) women. The age range was from 18 to 55 years with an average of 27 years (standard deviation 6 years). The age of the detainee was not known in 32 cases. The number of detainees per year and per law enforcement agency is shown in *Table 5.8.*

Table 5.8. Number of detainees per year and law enforcement agency

Year of detention	Number of detainees	%
2000	14	9.6%
2001	11	7.5%
2002	47	32.2%
2003	33	22.6%
2004	14	9.6%
2005	19	13.0%
2006	1	0.7%
2007	4	2.7%
2008	3	2.1%

Law enforcement agency	Number of detainees	%
Basque Police	21	14.4%
Civil Guard	74	50.7%
National Police	51	34.9%

[5.d.i.] References to ill-treatment and/or torture described in the reports. General data.

Table 5.9. shows data from the medical-forensic reports with regard to content description.

Table 5.9. References to ill-treatment and/or torture in

References to ill-treatment/torture	Number of detainees	%
Yes	89	61.0%
No	15	10.3%
Inconclusive	24	16.4%
No + Inconclusive	18	12.3%

61% of the detainees alleged ill-treatment and/or torture in one or more of the medical-forensic reports.

In 10% of the cases the medical-forensic report(s) contained no allegations of ill-treatment and/or torture. In many reports the existence of ill-treatment was only denied in a partial fashion. This category included reports with statements including "the detainee does not refer to ill-treatment", "the detainee does refer to physical ill-treatment", "the detainee does not refer to beatings", "the detainee refers to correct treatment" or "good treatment". Only a minority of reports specify that "the detainee does not refer to physical or psychological ill-treatment".

For 16% of the detainees there were no references to any allegations of ill-treatment and/or torture, either because the detainee did not answer the question ("non-collaboration"), the information was not described ("No", i.e. data not indicated), or because the language was ambiguous.

In 12% of the cases, some of the reports state that the subject did not refer to ill-treatment, while other examinations of the detainee did not include this information.

[5.d.ii.] References to ill-treatment and/or torture in relation to variables of gender, age, law enforcement agency and year of detention *(Tables 5.10)*.

Gender	Male (n=114)		Female (n=32)	
References to ill-treatment/torture	Number of detainees	%	Number of detainees	%
Yes	72	63.2%	17	53.1%
No	7	6.1%	8	25.0%
Inconclusive	22	19.3%	2	6.3%
No + Inconclusive	13	11.4%	5	15.6%

Law enforcement agency	Basque Police		Civil Guard		National Police	
References to ill-treatment/torture	Number of detainees	%	Number of detainees	%	Number of detainees	Col %
Yes	14	66.7%	47	63.5%	28	54.9%
No	1	4.8%	7	9.5%	7	13.7%
Inconclusive	6	28.6%	12	16.2%	6	11.8%
No + Inconclusive	0	0%	8	10.8%	10	19.6%

Year of detention	2000-2002		2003-2005		2006-2008	
	Number of detainees	%	Number of detainees	%	Number of detainees	%
Yes	45	62.5%	38	57.6%	6	75.0%
No	8	11.1%	7	10.6%	0	0%
Inconclusive	13	18.1%	9	13.6%	2	25.0%
No + Inconclusive	6	8.3%	12	18.2%	0	0%

There were no statistically significant differences in the frequency of detainees who claimed ill-treatment and/or torture with regard to gender, time period and law enforcement

agency. The average age of detainees who alleged ill-treatment and/or torture was similar to the rest (26 and 27 years, respectively; not significant).

[5.d.iii.] Methods of torture

Data on the different methods of ill-treatment and/or torture described in medical-forensic reports are presented in *Table 5.11.*

Table 5.11. Methods of ill-treatment and/or torture described in medical-forensic reports

	Number of detainees N = 146
Physical torture	
<i>Methods of physical violence</i>	
Beatings	52
Hair pulling	8
Electricity	2
Other	14
<i>Physical exertion</i>	
Awkward/uncomfortable positions	37
Physical exercises	10
<i>Asphyxiation</i>	
Plastic bag	21
Submarine	1
Psychological torture	
Threats	28
Other	40
Sexual torture	
Physical methods	14
Psychological methods	5
Forced nudity	5

Methods of physical violence

Techniques of this type were described in the medical-forensic reports on 61 people (42% of total). The frequency was higher among males (44%) than females (34%), but there was no statistical significance. No significant differences were observed regarding the law enforcement agency making the arrest (the lowest frequency was noted in the group arrested by the National Police; 37%) or the time period.

The most frequently described method was beatings (n = 52). On several occasions the description was limited; in general, blows to the head delivered with the hand were predominant. Other methods of physical violence described were hair pulling, twisting or squeezing of the testicles, shoving, and pressure exerted on some part of the body, with a frequency of between 8 and 3 cases.

The two detainees who claimed to have been subjected to electric torture were arrested in 2001 by the Civil Guard.

Physical exertion methods

Methods in this category were described by 41 detainees (28%), with similar percentages between men and women (30% and 22%, respectively). With regard to the three-year periods, the frequency was 21% in 2000-02, 33% in 2003-05 and 50% in 2006-08. These differences were not statistically significant. The frequency was significantly higher among detainees held incommunicado by the Basque Police (57%) than detainees held by the Civil Guard (26%) and the National Police (20%) ($p < 0.01$).

Of the 41 detainees who alleged this type of torture, 31 reported having been forced to remain in awkward/uncomfortable positions for extended periods of time, 4 to do physical exercises to the point of exhaustion (“push-ups”) and 6 reported both.

All 10 of the detainees who said they were forced to perform physical exercises were men. Nine had been detained by the Civil Guard and one by the National Police. No one arrested by the Basque Police reported this method. The level of statistical significance was $p < 0.05$

Asphyxiation methods

Methods of this type were described in reports on 22 subjects (15% of total). The plastic bag was the most frequently reported method, with 21 cases. Only one case described use of the submarine.

Asphyxiation methods were more frequent among males (17%) than females (6%), although they did not reach statistically different levels.

A particularly significant finding is that this method was only alleged by detainees arrested by the Civil Guard (30% frequency). This practice was also denounced in all three time periods, with a frequency of 29% in 2000-2002, 21% in 2003-2005 and 67% in 2006-2008 (although in the latter there were only 6 cases for the Civil Guard group). The differences were not statistically significant. None of the detainees arrested by the Basque Police or the National Police reported the use of asphyxiation methods.

Psychological methods

The frequency for methods of this type may be underestimated. In several of the reports categorised as "no reference to ill-treatment", it was only specified that there was no reference to physical ill-treatment or beatings. Therefore, the question arises as to whether psychological methods may have been employed.

Fifty-three detainees (36%) made references to some type of psychological ill-treatment. Threats were alleged by 28 detainees and some other type of psychological ill-treatment by 40 (in 15 cases both threats and psychological ill-treatment were described). The violations included in this section were as follows: sleep deprivation, sight deprivation, humiliation, insults, abusive treatment, psychological pressure, hearing cries, sensory deprivation.

No statistically significant differences were observed in gender, although the frequency was higher among males (39%) than females (28%). The frequency was higher among detainees arrested by the Basque Police (62%) than by the Civil Guard (35%) or the National Police (27%). As for three-year periods the frequency was 36% in 2000-02; 35% in 2003-05 and 50% in 2006-08.

Methods of a sexual nature

The medical-forensic reports on 19 detainees (13%) contained allegations of sexual ill-treatment and/or torture. Physical methods were described by 14 detainees, psychological methods by 5 and forced nudity by another 5 (5 of the 19 described more than one method of a sexual nature).

The frequency of these methods was similar between males and females (13% and 12%, respectively); however, the type of method varied between the two genders. All of the 14 cases that involved physical methods were men who described blows to the genitals and/or squeezing of the testicles.

The frequency of allegations of sexual ill-treatment and/or torture was higher for detainees arrested by the Civil Guard (16%) and the National Police (12%) than by the Basque Police.

[6] Discussion

The data presented in this Report are an effort to comply with the mandate handed down to this Office by the Basque Parliament calling for the preparation of an exhaustive and rigorous report on the situation of other victims of human rights violations derived from politically motivated violence. This Report is the result of an exhaustive scientific approach based on data from diverse sources. Despite the difficulties encountered when collecting the data (inherent in documenting human rights violations), the sample size analysed was very large. Data on the existence of allegations of human rights violations among 957 detainees held under the regime of incommunicado detention were studied; in addition, almost 300 legal claims and testimonies of ill-treatment and/or torture and over 500 medical-forensic reports were analysed.

The data in this Report and in the June 2008 Report prepared by this Office (1), together with the information contained in the Basque Institute of Criminology Report on Civil and Political Rights (72) should shed light on a reality which until now had not been clearly published in any official reports, and which represents a major challenge from the institutional perspective.

[6.a.] Main findings of the present report

The results on the incidence and extension of the practice of torture in the study population are, at least, disturbing and should in themselves be considered a serious problem by the competent authorities. The number of detainees arrested under anti-terrorist legislation who claimed ill-treatment and/or torture during the 9-year study period was very high: 634. As many as 47% of the detainees held incommunicado filed legal claims for ill-treatment and/or torture. The estimated incidence for young males is 18 cases per 100,000 inhabitants per year. The figures therefore indicate a serious quantitative problem. The data extracted from the medical-forensic reports (in spite of shortfalls in the amount of information provided) are also significant: as many as 61% of the detainees reported to doctors that they had been subject to ill-treatment and/or torture while held incommunicado.

The Basque Institute of Criminology's Report on Civil and Political Rights, based on a sample similar to ours (incommunicado detainees from the Autonomous Community of the Basque Country), contained data on the declarations of 165 detainees brought before the

Central Examining Court regarding allegations of human rights violations. Six of the detainees did not wish to declare before the judge whether or not they had suffered human rights violations. Sixty-one documents stated that detainees declared some type of human rights violations when their cases were brought before the court. There is no data regarding human rights violations in the remaining 98 declarations. This is either because the detainee refused to provide the information or because there was nothing to indicate as such either affirmatively or negatively (72).

Our findings support the conclusions of other organisations, both national and international (see introduction): the occurrence of ill-treatment and/or torture among detainees held incommunicado is more than just sporadic or incidental.

The description of the different types of ill-treatment/torture with regard to the law enforcement agency that made the arrest is highly significant. The Civil Guard was the police force associated with the most severe pattern of ill-treatment and/or torture. In the first place, it had the highest percentage of allegations of ill-treatment and/or torture; and secondly, it was the agency that used the most flagrant torture methods. Some of the torture techniques were exclusively, or nearly exclusively, claimed to have been practiced by the Civil Guard (plastic bag, electricity, sandwich, physical exertion). The use of several other techniques on detainees held by the Civil Guard was significantly more frequent than on detainees held by the other police forces. On the contrary, detainees held by the Basque Police reported a less severe pattern of physical ill-treatment, and some of the methods practiced by the Civil Guard (i.e., plastic bag, sandwich, electricity) were never reported by this group. However, based on the claims, until 2003 the Basque Police is described as regularly subjecting detainees to awkward positions during interrogations, acoustic aggression and humiliations.

The existence of a characteristic pattern of torture in particular regions in a specific period of time by a specific law enforcement agency has been described in other international publications (73, 74). This fact was considered of interest when assessing the reliability of individual allegations, since similar allegations of torture made by a significant number of detainees arrested by the same police force can support the credibility of the claims (75).

With regard to the distribution of torture methods according to gender, the main differences were observed in sexual torture: women more commonly suffered sexual humiliation,

fondling and other techniques, and men, blows to the genital area. The existence of a different pattern of sexual torture according to gender has been reported in earlier studies on torture victims (76-79).

Compared with preceding decades there has been a change in the type of torture alleged by incommunicado detainees arrested under anti-terrorist legislation. Some of the methods reported in the 1970s, such as the *falanga* (beatings to the feet) or the *barra* (suspension from a rod) are no longer in use; the frequency of other methods such as the *bañera* or submarine, and electric torture have decreased considerably. In contrast, physical exhaustion techniques have increased. The main tendency detected in the period from 2000-2008 was a rise in the method of physical exertion.

[6.b.] Implications of our findings on the contradicting versions of the phenomenon of torture

One of the key elements in documenting allegations of torture is to determine the reliability of the information. It could be argued that some people arrested under anti-terrorist legislation make false allegations of torture in an attempt to damage the reputation of the police forces involved. On the contrary, it has also been suggested that efforts to eradicate torture have been thwarted because States that employ torture deny it occurs due to repercussions within the international community.

This section discusses the implications of the findings from the present Report regarding the contradicting versions of the phenomenon of torture in the Basque Country. Indeed, one of the primary purposes of this Report was to provide credible and verifiable evidence to support or refute the hypothesis that all (or practically all) of the allegations of torture were the result of instructions found in documents attributed to ETA.

The table below shows the correlation between the findings from the present Report and anticipated findings based on the arguments of the Spanish Government.

Anticipated findings based on the arguments of the Spanish Government	Findings from the present Report
There should be no allegations of torture, or at most sporadic or incidental reports, among incommunicado detainees who are released	Percentages of detainees who alleged ill-treatment/torture Released without charges without

without charges, absolved or not prosecuted.	<table border="0"> <tr> <td>being brought before a court</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Released without charges after being brought before a court</td> <td>64%</td> </tr> <tr> <td>Absolved</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>Not prosecuted</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Case dismissed</td> <td>70%</td> </tr> </table>	being brought before a court	35%	Released without charges after being brought before a court	64%	Absolved	69%	Not prosecuted	55%	Case dismissed	70%		
being brought before a court	35%												
Released without charges after being brought before a court	64%												
Absolved	69%												
Not prosecuted	55%												
Case dismissed	70%												
Allegations of torture should be systematic among people who are imprisoned or convicted	<p>Percentages of detainees who alleged ill-treatment/torture</p> <table border="0"> <tr> <td>Imprisonment without solitary confinement</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>Incommunicado imprisonment</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>Convicted</td> <td>79%</td> </tr> </table>	Imprisonment without solitary confinement	69%	Incommunicado imprisonment	92%	Convicted	79%						
Imprisonment without solitary confinement	69%												
Incommunicado imprisonment	92%												
Convicted	79%												
The amount of time held incommunicado should have no effect on the number of torture claims since the supposed instruction says that "In any case of detention, however brief and insignificant (...), you should claim torture".	<p>There is a direct correlation between the duration of incommunicado detention and the frequency of allegations of ill-treatment/torture throughout the sample.</p> <p>Among the detainees already convicted, the frequency of ill-treatment/torture is 52% when incommunicado detention is ≤ 3 days and 88% when longer ($p < 0.001$).</p>												
The types of torture mentioned in the document attributed to ETA ("Talk about interrogations, beatings, asphyxiation by plastic bag or the submarine, the rack and psychological torture") should have a high rate of occurrence. Moreover, the percentage should be similar for all of them. On the contrary, the methods of torture not included in the document should be less frequent than the ones that are mentioned.	<p>The frequency of these methods in testimonies/claims and in medical-forensic reports was as follows:</p> <table border="0"> <tr> <td>Beatings:</td> <td>85%; 36%</td> </tr> <tr> <td>Plastic bag:</td> <td>36%; 14%</td> </tr> <tr> <td>Submarine</td> <td>1.4%; 0.7%</td> </tr> <tr> <td>Rack</td> <td>0% ; 0%</td> </tr> <tr> <td>Interrogations:</td> <td>43%;</td> </tr> <tr> <td>Psychological Tor:</td> <td>100%; 36%</td> </tr> </table> <p>There are numerous methods not mentioned in the document that had much higher frequencies: awkward position 73%; standing for prolonged periods 50%, exposure to noise (44%), physical exertion 35%.</p>	Beatings:	85%; 36%	Plastic bag:	36%; 14%	Submarine	1.4%; 0.7%	Rack	0% ; 0%	Interrogations:	43%;	Psychological Tor:	100%; 36%
Beatings:	85%; 36%												
Plastic bag:	36%; 14%												
Submarine	1.4%; 0.7%												
Rack	0% ; 0%												
Interrogations:	43%;												
Psychological Tor:	100%; 36%												
The distribution of the methods of torture in relation to external variables should be random; in other words, there should be no differences between different law enforcement agencies or between males and female detainees.	<p>The statistical differences seen in many of the techniques based on law enforcement agency are indicative of a differential behaviour pattern.</p> <p>There is a different model of sexual torture with regard to detainee gender.</p>												

In conclusion, the evidence presented in this Report does not support the hypothesis that all or nearly all of the allegations are false and are the product of routine instructions.

Taking into account the present findings, in order to accept the Spanish Government's version we would have to accept all of the following premises:

1. A very significant part of all detainees held incommunicado are instructed to make false allegations of specific methods of ill-treatment and/or torture;
2. A significant percent of the detainees released without charges or eventually absolved or not prosecuted (with no alleged relationship with ETA or other illegal activities) were also instructed to make false claims;
3. A percentage of ETA members/collaborators disobeyed orders by not claiming torture;
4. The complainants disobeyed the instructions set out in the confiscated document, since the torture methods described in the document are not referred to in the allegations (e.g., the submarine and the rack);
5. The instructions to claim torture vary depending on the situation and are not the same for all detainees;
6. Prior to detention, the complainant was told to make different allegations for different law enforcement agencies;
7. Depending on whether claimants are male or female, they received different instructions for certain methods of torture (mainly sexual torture).

Moreover, our findings show that there are other factors that refute the existence of routine instructions to denounce torture. There are three factors we consider particularly significant for denying the existence of instructions to routinely denounce torture:

- If we analyse the data on detainees arrested by the National Police for "conducts without violent activity" (people detained as a result of expanding the concept of terrorism to include activities by the so-called political/social structure) and held by the Central Examining Court No 5, we see that the number of allegations of torture is only 9% (compared to 66% for the overall sample) despite the fact that several people were convicted of being ETA members, leaders or collaborators.
- Another factor considered fundamental in this Report is the absence of allegations of torture brought against the Basque Police since 2004 (inclusive). It is true, however, that the numbers of people detained by this police force have been small. This finding should be interpreted in the context of continued attacks targeted at the Basque Police.

Therefore, as pointed out in the introduction, this change is apparently due to a firmer stance adopted by Basque Government institutions against the practice of torture.

- The duration of incommunicado detention is an essential risk factor (irrespective of the other independent variables) for the existence of ill-treatment and/or torture. The following facts speaks for itself: The frequency of allegations of ill-treatment and/or torture among detainees held incommunicado ≤ 3 days is 52%; the frequency among detainees who are absolved or not prosecuted after being held incommunicado for > 3 days is 70%.

Another aspect that lends credibility to the information on human rights violations provided by international institutions and local NGOs is the fact that there is consensus between the various accounts gathered by the experts who interviewed alleged torture victims, and between their information and the findings in this Report. According to reports by the United Nations Special Reporter on Torture, Amnesty International and the CPT, the methods of torture most commonly reported in Spain are beatings (delivered with the hands, feet, phonebooks), asphyxiation by plastic bag, being forced to stand for prolonged periods, being forced to perform exhausting physical exercises, sexual abuse, threats, hooding and forced nudity.

[6.c.] Reliability/credibility of testimonies in allegations of torture among detainees held incommunicado

In addition to the quantitative findings obtained in this study, mention should also be made to the qualitative aspect of the reliability of allegations of torture. It is not new concept; the leading international human rights monitoring bodies have coincided in their conclusions following their visits to Spain.

After face-to-face interviews with several people detained for their alleged association with ETA, experts from the CPT concluded that the accounts were not of a stereotyped nature, and that they were detailed and largely concordant, displaying variations which were credible in view of the personal circumstances of the individuals concerned. The CPT delegation had the impression that certain of the allegations made could have been somewhat exaggerated; however, on the whole they were credible. The allegations of torture included beatings, asphyxiation (the plastic bag), electric torture, physical exertion techniques and threats. After

previous interviews with detainees who had made allegations of torture, the CPT concluded that there was ample evidence, including of a medical nature, compatible with allegations of ill-treatment (28-34).

The 2004 report by the Special Rapporteur on Torture contained similar terms to express the following: “It is the considered view of the Special Rapporteur, in the light of the internal consistency of the information received and the precision of factual details, that these allegations of torture and ill-treatment cannot be considered to be fabrications” (21). Amnesty International's 2005 Annual Report for Spain pointed out that they had received "a large number of allegations connected with the practice of incommunicado detention", considering that "the precision of factual details provided in relation to a number of allegations suggested that they could not be fabrications” (38).

Although the purpose of this report was not to prove beyond a reasonable doubt whether ill-treatment had occurred in each of the cases analysed, the impression – after reading nearly 300 allegations of torture – is entirely consistent with the statements issued by the three international organisations.

[6.d.] Legal investigation into allegations of torture

As commented in the Methods section, we analysed the testimonies of torture contained in over 250 legal claims, but did not analyse the procedure or the outcome of each complaint. However, we believe that none of the cases ended in a conviction. In this regard, the stance that allegations are false is based on the lack of torture cases sentenced by competent courts of justice.

Nevertheless, a number of sources suggest that other factors may explain the absence of convictions. International watchdog organisations have expressed their deep concern over the lack of activity by the courts to investigate and prevent crimes of torture. The Special Rapporteur on torture in 2004 called attention to "the absence of an effective and prompt investigative practice and policy as regards the issue of torture and ill-treatment" (21).

International experts also expressed dissatisfaction with "substantial delays attending legal investigations into complaints of torture;" and with "the lack of prompt, impartial and exhaustive investigations into all complaints of possible torture and ill-treatment". There have also been reports by various organisations referring to shortcomings in medical forensic examinations (20, 28, 80, 81).

One specific example can be seen in the 17 May 2005 decision issued by the UN Committee against Torture regarding the case of Kepa Urria Guridi. Communication No. 212/2002 (82). The UN Committee against Torture considered that the actions of the State were contrary to its obligations under Article 2 of the UN Convention against Torture, according which requires State parties to take effective measures to prevent acts of torture. The Committee also concluded that the reduction of the sentences and granting of pardons violated Article 4 of the Convention which obliges the authorities to ensure that acts of torture are punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of the offence. The Committee concluded that the victim had not received adequate reparation, as required by Article 14, which should include restitution, compensation, rehabilitation and guarantees of non-repetition. As such, the Committee concluded that the State had violated the Convention and therefore had the obligation to adopt measures to compensate the victim within one year. No measures to this effect have been taken.

A recent empirical study conducted by the Basque Institute of Criminology included an analysis of this matter in a section on grievances filed by detainees for violations of rights (2000 - 2007). (72). The following observations were made: judges and/or public prosecutors rarely propose inquiries during an investigation; most of the evidence is requested by private prosecutors; the evidence requested by private prosecutors is admitted only on rare occasions; other times, the investigations are not based on the complainants' petitions; and, lastly, cases are routinely dismissed for generic reasons. The report considered that these factors "can influence the ability to conduct an effective investigation whereby the persons responsible for crimes of torture can be identified and sanctioned" and "can question the rigour of the investigations and violate the principal of providing guarantees for a fair legal process". The authors of the study concluded that the lack of an exhaustive investigation on allegations of torture made by detainees was the result of the application of anti-terrorist legislation.

Added to the shortcomings in the investigations are the difficulties in collecting evidence due to the existence of spaces which lack effective judicial control (72). In this regard, it should be pointed out that for many of the types of ill-treatment alleged, it is very difficult to obtain medical evidence of their use. The increasingly sophisticated torture techniques used today only rarely leave physical marks which can be associated with the alleged torture.

With regard to the lack of effective safeguards against torture, international experts have cited the following: the absence of prompt full access to a lawyer from the very outset of

police custody; the inability to notify a third person about the detention for up to five days, and the inability to access a trusted medical doctor. For these reasons the report recommended that the State establish transparent and fair procedures in order to carry out independent investigations on allegations of ill-treatment and torture.

[6.e.] Limitations

The first limitation was to identify the detainees held *incommunicado* during the period of time covered by the study. As mentioned in the June 2008 Report, our efforts to access the primary sources from the National High Court were not successful. According to data released by the Ministry of the Interior and included in the White Paper of the Spanish Socialist Party, the total number of detainees was 1231 – 913 ETA and 318 street violence. (83) In the absence of official data, we used a variety of sources and were able to include as many as 957 cases concerning *incommunicado* detainees. Therefore, our sample represents as much as 78% of the official recorded figures. As for the unidentified cases we do not know whether detainees suffered ill-treatment; however, we assume that the cases that did not allege ill-treatment and/or torture have gone unnoticed by the media and the rest of the sources consulted. It is also possible that not all of the 1231 detainees were held *incommunicado*. But even if we assume that none of the unidentified cases suffered ill-treatment and/or torture, the figure is still very high.

We were not able to perform a random sampling of the torture allegations since we did not have access to the judicial proceedings for all of the cases. It was not possible to compare the characteristics of the cases that were included with the cases that were not included, and we cannot discard possible bias in the sample. The methodological difficulties inherent in social sciences tend to be more pronounced for human rights violations. These documentation difficulties apply to all of the studies undertaken so far due to the limited access to relevant information.

The categorization of the methods of ill-treatment and/or torture was based on the spontaneous accounts of the detainees. The subject was considered to have alleged a method when it appeared in the testimony or legal claim. Therefore, if a person was subjected to a method but did not report it, it was not included. With this model, people who have suffered more extreme forms of ill-treatment and/or torture may not describe less

severe methods that might otherwise be described by detainees subjected to less harsh forms of ill-treatment. Nonetheless, human rights experts recommend this method of documentation rather than having former detainees fill in forms or answer direct questions (79). The advantage of the spontaneous testimony approach, as opposed to using a structured questionnaire, is that it is possible to verify the reliability of the accounts.

Another limitation of the present study is that the intensity of the ill-treatment and/or torture was not classified. Events were recorded as either “yes” or “no”. This is particularly important in the case of beatings or blows, since the intensity and frequency of beatings varied significantly among the detainees. In many instances detainees only referred to occasional blows to the head delivered with the hand, whilst in other cases the intensity and frequency of the beatings were relatively significant. This limitation can be extrapolated across most of the methods, including nudity (“yes” was recorded for both partial and total nudity), awkward position, sight deprivation, fondling, etc.

The present Report identifies possible or probable cases of human rights violations which should be further elucidated in a much more concrete and complete study. In other words, the approach used in the present study does not allow each particular account of torture to be individually assessed for reliability. To do so would require the implementation of much broader mechanisms and much more material and human resources.

[7.] Conclusions

1. The data presented, together with the findings of both international monitoring bodies and national studies, suggest that torture is a serious problem in Spain in relation with incommunicado detainees and that measures for preventing torture are deficient and ineffective.
2. Our findings are in consonance with the data described by international organisations after their visits to Spain. While the practice of torture cannot be considered systematic in Spain, evidence in the risk population identified in this study suggests that we are dealing with a human rights problem of considerable incidence and extent.
3. According to data from the Ministry of Interior, there were 1231 detainees; drawing from the sources used, we identified 957. 634 of the cases involved allegations of ill-treatment and/or torture. Assuming that of the 274 detainees we did not identify, none of them had their rights violated, the frequency of allegations of ill-treatment and/or torture was 51% (634/1231). This figure is supported by the medical-forensic reports, in which 60% of incommunicado detainees alleged ill-treatment and/or torture, and by the frequent allegations of violations of detainees' rights brought before the Central Examining Court.
4. There are several independent criminological and procedural variables associated with the frequency of allegations of ill-treatment and/or torture: reason for detention, duration of incommunicado detention, law enforcement agency making the arrest, and legal status following confinement.
5. The duration of incommunicado detention – irrespective of other variables – is associated with the frequency of allegations of ill-treatment and/or torture: the risk rises sharply when the period of incommunicado detention is more than 3 days.
6. Based on the allegations analysed, a different model of ill-treatment and/or torture was observed for each law enforcement agency. Different models of allegations of ill-treatment and/or torture were also found between men and women. Compared with previous decades, the use of some torture methods declined (submarine, electricity), while others disappeared entirely (suspension, rack); an increase was observed in physical exhaustion techniques.
7. Since 2004 the Basque institutions have demonstrated a strong commitment against torture, a fact made evident by the lack of allegations of torture brought against the

Basque Police. This fact seems to reflect the importance of the firm political and institutional commitment against human rights violations of this type.

8. Among the detainees arrested by the National Police for “Conducts without violent activity” (people detained as a result of expanding the concept of terrorism to include activities by the so-called political/social structure) and brought before Central Examining Court No. 5, the prevalence of allegations of ill-treatment and/or torture was low (9%), despite the fact that several people were convicted of being ETA members or leaders, or of collaborating with the organisation.
9. Our findings did not support the hypothesis that all or nearly all of the allegations of torture are false and are the product of routine instructions. There are a number of statistical indicators that contradict the hypothesis
10. Our analysis is also in consonance with the observations of the CPT, the United Nations Special Rapporteur on Torture and Amnesty International that the allegations of torture cannot be considered mere fabrications.

[8.] Recommendations

The approach used in the present study does not allow each particular account of torture to be individually assessed for reliability. Such a task would call for the implementation of much broader mechanisms and much more material and human resources. Following this report, the next step in documenting allegations of torture and compensating the victims is for each of the claims to be analysed and evaluated in a thorough, systematic fashion by a multidisciplinary team of jurists, criminologists, physicians, psychologists, etc. The procedure could be similar to that used by other European countries for immigrants seeking political asylum to avoid torture.

This task cannot in any way replace the necessary investigation by ordinary courts or the prosecution and effective sanction against crimes of torture.

Moreover, in addition to the implications for establishing measures for the moral recognition and reparation of victims, the findings must also point toward the need to adopt effective preventive mechanisms against torture. Priorities for the prevention of torture and ill-treatment include the implementation of audio/video recording systems throughout the detention period, the participation of a trusted medical doctor during the forensic doctor's examination, the effective supervision of the judge responsible for the detention, including visits to the detainee, and the design of external independent monitoring mechanisms.

In any event, the abrogation of the incommunicado regime is undeniably a critical factor in reducing the number of allegations of this type of human rights violations.

[9.] References

1. Landa Gorostiza JM. Office on Human Rights Department of Justice, Employment and National Insurance. Basque Government Report on Victims of Human Rights Violations Derived from Politically Motivated Violence. Vitoria-Gasteiz. June 2008.
2. United Nations Committee against Torture: Spain. 23/12/02, CAT/c/CR/29/3.
3. Stover E, Nightingale EO. The medical profession and the prevention of torture. *N Engl J Med* 1985;313:1102-4
4. Harding TW. Prevention of torture and inhuman or degrading treatment: medical implications of a new European Convention. *Lancet* 1989;27:1191-1193
5. American College of Physicians. The role of physician and the medical profession in the prevention of international torture and in the treatment of its survivors. *Ann Intern Med* 1995;122:607-613.
6. Geiger HJ, Cook-Deegan MC. The role of physicians in conflicts and humanitarian crises. *JAMA* 1993; 270:616-620.
7. Rasmussen OV. Medical aspects of torture. *Dan Med Bull* 1990;37(Suppl 1):1-88.
8. Thomsen JL, Helweg-Larsen K, Rasmussen OV. Amnesty International and the forensic sciences. *Am J Forensic Med Pathol* 1984;5:305-311.
9. Petersen HD, Wandall JH. Evidence of physical torture in a series of children. *Forensic Sci Int* 1995;75:45-55.
10. The truth of torture [editorial]. *Lancet* 1996;347:1345.
11. Goldfeld AE, Mollica RF, Pesavento BH, Faraone SV. The physical and psychological sequelae of torture. *JAMA* 1988;259:2725-2729.
12. Jandoo R. Human rights abuses and the medical profession. *Forensic Sci Int* 1987;35:237-247.
13. Petersen HD, Christensen ME, Kastrup M, Thomsen JL, Foldspang A. General health assessment in refugees claiming to have been tortured. *Forensic Sci Int* 1994;67:9-16.
14. Iacopino V, Heisler M, Pischevar S, Kirschner RH. Physician complicity in misrepresentation and omission of evidence of torture in postdetention medical examinations in Turkey. *JAMA* 1996;276:396-402.
15. Quiroga J; Jaranson JM. Politically-motivated torture and its survivors. A desk study review of the literature. *Torture* 2005;15:1-111.
16. Mandel L., Worm L. Documentation of torture victims. Implantation of medico-legal protocols. *Torture* 2007;17:18-26.
17. Moisander PA, Edston E. Torture and its sequel – a comparison between victims from six countries. *Forensic Sci Int* 2003;137:133-40.
18. Reis C, Ahmed AT, Amowitz LL, Kushner AL, Elahi M, Iacopino V. Physician participation in human rights abuses in southern Iraq. *JAMA*. 2004; 291: 1480-6. Erratum in: *JAMA*. 2004;291:2316.
19. Morentin B., Idoyaga M.I., Callado L.F. and Meana J.J. Prevalence and methods of torture claimed in the Basque Country (Spain) during 1992-1993. *Forensic Sci Int* 1995;76:151-8.

20. Petersen HD, Morentin B, Callado LF, Meana JJ, Idoyaga MI. Assessment of the quality of medical documents issued in central police stations in Madrid, Spain: the doctor's role in the prevention of ill-treatment. *J Forensic Sci* 47 (2002) 293-298. Erratum in *J Forensic Sci* 47 (2002) 928.
21. Report of the Special Rapporteur on the question of torture, Theo van Boven, E/CN.4/2004/56/Add.2, dated 6 February 2004, written on his visit to Spain.
22. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, 2008. A/HRC/10/3/Add.2, dated 16 December 2008
23. <http://www.secuestro-emocional.org/main/DenunciasFalsas-Manual-ETA.htm> .
24. E/CN.4/2004/SR.34 Mrs. de RIVERO (International Service for Human Rights). Human Rights Committee Press Service, session of 31 March 2004, response by Spanish Ambassador Joaquín Pérez-Villanueva Y Tovar to Special Rapporteur against Torture.
25. Document CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1, 13 January 2009, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant. Addendum. Comments by the Government of Spain on the concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/ESP/CO/5).
26. Observations by the Government of Spain Report on the report of the Special Rapporteur on the question of torture, E/CN.4/2004/G/19, 4 May 2004. United Nations Human Rights Committee, 60th Session, Topic 11 of provisional programme.
27. Basque Government Department of Justice, Employment and National Insurance, Department of Health and Department of Interior. Basque Police Protocol. Protocol for the coordination of assistance for detainees held in the regime of incomunicado. 2003.
28. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 1 to 12 April 1991. CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 1) - Publication Date: 5 March 1996. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-1.htm>. Accessed January 30, 2007.
29. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 22 April 1994 CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 2) - Publication Date: 5 March 1996. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-2.htm>. Accessed January 30, 2007.
30. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 14 June 1994 Ref.: CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 3) - Publication Date: 5 March 1996. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1996-09-inf-eng-3.htm>. Accessed January 30, 2007.
31. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17 to 18 January 1997. Ref.: CPT/Inf (2000) 3 [EN] - Publication Date: 13 April 2000. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2000-03-inf-eng.htm>. Accessed January 30, 2007.

32. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 28 April 1997. Ref.: CPT/Inf (98) 9 [EN] - Publication Date: 19 May 1998. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/1998-09-inf-eng.htm>. Accessed January 30,2007.
33. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 November to 4 December 1998. Ref.: CPT/Inf (2000) 5 [EN] - Publication Date: 13 April 2000. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2000-05-inf-eng.htm>. Accessed January 30,2007.
34. European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 to 26 July 2001. CPT/Inf (2003) 22. Publication [13/03/2003]. <http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-22-inf-eng.htm>. Accessed January 30,2007.
35. Report by Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, Council of Europe, on his visit to Spain from 10 to 19 March 2005, CommDH(2005)8
36. Report of the United Nations Committee against Torture, in its twenty-ninth session, on compliance with the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT/C/XXIX/Misc.3, dated 19 November 2002.
37. United Nations Human Rights Committee fifth periodic report of Spain CCPR/C/ESP/CO/5/, October 2008
38. Amnesty International 2005 Annual Report for Spain. AI Index: POL 10/006/2005. http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/Mas_20alla_20del_20papel.pdf
39. Amnesty International."Adding insult to injury: The effective impunity of police officers in cases of torture and other ill-treatment" (EUR 41/006/2007),
40. Amnesty International Report 2007. State of the world's human rights. AI Index: POL 10/001/2007. <http://report2007.amnesty.org/document/172>
41. "Setting an Example? Counter-Terrorism Measures in Spain" HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 17 NO. 1(D), January 2005
42. World Organisation Against Torture (OMCT) and Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Human Rights violations in the Spanish state. Lizarra., 2006.
43. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La Tortura en el Estado español, 2004. <http://www.prevenciontortura.org/InformeCPT.pdf>
44. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La Tortura en el Estado español, 2005. <http://www.prevenciontortura.org/informe2005/Informe2005.pdf>
45. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La tortura en el Estado español, 2006. <http://www.prevenciontortura.org/spip/documents/2006-InformeCPT.pdf>
46. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La tortura en el Estado español 2007. Informe

47. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La tortura en el Estado español 2008. Primer borrador, informe en elaboración.
48. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Torture in the Basque Country. TAT 2000 report. Bilbao 2001.
49. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Torture in the Basque Country. TAT 2001 report. Bilbao 2002.
50. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Torture in the Basque Country. TAT 2002 report. Bilbao 2003.
51. . Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Torture in the Basque Country. TAT 2003 report. Bilbao 2004.
52. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Torture in the Basque Country. TAT 2004 report. Bilbao 2005.
53. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Torture in the Basque Country. TAT 2005 report. Bilbao 2006.
54. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Torture in the Basque Country. TAT 2007 report. Bilbao 2008.
55. Torturaren Aurkako Taldea (TAT). Tortura Euskal Herrian. TAT 2008 report. Bilbao 2009.
56. Website of the Spanish Ministry of the Interior. <http://www.mir.es/>
57. Report E/CN.4/2001/66/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Theo van Boven.
58. Report E/CN.4/2002/76/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Theo van Boven.
59. Report E/CN.4/2003/68/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Theo van Boven.
60. Report E/CN.4/2004/56/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Theo van Boven.
61. Report E/CN.4/2005/62/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Manfred Nowack.
62. Report E/CN.4/2006/6/Add.1 of the Special Rapporteur on the question of torture Manfred Nowack.
63. Amnesty International. Amnesty International Report 2008 The State of the World's Human Rights. AI Index: POL 10/002/2008. <http://thereport.amnesty.org/>
64. Amnesty International Report 2006. The State of the World's Human Rights. AI Index: POL 10/001/2006. <http://www.amnesty.org/en/library/info/POL10/001/2006>
65. Amnesty International. Report 2004: Amnesty International. Report 2004. Resonaron las voces de los jamás escuchados. <http://asiapacific.amnesty.org/report2004/index-esl>
66. Amnesty International Annual Report 2003. AI Index: POL 10/006/2003/. <http://www.amnesty.org/en/library/info/POL10/006/2003>
67. Amnesty International Annual Report 2002. AI Index: EUR 01/007/2002)
68. Amnesty International Annual Report 2001. AI Index: POL 10/001/2001
69. Amnesty International Annual Report 2003. AI Index: POL 10/001/00
70. Spanish National Statistics Institute. <http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp>
71. Bojholm S, Foldspang A, Juhler M, Kastrup M, Skylv G, Somnier F. Monitoring the health and rehabilitation of torture survivors. The Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, Copenhagen, 1992.
72. Instituto Vasco de Criminología. Informe sobre Derechos Civiles y Políticos del Instituto Vasco de Criminología (Report on Civil and Political Rights) 2007-2008.
73. Paz AB, Portillo C, Arestivo C, Métodos de tortura empleados en Paraguay. In A.B. Paz, C. Portillo, C. Arestivo (eds.), *Médicos, ética y tortura en Paraguay*. RP ediciones. Asunción, 1992, pp. 29-33.
74. Petersen HD, Wandall JH, Evidence of organized violence among refugees from Indian-held Kashmir. *Torture*, 4 (1994) 90-95.
75. Petersen HD, The controlled study of torture victims. *Scand. J. Soc. Med.*, 17 (1989) 13-20.

76. Lunde I, Ortmann J. Prevalence and sequelae of sexual torture. *Lancet* 1990;336:289-91.
77. Meana JJ, Morentin B, Callado LF, Idoyaga MI. Prevalence of sexual torture in political dissidents. *Lancet* 1995;345:1307.
78. Goldfeld AE, Mollica RF, Pesavento BH, Faraone SV, The physical and psychological sequelae of torture. *J. Am. Med. Assoc.*, 259 (1988) 2725-2729.
79. Rasmussen OV, Medical aspects of torture. *Dan. Med. Bull.*, 37(suppl.1) (1990) 1-88.
80. Morentin B, Petersen HD, Callado LF, Idoyaga MI, Meana JJ. A follow-up investigation on the quality of medical documents from examinations of Basque incommunicado detainees. The role of the medical doctors and national and international authorities in the prevention of ill-treatment and torture. *Forensic Science International* 2008;182:57-65.
81. Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Preliminary report, UN Committee against Torture. Fifth Periodic Report – November 2009.
82. UN Committee against Torture, 17 May 2005. Communication No. 212/2002.
83. PSOE. “Libro Blanco del PSOE” 2008. www.psoe.es/download.do?id=122146